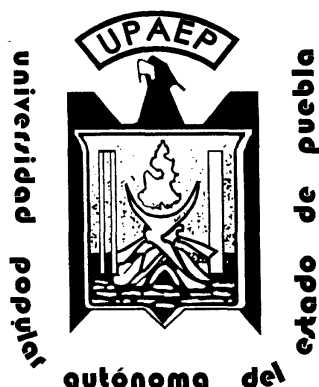




**UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE PUEBLA.**

FACULTAD DE DERECHO

**ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ADHESIÓN DE
MÉXICO A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL**

TESIS

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO**

PRESENTA:

CARLA VERONICA HINOJOSA POLO

PUEBLA, PUE.

2002



UPAEP – Secretaría General

Dirección General de Apoyos Académicos

Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación.

Biblioteca Central - **Karol Wojtyla**

Tesis Digitales Restricciones de uso:

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento.

Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

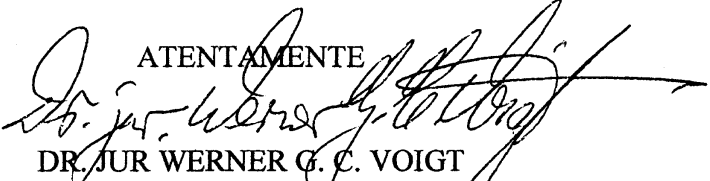


Puebla, Puebla a 29 de Octubre de 2002.

MTRO. JOSE FRANCISCO VILLARREAL REYNA
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
ECONOMICAS Y SOCIALES.
P R E S E N T E

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y a su vez hago de su conocimiento la aprobación de la tesis denominada: "ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ADHESION DE MEXICO A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL" de la alumna CARLA HINOJOSA POLO con matrícula 50948 de la FACULTAD DE DERECHO.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

DR. JUR. WERNER G. C. VOIGT
TITULAR DE LA CARRERA DE DERECHO

Puebla, Pue. a 29 de Octubre de 2002.

ASUNTO: NOMBRAMIENTO DE ASESOR
DE TRABAJO DE TESIS.

DR. JUR. WERNER G. C. VOIGT
P R E S E N T E.

El que suscribe Mtro. José Francisco Villarreal Reyna Director del Departamento de Ciencias
Económicas y Sociales, en cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Titulaciones de esta
Institución de Educación Superior, he tenido a bien nombrarle a usted, - - - - -
- - - - -

Como: A S E S O R

Del trabajo de tesis: "Aspectos Negativos de la adhesión de México a la Corte Penal Internacional"
Que elabora la C. Carla Verónica Hinojosa Polo, No. de Matrícula 50948.

Para obtener el título de:

LIC. EN DERECHO

ATENTAMENTE
"LA CULTURA AL SERVICIO DEL PUEBLO"

MTRO. JOSE FRANCISCO VILLARREAL REYN.
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES



Dedico la presente tesis:

A ti mamá por tu paciencia, preocupación y apoyo para poder estar hoy donde estoy, y por compartir conmigo la felicidad de este momento.

A ti Sergio por tu ayuda, tu apoyo y consejos en todo momento y por ser un ejemplo de disciplina y superación.

A ustedes hermanos Berno y Gaby por su ayuda y cariño.

A la familia Limón por su cariño, su interés y apoyo incondicional siempre.

A usted Doctor Werner Voigt por enriquecer con sus conocimientos y tiempo este trabajo; por contagiarme la pasión de aprender cada día más.

A usted Licenciado Rogerio Zambrano por enseñarme que el mundo esta hecho de obligaciones, y que en la medida que uno cumple con ellas, adquiere derechos.

A ti Luisa por tener siempre una palabra de aliento, por acompañarme y enseñarme a mirarlo todo con más calma.

A ti Natalie por hacerme reír y disfrutar los días en la universidad que sin duda siempre ocuparán un lugar importante en mi corazón.

A ti Alvaro por enseñarme que soy capaz de vencer todos los obstáculos que se presenten, por luchar a mi lado y por que tu amor me alienta a ser cada día mejor.

ÍNDICE

Introducción.....	1.
--------------------------	-----------

Capítulo 1.

Antecedentes.....	5.
--------------------------	-----------

1.1 Juicios de Nüremberg y Tokio	6.
1.1.1 Tribunal Militar de Nuremberg.....	7.
1.1.2 Tribunal Militar Internacional de Tokio.....	8.
1.1.3 Críticas a los juicios de Nuremberg y Tokio.....	9.
1.2 Tribunales ad hoc.....	10.
1.2.1 Tribunal para la ex Yugoslavia.....	11.
1.2.1.1 Caso Janko Bobetko.....	12.
1.2.2 Tribunal para Ruanda.....	15.
1.2.3 Análisis de los Tribunales Ad hoc.....	17.
1.2.4 Conclusión.....	20.
1.3 Creación de la Corte Penal Internacional.....	21.
1.3.1 Conferencia Diplomática de Naciones Unidas de Plenipotenciarios en el Establecimiento de una Corte Criminal Internacional.....	25.
1.3.2 Ratificación.....	26.

Capítulo 2.

Estatuto de Roma.....	28.
------------------------------	------------

Capítulo 3.

Postura de los Estados Unidos en Relación a la Corte Penal Internacional.....	36.
--	------------

Capítulo 4.

México: su Relación con la CPI.....	48.
4.2 Firma del Estatuto de Roma.....	52.
4.3 Ratificación.....	54.

4.4 Disposiciones que son incompatibles con la Constitución.....	57.
4.5 Caso Acteal.....	62.
4.6 Caso Aguas Blancas.....	63.

Capítulo 5.

Conclusiones.....	65.
-------------------	-----

BIBLIOGRAFÍA.....	69.
--------------------------	------------

ANEXO I

Estatuto de Roma	74.
------------------------	-----

ANEXO II

Lista de Ratificaciones del Estatuto de Roma.....	161.
---	------

INTRODUCCIÓN

Cada nación se apoya en su derecho interno para imponer penas a los responsables de crímenes en su territorio, pero hay crímenes que por su naturaleza requieren de la cooperación internacional para enfrentar a los perpetradores que atentan contra la humanidad, contra los derechos humanos elementales y que ponen en riesgo la paz y la seguridad mundial.

En 1998 se creó un órgano jurisdiccional innovador llamado el Tribunal Penal Internacional o Corte Penal Internacional. Este nació del libre consenso de más de 160 naciones y diversos organismos no gubernamentales, el cual se rige por un cuerpo legal denominado “Estatuto de Roma” (en adelante Estatuto).

Este tribunal nació como respuesta urgente a la impunidad latente y creciente en el siglo veinte, en el que han tenido lugar los peores crímenes y atrocidades de la historia.

Desde la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 se ha pugnado por la defensa de los mismos, y por buscar un mundo en el que reine la igualdad y disminuyan los abusos, pero las ideas siempre necesitan un respaldo coercitivo para ser cumplidas; así para y con el

fin de hacer respetar las garantías de las personas alrededor del mundo y evitar se sigan cometiendo crímenes impunes se creó este tribunal.

Esta tesis trata de un tema de actualidad, la adhesión de México a un tratado que crea el Tribunal Penal Internacional, el cual tendrá competencia para investigar, enjuiciar y dictar sentencias sobre crímenes cometidos por nuestros nacionales o en nuestro territorio. La información acerca de este tema se actualiza cada día a través del internet, es posible tener acceso de primera mano desde cualquier parte del mundo. Hay que estar a la vanguardia en esta materia y no quedarse atrás, por eso la importancia de utilizar los medios que hoy se encuentran a nuestro alcance.

Con respecto a la Corte mucho se ha hablado de no violar la soberanía de nuestro país; así como, de las disposiciones que maneja el tribunal en contra posición de nuestra constitución, lo cierto es que a pesar de esto si realmente quisiera darse el paso de adherirnos a este tribunal todos estos obstáculos serían salvados. Esta Corte ya es una realidad, ya ha entrado en vigor.

México hace dos años suscribió el tratado por el que se adhiere al Tribunal Penal Internacional, pero falta aún ratificarlo, lo que no puede ser posible si el Congreso no modifica algunas disposiciones de la Ley Suprema; así que, siendo esto una realidad el camino a seguir es analizar si México esta preparado para aceptar la competencia de un tribunal de esta naturaleza.

El fin de esta tesis es tomar una postura del por que México debe o no ratificar este tratado para lo que es necesario ofrecer una idea general de lo que es la Corte Penal Internacional para comprenderla. Esta Corte es permanente, independiente, ejercerá su competencia sobre los crímenes que se tipifican en su Estatuto, los crímenes que se consideran los peores de la humanidad: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y agresión. Y esta competencia solo será ejercida cuando un país no pueda o no quiera ejercerla (a esto se llama principio de complementariedad) ; es decir, los Estados tienen el poder de juzgar un caso competencia de la Corte.

La globalización ha tomado forma en el derecho internacional a través de este tribunal, ya que es necesario reformar las normas para adecuarlas a la realidad existente. Esta Corte cuenta con una jurisdicción universal, capaz de juzgar a cualquier persona que cometa los delitos mencionados en cualquier parte del mundo.

La Corte busca homogeneidad en materia de derechos humanos, para lograr un cierto estándar de vida en que se respeten los derechos elementales de la humanidad.

En este trabajo comenzaremos por hacer una breve cronología histórica acerca de cuales son los acontecimientos que se sucedieron para poder llegar hoy a contar con una Corte Penal Internacional, se hablará de cuatro tribunales internacionales que se reconocen como antecedentes de la Corte, en los que se apoyó para su creación; así

como, una explicación de cómo se logró el consenso internacional para la aprobación de su Estatuto.

El Estatuto de Roma describe claramente que es la Corte y cuales son sus características de las cuales solo mencionaremos las más importantes para el tema que nos ocupa, ya que nuestro objetivo es entender de que manera afecta a nuestro país la adhesión a este Tribunal y no realizar un estudio minucioso de su Estatuto.

Mencionaremos la postura de México en estas negociaciones y de otros países, principalmente de Estados Unidos por ser el país que más controversia ha causado por la postura tomada con respecto a este Tribunal y como esto puede afectar a nuestro país.

Mencionaremos dos acontecimientos ocurridos en la República Mexicana, el caso de Acteal, y el de Aguas Blancas para comprender de que manera influiría una Corte Penal Internacional en acontecimientos como los mencionados.

Y finalmente concluiremos diciendo el porque creemos que México debe adherirse o no a dicha Corte.

CAPITULO 1

ANTECEDENTES

La idea y existencia de tribunales o cortes internacionales data aproximadamente principios del siglo veinte. Han sido creados distintos tribunales con diferentes competencias y para actuar sobre distintos ámbitos territoriales; tales como: la Corte Internacional de Justicia de la Haya; la Corte de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo; el tribunal de Nüremberg; el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Tokio y el Tribunal de Russel, el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia (Croacia y Bosnia-Herzegovina) y el Tribunal Internacional para Ruanda.

De estos Tribunales solo se han reconocido como antecedentes de la Corte Penal Internacional cuatro: los tribunales de Nüremberg, y Tokio; y los tribunales ad hoc para la ex-Yugoslavia y Ruanda; razón por la que dichos tribunales serán los únicos que analizaremos en el presente estudio para comprender de que manera influyeron en la creación de la Corte.

El primer antecedente de un tribunal penal de carácter internacional se remonta al año 1919 después de la primera guerra mundial. El Tratado de Versalles establecía la creación del mismo, además en sus artículos 228 y 229 estableció el derecho de las potencias aliadas para enjuiciar y castigar a los individuos responsables de "violaciones de las leyes y costumbres de la guerra" ; por lo que el gobierno alemán tenía la obligación de entregar a "todas las personas acusadas", a fin de que un tribunal militar aliado pudiera juzgarlas.¹ El artículo disponía 227 que el Kaiser Guillermo II de Hohenzollern de Alemania sería juzgado como "culpable de ofensa suprema a la moral internacional y a la autoridad sagrada de los tratados", lo cual nunca se llevo a cabo, ya que el se escondió en Holanda, país neutral que le brindo asilo político. Éste fue el primer intento de juzgar individuos por violar normas de derecho internacional.²

1.1 Juicios de Nuremberg y Tokio

Después de las agresiones y atrocidades cometidas por Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial, los vencedores reclamaron justicia. Estados Unidos, URSS, la Gran Bretaña y Francia convinieron en el intento de castigar a los responsables de estos crímenes. Concluyeron que el imperio alemán y sus aliados hicieron la guerra recurriendo a métodos bárbaros e ilegítimos, contraviniendo así las

¹<http://www.cicr.org/icrcspa.nsf/ff41558bb06ff2b412561f6004fad66/0fd5a3c9f14adc45032568c500485681?OpenDocument>

² Justicia Penal Internacional. Santiago Corcuera Cabezut José Antonio Guevara Bermúdez. pp IX

leyes y costumbres establecidas más elementales de la humanidad³; así que, crearon tribunales internacionales para juzgar a los altos dirigentes políticos y militares de Alemania y de Japón, el Tribunal Militar de Nüremberg y el Tribunal Internacional de Tokio.

1.1.1 Tribunal Militar de Nüremberg

Por recomendación de los Estados Unidos, estos procedimientos se llevaron a cabo en el Palacio de Justicia de Nüremberg, Alemania. La Unión Soviética pidió que los ensayos ocurrieran en Berlín, y finalmente los aliados alcanzaron un compromiso a través del Acta de Londres, el 8 de agosto de 1945, que estipuló que Berlín sería el asiento permanente del Tribunal Militar Internacional y que el primer ensayo ocurriría en Nuremberg. El Tribunal Militar Internacional fue abierto el 18 de octubre de 1945 en el edificio del Tribunal Supremo en Berlín.

Cada una de las cuatro grandes potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la ex-Unión Soviética proporcionó un juez y un suplente para la realización de estos juicios.

El 1 de Octubre de 1946 fueron dictadas las primeras sentencias contra los criminales de guerra. Estos juicios se llevaron a cabo en contra de veinticuatro jerarcas nazis, y contra ocho organizaciones hitlerianas, de lo que resultaron doce condenados a morir en la horca,

³ Informe de 1919 de la Comisión sobre las responsabilidades de los autores de la guerra y sobre la aplicación de sanciones por violaciones de los derechos y costumbres de la guerra.

tres absueltos y el resto condenados a prisión, con penas que oscilan entre los diez años y la cadena perpetua.⁴

Los juicios de Nüremberg son una importantísima fuente de legislación penal internacional, legaron al derecho internacional dos principios fundamentales:

- 1.- La posibilidad de fincar internacionalmente responsabilidad penal individual y;
- 2.- La irrelevancia del cargo oficial como escudo protector de la justicia penal.⁵

El primero, el principio de responsabilidad criminal individual tiene gran importancia, e indica que los crímenes contra el derecho internacional son cometidos por individuos, y no por las entidades abstractas y es a éstos a quienes hay que castigar.

Estos principios son adoptados por la Comisión Internacional de Derecho de las Naciones Unidas para el derecho internacional en 1950, bajo resolución de la Asamblea General 177 (ii), párrafo (a).

1.1.2 Tribunal Militar Internacional de Tokio

El 3 de mayo de 1946 se constituyó en Tokio el Tribunal Internacional Militar para Extremo Oriente, integrado al igual que el de Nüremberg por representantes de las potencias vencedoras de la segunda guerra mundial.

⁴ http://www.geocities.com/elenagomez_cr/1945.html

⁵ Justicia Penal Internacional, Santiago Corcuera Cabezut, José Antonio Guevara Bermúdez, pp IX

Veintiocho militares de alta grado y civiles que habían desempeñado importantes funciones diplomáticas y de gobierno, fueron acusados por este tribunal. Las sentencias que se dictaron en el mismo tuvieron como resultado que se condenará a pena de muerte a siete jefes militares japoneses y se impusieran penas privativas de la libertad a otros dieciocho acusados.⁶ Fuera de Japón, en los países que fueron ocupados en la guerra por el ejercito japonés, también se celebraron juicios contra los responsables de crímenes de guerra. En total, se juzgaron 1228 personas; de ellas, 428 fueron absueltas y 800 condenadas; de éstas, 174 a muerte, 176 a penas de 20 años a reclusión perpetua, y el resto a prisión de entre uno y 20 años.⁷

1.1.3 Críticas a los juicios de Nüremberg y Tokio

Los juicios de Nüremberg estuvieron a cargo de magistrados juristas; mientras que los de Tokio, de militares⁸. En estos juicios no fueron respetados los principios de imparcialidad y objetividad del debido proceso, ya que los jueces eran exclusivamente nacionales de las Potencias vencedoras, perseguían “justicia de los vencedores sobre los vencidos” a decir de muchos.

Además de los anteriores son vulnerados otros principios:

- El principio de legalidad, ya que no existían al momento de la comisión del delito leyes internacionales aplicables

⁶ <http://www.ub.es/solidaritat/observatori/esp/general/temas/tpidossier.htm>

⁷ <http://www.regioncomechingones.com.ar/Marguch/japon.htm>

⁸ <http://www.derechoshumanosup.com/drup/CPI28abril02.doc>

- Falta de tipicidad, ya que no eran precisos los conceptos y contenidos de los crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad.
- Principio de irretroactividad de la ley.⁹

Los Tribunales de Nüremberg y Tokio, fueron los primeros en tratar el genocidio como un crimen punible.

1.2 Tribunales ad hoc

Estos tribunales se crearon en los noventas a través de un órgano multilateral nacido del libre consenso internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.¹⁰ La denominación de tribunales “*ad hoc*” significa que fueron creados para analizar situaciones específicas, y su jurisdicción se limita a un tiempo y territorio específico. Estos tribunales son una respuesta a sucesos que ya han ocurrido, cumplen una función represiva y no preventiva.

La experiencia de estos Tribunales Penales es positiva en muchos aspectos, pese a las dificultades que presentan y que analizaremos adelante.

1.2.1 Tribunal ad hoc para la ex-Yugoslavia

En 1991 estalló un violento conflicto étnico en la ex-Yugoslavia. Violaciones masivas y atrocidades causaron impacto en el mundo

⁹ <http://www.ub.es/solidaritat/observatori/esp/general/temas/tpidossier.htm>

¹⁰ Justicia Penal Internacional, Santiago Corcuera Cabezut, José Antonio Guevara Bermúdez, pp 79

entero¹¹. En el territorio de Yugoslavia particularmente en las regiones de Bosnia-Herzegovina y Kosovo, tras el desmembramiento de la República Socialista Federal y el conflicto armado interétnico de la región balcánica. Millares de personas fueron ejecutadas, detenidas, secuestradas o sometidas a tortura y más de un millón de personas abandonaron sus hogares.

Los tribunales de justicia nacionales, no eran imparciales e independientes, ni garantizaban a los acusados el respeto de sus derechos procesales debido al contexto de inestabilidad político y social que prevalecía, por eso las Naciones Unidas tomaron cartas en el asunto instaurando un tribunal *ad hoc* a través del Consejo de Seguridad.

El tribunal criminal internacional para la ex-Yugoslavia fue establecido el 25 mayo de 1993 por determinación del Consejo de Seguridad a través de su resolución 827¹², con base en capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas¹³. Este tribunal se creó para juzgar a los presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia a partir de 1991.

El tribunal tiene su asiento en la Haya, en los Países Bajos. Sus objetivos son aplicar justicia a los responsables de crímenes contra la humanidad y genocidio, en el modo de limpiamiento étnico; rendir

¹¹ <http://www.earthaction.org/es/archive/98-03-icc/background.html>

¹² www.un.org/icty/glance/index.htm

¹³ Artículo 39 Carta de las Naciones Unidas.

justicia a sus víctimas y disuadir a los perpetradores en la comisión de tales crímenes para contribuir a la restauración de la paz.¹⁴

Su jurisdicción recae sobre lo siguiente:

- Infracciones contra los Convenios de Ginebra de 1949;
- Violaciones de las leyes o costumbres de la guerra;
- Genocidio;
- Cualquier crimen contra la humanidad cometido en la ex – Yugoslavia desde 1991.
- Sobre personas en lo individual y no respecto a sujetos de derecho internacional.

1.2.2.1 Caso Janko Bobetko

En octubre de 2002 ha sucedido un acontecimiento en Yugoslavia que tiene repercusión a nivel internacional.

Actualmente 11 acusados por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, no han sido aprehendidos o puestos bajo su jurisdicción. Carla del Ponte, quien es hoy en día la fiscal del Tribunal ha solicitado la cooperación del gobierno de Yugoslavia para que éstos sean arrestados, y extraditados al mismo. Solicitó sean tomadas todas las medidas necesarias y toda la fuerza de la República Federal de Yugoslavia para asumir sus obligaciones internacionales; sin

¹⁴ www.un.org/icty/glance/index.htm

embargo, el gobierno yugoslavo no esta cooperando y claro ejemplo de esto es el siguiente caso.

El General Janko Bobetko quien era el jefe de personal del ejército Croata en la guerra de 1991-1995 de Croacia contra los Serbios, ha sido acusado por el Tribunal para responder de la por la "matanza ilegal de los soldados por lo menos 100 civiles Serbios, y de otros tantos capturados o heridos"¹⁵ durante y después de una acción en el año de 1993 en un enclave Serbio conocido como el bolsillo de Medak. El Tribunal solicitó al gobierno Croata cooperación para poner a su disposición al general Janko Bobetko, para que responda de crímenes contra humanidad, y violaciones de las leyes y de los costumbres de la guerra. La respuesta del gobierno Croata a esta petición ha sido una negativa.

Bobetko actualmente cuenta con 83 años de edad, de ser juzgado por este Tribunal, se convertiría en la persona de mayor edad enjuiciada por el mismo.

El gobierno de Croacia anunció que no lo pondrá a disposición de este Tribunal por varias razones. El General Bobetko es considerado en su país un héroe nacional, y se teme que el extraditarlo traiga al gobierno Croata abajo, y se ocasione un contragolpe nacionalista. Más de un 80 % de la población Croata considera que su apoyo a la guerra fue positivo¹⁶. El primer ministro

¹⁵ <http://news.bbc.co.uk/1/low/world/europe/2284638.stm>

¹⁶ <http://news.bbc.co.uk/1/low/world/europe/2277589.stm>

Croata Ivica Racan dijo: *“que la operación militar para la cual procesaron a general Bobetko había sido una operación militar legítima para conducir a rebeldes de un área ocupada”*;¹⁷ por lo tanto esta acusación contra el general Bobetko, "es una acusación política contra la nación entera de Croacia."¹⁸

La razón oficial de la denegación del gobierno Croata para la extradición del general, fue que consideran la acusación hecha por el Tribunal, inconstitucional. Y además argumentan que esta puede tener un efecto desestabilizador en la población civil. El gobierno anunció que como último recurso sería posible abogar por el general asegurando que su salud haría imposible que éste realizará un viaje a la Haya.¹⁹

Por todo lo dicho, el gobierno Croata se encuentra ante una disyuntiva diplomática, por un lado no quiere poner a su propia población en su contra y por otro el hecho de no cooperar con el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia lo confronta con la comunidad internacional. El gobierno británico ha suspendido ya la ratificación de un acuerdo con Croacia que habría ayudado al país a agilizar su integración con la Unión Europea y otros cuerpos internacionales.²⁰ Carla del Ponte exige la cooperación con la Corte y cuenta con el apoyo de la comunidad internacional; quienes así como

¹⁷ <http://news.bbc.co.uk/1/low/world/europe/2277589.stm>

¹⁸ <http://news.bbc.co.uk/1/low/world/europe/2354129.stm>

¹⁹ <http://news.bbc.co.uk/1/low/world/europe/2354129.stm>

²⁰ <http://news.bbc.co.uk/1/low/world/europe/2284638.stm>

la Gran Bretaña pueden imponer sanciones y de esta manera obligar en este caso que Croacia cambie su postura.

La trascendencia de esta negativa del gobierno Croata para cooperar con el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia es que otros gobiernos sigan el mismo camino, ya que sin la cooperación de los países no sería posible que el Tribunal realice satisfactoriamente sus funciones. Este acontecimiento ha puesto en tela de juicio la autoridad, la fuerza y el alcance de este Tribunal ad hoc para la ex Yugoslavia.

1.2.2 Tribunal ad hoc para Ruanda

La muerte del presidente ruandes Juvenal Habyarimana en abril de 1994, ocasionó que sus fuerzas militares masacraran a más de medio millón de personas, una agresión genocida de la tribu Hutu, contra la tribu africana de los Tutsis. Más de 200,000 personas fueron encarceladas y sin previo juicio algunas decenas condenadas a muerte, otras más fueron torturadas, y más de un millón de rwandeses de distintas etnias huyeron de su país para escapar de represalias y matanzas organizadas por los distintos grupos políticos.

Con el propósito de contribuir al proceso de la reconciliación nacional y al mantenimiento de la paz en la región se estableció el Tribunal Penal Internacional para Ruanda²¹ al igual que en el caso de la ex-Yugoslavia a través del Consejo de Seguridad, en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, por medio de la

²¹ Justicia Penal Internacional, santiagoCorcuera Cabezut, José Antonio Guevara Bermúdez.

resolución 955 del 8 de noviembre de 1994. Este Tribunal Criminal esta encargado de juzgar a los presuntos responsables de actos de genocidio o de otras graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda; a los ciudadanos ruandeses presuntamente responsables por tales actos o violaciones cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1994 sobre las infracciones de los *Convenios de Ginebra de 1949 y del Protocolo adicional II*.

Por la resolución 977 del 22 de febrero de 1995, el Consejo de la Seguridad decidía que el asiento del tribunal sería Arusha, República Unida de Tanzania.²²

Éste tribunal sienta un precedente importantísimo para el derecho internacional, realizó el 2 de septiembre de 1998 el primer juicio sobre el crimen de genocidio en la historia. El Tribunal enjuició a Jean Paul Akayesu, quien siendo alcalde de Taba, participó en el genocidio ocurrido durante el conflicto Ruanda-Burundi. En éste al menos 500 mil personas en su mayoría Tutsis, y en menor escala Hutus, fueron brutalmente masacradas en sólo tres meses a mediados de 1994. Así tomando los principios de los juicios de Nüremberg se procesa a un individuo sin importar su cargo oficial.

Akayesu fue procesado por 15 cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad, y violaciones a la Convención de Ginebra, de los cuales se le encontró culpable en 9 procesos e inocente en los

²² <http://www.derechos.org/nizkor/ley/ruanda.html>

restantes 6. Los jueces lo encontraron culpable de la matanza, tortura y violación de los Tutsis en 1994.

Tan solo 2 días después del proceso de Akayesu, el 4 de Septiembre, Jean Kambanda quien fuera primer ministro de Ruanda durante el genocidio de 1994, fue sentenciado a cadena perpetua por el Tribunal, habiéndose declarado culpable de los crímenes que le fueron imputados. El Tribunal, reconoció como atenuante su cooperación, no obstante consideró que los crímenes cometidos por él y su gabinete tenían una gravedad intrínseca por su carácter atroz y sistemático.

El Tribunal espera poder procesar a todos los responsables del exterminio en Ruanda y tiene bajo su custodia un total de 26 acusados ruandeses y cinco sospechosos.

1.2.3 Análisis de los Tribunales *ad hoc*

Estos tribunales para su creación no siguieron el camino convencional, lo cual hubiese sido a través de un tratado, esto debido a la urgencia de resolver las problemáticas suscitadas en los países mencionados, ya que para instaurar un tribunal se requiere de un largo proceso y el fin de enjuiciar a los perpetradores de la justicia quizá no hubiese sido logrado. Fue por esto que estos tribunales se crearon a través de una decisión unilateral del Consejo de Seguridad. Esta medida demostró su eficacia, al constituirse rápidamente estos dos Tribunales y comenzar a laborar inmediatamente, así mismo, fue el Consejo de Seguridad quien a través de el servicio jurídico de las Naciones Unidas, preparó sólo los Estatutos de los ambos Tribunales.

Al principio la relación con el Consejo de Seguridad con estos tribunales hacía sospechar que se había creado otro instrumento más de las grandes potencias a través de este órgano de las Naciones Unidas, pero con el tiempo se ha demostrado que son verdaderos tribunales ya que han demostrado su efectividad y ganado prestigio.

Para lograr un desarrollo eficaz de ambos tribunales, el Consejo de Seguridad estableció la colaboración de los Estados en el artículo 29 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para ex-Yugoslavia y en el artículo 28 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, además la resolución del Consejo por la que se constituyen los dos Tribunales, contiene un párrafo que se refiere a la cooperación de los Estados, en términos particularmente enérgicos (párrafo 4 de la resolución 827 para el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia y el párrafo 2 de la resolución 955 para Ruanda).²³

Sin embargo, a pesar de la obligación internacional de cooperar con los tribunales Internacionales, ha sido poca la voluntad de cooperación en el cumplimiento de las determinaciones del tribunal, por parte de las autoridades de los países en conflicto, y por parte de las fuerzas multilaterales que han injerido en las regiones involucradas de alguna manera: la Fuerza Militar Internacional de Aplicación del Acuerdo de Paz (IFOR) comandada por la OTAN.²⁴

²³ <http://www.icrc.org/icrcspa.nsf/22615d8045206c9b41256559002f7de4/2fa1fd0d9c7171d5412565e80058dd34?OpenDocument>

²⁴ CORCUERA, Santiago, GUEVARA, José Antonio "Justicia Penal Internacional". Universidad Ibero Americana, México, 2001, pp. 75.

Algunas de las críticas que han recibido estos tribunales son las siguientes:

- Debido a la prontitud en la creación de sus estatutos, no fue posible suprimir algunas imperfecciones técnicas de estos textos aprobados, estos tuvieron deficiencias en cuanto a las reglas en el procedimiento, por lo que se dictaron nuevas reglas de procedimiento en la práctica de los mismos, lo que se ha calificado de improvisación; sin embargo, los magistrados en el caso del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia han actuado de manera innovadora en cuanto a varias disposiciones de las Normas de Procedimiento y de Prueba, intentando remediar ciertas deficiencias o imperfecciones a través de nuevas disposiciones en los Estatutos.
- No son tribunales independientes:
 - Su suerte esta subordinado a las decisiones del restringido órgano de las Naciones Unidas; esto es, del Consejo de Seguridad, en el que las cinco grandes potencias tienen derecho a veto.
 - Financieramente dependen de las decisiones del órgano plenario de las Naciones Unidas, la Asamblea General y ya ha acontecido en reiteradas ocasiones, insuficiencia de los recursos puestos a su disposición.
- Los Estatutos de ambos tribunales textos están solamente destinados a los Estados, queda la confusión de si han de

aplicarse también a las organizaciones, entidades o incluso a los individuos.

- No son tribunales permanentes, están limitados a un tiempo y espacio determinados.²⁵
- Vulneran principios de derecho:
 - El principio de estricta legalidad *nullum crimen sine lege*, establece que las conductas susceptibles de sancionarse penalmente deben establecerse con antelación a la comisión de las mismas. El artículo 11.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional”.²⁶ Dejar la solución al arbitrio de un juez sólo es admisible cuando se da el supuesto de jueces preexistentes y plenamente legítimos.
 - *Nullum iudicio sine lege*, este principio se vulneró al aplicar reglas de procedimiento establecidas en sus respectivos estatutos, emitidos con posterioridad a los hechos a examinar.²⁷

Conclusión

Los Tribunales Internacionales *ad hoc* creados por el Consejo de Seguridad para la ex-Yugoslavia y Ruanda, cumplieron en gran

²⁵ <http://www.icrc.org/icrcspa.nsf/22615d8045206c9b41256559002f7de4/2fa1fd0d9c7171d5412565e80058dd34?OpenDocument>

²⁶ <http://www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm>

²⁷ CORCUERA, Santiago, GUEVARA, José Antonio. “Justicia Penal Internacional”, Universidad Ibero Americana, México, 2001, p.p 81-84.

medida con el objeto para el que fueron creados. Aportan un gran legado al derecho internacional demostrando que el derecho como la misma humanidad es perfectible.

La dependencia de estos al Consejo de Seguridad les resta libertad, credibilidad en algunos casos, ya que no pueden existir por sí solos, y el hecho que ejerzan su competencia en un territorio y tiempo determinado, es una solución inmediata para contener los problemas que van aconteciendo pero que no tiene un seguimiento, y que no cubre las necesidades que hoy en día se requieren para terminar con la impunidad creciente que se vive en nuestro planeta. Los tribunales *ad hoc* que mencionamos no cuentan con fuerza universal.

1.3 Creación de la Corte Penal Internacional (CPI)

Como hemos visto desde principios del siglo veinte la idea de aplicar justicia para los peores crímenes ha tratado de instaurarse., pero esta no ha sido una tarea fácil, ya que requiere de la cooperación de los Estados, por esto los resultados habían sido insuficientes pues esta no se había logrado.

Existe hoy en día el Tribunal Internacional de Justicia que tiene su asiento en la Haya, institución principal de las Naciones Unidas que se ocupa de conflictos entre los Estados y no de individuos, y aún cuando se suponía que este organismo tendría la fuerza suficiente para ejecutar sus decisiones, se ha dado que estas no son cumplidas haciendo parecer que este órgano solamente emite recomendaciones.

En la resolución 260 del 9 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la necesidad de establecer una Corte Penal Internacional permanente, para procesar a personas responsables de los peores crímenes reconocidos por la mayoría de los Estados que son: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y el crimen de agresión.²⁸

En la misma resolución, la Asamblea General asignó a la Comisión Internacional de Derecho por mandato, "que estudiara la deseabilidad y la posibilidad de establecer un órgano judicial internacional para el ensayo de las personas cargadas con genocidio".²⁹

En 1951 el comité encargado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, preparó un proyecto de estatuto que fue revisado en 1953, el cual no fue considerado por la Asamblea General por no estar adoptada una clara definición del crimen de agresión (la que en nuestros días sigue siendo oscura), además de que el clima político internacional que prevalecía en las décadas de los sesentas, setentas y ochentas hizo difícil progresar en este campo.³⁰

En 1982, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU redacta el Código de Crímenes contra la paz y la humanidad, que entró en vigor en 1991, con la existencia de este Código Penal

²⁸ <http://www.un.org/spanish/news/facts/iccfact.htm>

²⁹ <http://www.un.org/law/icc/>

³⁰ <http://www.un.org/law/icc/>

Internacional solo faltaba un tribunal capaz de hacer valer el mismo; de ahí, surge de nuevo la inquietud de crear un Tribunal Penal Internacional.

Cuarenta y cuatro años después de los juicios de Núremberg en diciembre de 1989 se considera ya de manera formal el estructurar una Corte Penal Internacional, esto gracias a una petición de Trinidad y Tobago de incluir tráfico de droga como uno de los crímenes sobre los que tendría jurisdicción esta corte, la Asamblea General pidió a la Comisión Internacional de Derecho que trabajara de nuevo sobre esta vieja idea.

En 1992, la Asamblea General de la ONU encarga a la Comisión de Derecho Internacional un nuevo Estatuto para el Tribunal Internacional.

Los aberrantes acontecimientos ocurridos en Ruanda y Yugoslavia demandan la atención internacional. La impunidad es creciente y los medios de comunicación al difundirla contribuyen presionando en la opinión pública acerca de la necesidad de un organismo fuerte que logre combatirla. La idea de la Corte se acelera y la Comisión de Derecho Internacional, equipo de renombrados juristas elegidos por las Naciones Unidas, termina la redacción por fin después de casi medio siglo de un anteproyecto de estatuto de la Corte Penal Internacional.

Una vez teniendo un anteproyecto se hace necesaria no sólo la aprobación de la Asamblea General de Naciones Unidas, sino formar mesas de trabajo con representantes de todos los Estados o de su gran mayoría en su defecto para detallar dicho anteproyecto y estructurar un Estatuto que norme la actuación de la tan ansiada Corte; así que, la Asamblea General en 1995 encomienda a un comité preparatorio, en su resolución 50/46 por mandato la “preparación de un texto consolidado extensamente aceptable de una convención para una corte criminal internacional como paso siguiente hacia la consideración por una conferencia de plenipotenciarios”. Y habiéndose aprobado el estatuto que regirá dicha corte, la Asamblea General en su resolución 51/207 señaló llevar a cabo dicha conferencia.³¹

Del 25 de marzo del año 1996, hasta abril de 1998 tuvieron lugar reuniones preparatorias con el fin de que los gobiernos y organizaciones no gubernamentales estudiaran y en su caso contribuyeran en la creación del Estatuto. En estas reuniones se dio un difícil juego de estrategias políticas, ya que cada Estado pugnaba por sus propios intereses, y sumándose a esto existió mucha presión para terminar el texto en el plazo planeado.

³¹ <http://www.org/icc/statute.htm#part1>

1.3.1 Conferencia Diplomática de Naciones Unidas de Plenipotenciarios en el establecimiento de una Corte Criminal Internacional.

La Asamblea General “en su cincuenta-segunda sesión, convocó a la Conferencia Diplomática de Naciones Unidas de Plenipotenciarios en el Establecimiento de una Corte Criminal Internacional, llevada a cabo en Roma, Italia del 15 de junio al 17 de julio de 1998 “para concluir y adoptar a una convención sobre el establecimiento de una Corte Criminal Internacional, coincidiendo esta fecha con el quincuagésimo aniversario de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” y de la “Convención sobre la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio”, fecha idónea pues que mejor regalo para los Derechos Humanos que crear un Tribunal que los proteja.

Ciento sesenta Estados y cientos de representantes no gubernamentales participaron en esta conferencia, decididos a establecer finalmente una Corte Penal Internacional permanente. El estatuto de la Corte, Estatuto de Roma, fué aprobado por un voto sin grabar de 120 a favor, 7 en contra y 21 abstenciones. Siete Estados votaron en contra de los cuales tenemos conocimiento de los siguientes: Estados Unidos, China, Israel, India y Turquía. México se abstuvo.

Hubo oposiciones a más de uno de los puntos que integran el Estatuto de la Roma, ya que el texto no satisfizo a todos los participantes. México sugirió de manera informal que se pospusiera la clausura para continuar la negociación y lograr un texto de consenso.

Para México el texto del Estatuto se impuso a última hora. El proyecto final fue recibido para su estudio con menos de 24 horas para consultar con las autoridades correspondientes disposiciones que estaban incorporadas y con las cuales México y otros países no estaban de acuerdo, pero algunas Naciones y organizaciones no gubernamentales presionaron políticamente para terminar dicho texto, lo cual desde nuestro de vista es positivo en tanto que ya era imperiosa la necesidad de formalizar y terminar este proyecto que tanta historia tiene, pero queda la duda de que si por terminar en un plazo determinado habrán quedado defectos en este cuerpo legal que pudieron corregirse.³² Para lo cual el Estatuto contempla la modificación del mismo en su artículo 123.

1.3.2 RATIFICACIÓN

Para que la Corte Penal Internacional entrará en vigor era necesaria la ratificación de 60 Estados. El pasado 11 de abril del 2002 durante la Novena Sesión de la Comisión Preparatoria sobre la Corte Penal Internacional en la Ciudad de Nueva York, se depositó el sexagésimo instrumento de ratificación necesario para la entrada en vigor del Estatuto de Roma que crea la CPI,³³ esto ocurrió durante una ceremonia solemne en la gran sala de conferencias de la sede de la ONU. Estado Unidos e Israel que ven en la CPI una justicia supranacional politizada y potencialmente hostil a sus intereses, estuvieron ausentes; parlamentarios de Estados Unidos reclamaron la

³² <http://www.un.org/icc/index.htm>

³³ <http://www.senado.gob.mx>

inmunidad de los soldados estadounidenses ante la Corte Penal Internacional.³⁴

El 1 de Julio del 2002 con 76 ratificaciones y 139 firmas entró en vigor el Estatuto de Roma, activándose así la competencia del primer tribunal mundial permanente que juzgará a los individuos acusados de cometer los peores crímenes del mundo. Para celebrar este hecho histórico, se realizan una serie de eventos en la sede de las Naciones Unidas y a nivel mundial.

³⁴ EL UNIVERSAL, viernes 12 de abril del 2002. Internacional, página 23.

CAPÍTULO 2

ESTATUTO DE ROMA

17 julio 1998 se aprobó en Roma el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Un tratado internacional que supone la creación de un órgano con jurisdicción universal; esto es, con capacidad de juzgar a cualquier individuo sobre el globo terráqueo, siempre que se trate de los delitos que se encuentran contemplados en su Estatuto.

El Estatuto de Roma es resultado de muchos años de trabajo, en él se fusionan visiones de diferentes culturas y tradiciones jurídicas; por eso, no es extraño que tenga muchas similitudes con nuestro derecho, sobre todo por que esta apoyado en el derecho internacional, en derechos humanos, y en la ley humanitaria. Es una propuesta para mejorar la calidad de vida de la humanidad y combatir con la impunidad de los perpetradores de la paz y la seguridad mundial.

Hoy en día como ya lo dijimos existe un tribunal internacional, “La Corte Internacional de Justicia de La Haya”, la que al dirimir conflictos entre Estados, dejaba una laguna jurídica con respecto a los crímenes con responsabilidad individual. La CPI se encargará de este

aspecto además de que a diferencia de la primera tendrá poder para hacer cumplir sus sentencias.

La CPI es un nuevo órgano internacional, nace con una vocación universal; es decir, que no tiene fronteras, no está restringido a un ámbito territorial y político concreto como los tribunales *ad hoc* creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Su carácter permanente lo hace diferente a otros, termina así con la tendencia de crear tribunales por parte de los vencedores para reclamar justicia en una situación pasada.³⁵

El establecimiento de un Tribunal Penal Internacional es un avance en la construcción de la legalidad internacional que antes estaba bajo los caprichos de las naciones más poderosas, busca erradicar la ley del más fuerte, lo que más adelante veremos no se logra del todo.

El derecho internacional es una herramienta esencial para el avance de la paz y la justicia. A menudo los principios establecidos en tratados internacionales son violados por los mismos gobiernos que los han proclamado. Se volvió una necesidad crear una institución internacional eficaz para proteger el derecho cuando se comprueba que los sistemas judiciales nacionales son incapaces o no tienen la voluntad para cumplir con su deber.³⁶

³⁵ <http://www.nv.es/~ripj/javij.htm>

³⁶ www.igc.org/icc/html/globalsouthspanish.html

El Estatuto enuncia sobre que crímenes tendrá jurisdicción la Corte Penal Internacional, los límites, estructura y funcionamiento de la misma, siempre sobre la base del derecho internacional.

En el artículo primero de este Estatuto de Roma se define que es la Corte Penal Internacional.

Artículo 1: Una corte criminal internacional (“ la corte ”) se establece por este medio. Será una institución permanente y tendrá la energía de ejercitar su jurisdicción sobre las personas para los crímenes más serios de la preocupación internacional, según lo mencionado en este estatuto, y será complementario a las jurisdicciones criminales nacionales. La jurisdicción y el funcionamiento de la corte serán gobernados por las provisiones de este estatuto.³⁷

El Estatuto de Roma esta conformado por 128 artículos. Como toda ley que acaba de nacer, tiene que probar su eficacia en la práctica; así que, si llegase a ser necesario este Estatuto es susceptible de modificaciones. El estatuto se divide en trece partes en los que se abordan los siguientes tópicos:

1. Establecimiento de la Corte.
2. Jurisdicción, admisibilidad, y ley aplicable.
3. Principios Generales del derecho penal.

³⁷ <http://www.derechos.net/doc/tpi.html>

4. Composición y administración de la corte.
5. Investigación y procesamiento.
6. El ensayo.
7. Penas.
8. Súplica y Revisión.
9. Cooperación internacional y ayuda judicial.
10. Aplicación.
11. Asamblea de los partidos de los estados.
12. Financiamiento.
13. Cláusulas Finales.

A continuación mencionaremos algunos aspectos importantes de este Estatuto para su mejor comprensión son los siguientes:

La Corte cuenta con personalidad jurídica internacional, y capacidad jurídica necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos. Tendrá su asiento la Haya, en los Países Bajos (“el estado anfitrión”), pudiendo establecerse en otra parte si fuese necesario en base a lo que disponga el Estatuto. Estará vinculada con las Naciones Unidas, vinculada más no subordinada. Los dos idiomas oficiales de trabajo son el inglés y el francés. No se juzgarán a menores de 18 años.

La Corte se establece en base a dicho estatuto y será complementario de las jurisdicciones criminales nacionales; esto quiere decir, que cada nación podrá competencia sobre sus nacionales, o sobre crímenes que se establecen en este Estatuto en

su territorio, pero cuando el Estado no quiera o no pueda llevar a cabo el proceso de investigación, prosecución y sentencia, será la Corte la que de manera complementaria lo haga. Se ha dicho que permitir la intromisión de un tribunal ajeno a los nacionales es perder la soberanía. Esto en parte es cierto, pero es una decisión que toma cada nación al adoptar la CPI, esto en otras palabras, es ceder parte de nuestra soberanía en aras de un bien mayor.

Algo muy importante es que la Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto; muchos opinan que esto dejará años de impunidad, pero sería imposible que además de las metas propuestas por este Estatuto intentar juzgar crímenes del pasado, porque sería demasiado la carga de trabajo e imposible de cumplir para la CPI. Muchos funcionarios y ex-diplomáticos temían por su responsabilidad en acontecimientos pasados, pero están libres de ser condenados por la CPI, ya que respeta el principio de irretroactividad de la ley.

El Estatuto solamente tendrá competencia para combatir solamente los crímenes siguientes:

- **Genocidio:** cualquiera de los actos que enumera el artículo quinto del Estatuto de Roma, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.

- **Crímenes contra la humanidad:** cualquiera de los actos enumerados en el artículo sexto del Estatuto de Roma, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque
- **Crímenes de Guerra:** cualquiera de los actos enumerados en el artículo séptimo del Estatuto de Roma, cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. A los efectos de dicho Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra" Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente.
- **El crimen de la agresión:** este artículo no ha sido definido como tal, el artículo quinto en su segundo párrafo dice: la Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas. En estos artículos 121 y 123 se explica el procedimiento que será necesario para poder llevar a cabo una modificación sobre el mismo Estatuto.

No se define el crimen de agresión pero al permitirse modificar el Estatuto, esto podrá subsanarse.

Muchas conductas se encuadraron en esta clasificación, éstas están enunciados en los artículos 5,6,7 y 8. El Estatuto es un instrumento internacional jurídico novedoso, ya que para llegar a las definiciones utilizadas en el mismo fue necesario apoyarse en un gran número de instrumentos internacionales anteriores a él; tales como, “La convención de 1948 de la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio”, y “La Convención de Ginebra de 1949 entre otros”.

Aún aquellos países que no firmen el tratado estarán bajo la jurisdicción de la Corte al cometer un crimen de los tipificados por el Estatuto en el territorio de Estados miembros.

La Corte entra en vigor cuando 60 Naciones ratifican su adhesión al tratado, estos sesenta conformarán la “Asamblea de los partidos de los Estados”. Esta tiene poder para decidir sobre asuntos de la corte en coordinación con sus otros órganos. Cada Estado tendrá un representante en la Asamblea, que además se puede acompañar de suplentes y consejeros. Cada partido cuenta con un voto en esta Asamblea, la que también designará a los jueces para estar a salvo de la influencia del Consejo de Seguridad y evitar así juicios politizados.

El artículo 16 del Estatuto una disposición que faculta al Consejo de Seguridad a posponer un enjuiciamiento hasta por doce meses pudiendo renovarse éste, de manera indefinida.

No fueron incorporados en el Estatuto de Roma entre otros crímenes ni el narcotráfico, ni el terrorismo (estos dos sugeridos por México), ni los delitos contra el medio ambiente, por la dificultad en asimilarlos a las 4 categorías mencionadas y por ser considerados delitos de menor gravedad a los tipificados, y se deja la puerta abierta a que en un futuro puedan incorporarse.

Una corte de esta naturaleza necesita recursos para ser eficaz en su objetivo, porque requiere costear entre otras cosas elevados sueldos de expertos juristas, para evitar corrupción, además de todo el personal administrativo que se requiere, y cualquier gasto como lo sería el traslado con las más altas normas de seguridad de un criminal de un Estado a otro.

Kofi Annan, Secretario General de la ONU ha descrito este tratado como un *“paso gigante para la justicia”*. Dijo: *“es una esperanza y un paso gigante en la regla de la ley que hace algunos años nadie habría pensado posible”*.³⁸

³⁸www. bbc.com. Información correspondiente al 1/8/98

CAPITULO 3

POSTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN RELACIÓN A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Los Estados Unidos (en adelante EU) siempre han sido líderes en temas como la paz y la seguridad mundial; así lo demuestra, su participación en el Consejo de Seguridad, del cual es miembro permanente, también fue un importante promotor en los juicios de Núremberg y Tokio, y apoyo y la creación de los tribunales ad hoc para la ex - Yugoslavia y Ruanda; sin embargo, su postura esta vez ante el Estatuto de Roma ha sido distinta, EU no apoya un Tribunal Penal Internacional, debido a que para este país significaría que por primera vez tendría una limitación a su política exterior, y perdería su posición de gran gendarme del mundo.³⁹

Al comienzo de este proyecto participó activamente en las sesiones de trabajo llevadas a cabo desde el año 1996 a 1998 para modelar el Estatuto de la CPI, sus propuestas tuvieron eco en las

³⁹ www.derechos.org/nizkor/dionis/tpi.html

normas de procedimiento y prueba; así como, en la definición de los conceptos de crímenes, pero lógicamente no todas sus propuestas fueron acogidas en el Estatuto de Roma.

En una de sus propuestas Estados Unidos y Francia exigieron que la Corte estuviera por debajo el Consejo de Seguridad a lo que las demás naciones respondieron negativamente, ya que se busca crear órgano jurisdiccional independiente, y aceptar una propuesta de esa naturaleza alteraría el ideal de la Corte establecido en su Estatuto, finalmente resultó que 50 Estados apoyaron un cuerpo independiente.

Uno de los grandes debates durante las sesiones se concentró en una propuesta de Estados Unidos de modificar el artículo 98 del Estatuto que versa sobre las reglas de procedimiento y prueba, lo que EU buscaba era que a través del Consejo de Seguridad se lograrán ampliar las excepciones de procesamiento para proteger a sus soldados y funcionarios,⁴⁰ así mismo, limitar la autoridad de la Corte para solicitar la entrega de un acusado, y su habilidad para aceptar un acusado bajo custodia. En otras palabras EU no quiere perder la jurisdicción sobre sus ciudadanos teme que su soberanía nacional sea usurpada por otro organismo. El artículo 98 dice:

Artículo 98: Cooperación con respecto a la renuncia a la inmunidad y consentimiento a la entrega

1. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la

⁴⁰ <http://www.derechos.org/nizkor/impu/tpi/v2.html>

inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que la Corte obtenga anteriormente la cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad.

2. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el consentimiento del Estado que envíe para entregar a la Corte a una persona sujeta a la jurisdicción de ese Estado, a menos que ésta obtenga primero la cooperación del Estado que envíe para que dé su consentimiento a la entrega.

Estados Unidos ha tratado de utilizar la ley a su favor, al conseguir excepciones de extradición sobre sus ciudadanos, esto a través de acuerdos internacionales con un sin número de países, tratados que determinasen no extraditar a sus ciudadanos ya que la Corte en base en este artículo 98 queda inhabilitada para pedir a un Estado la extradición de un reo si este tiene tratados de extradición con otra nación.

Es sumamente interesante como la postura de EU se desarrolla desde la firma del Estatuto hasta hoy en día.

El presidente de EU, Bill Clinton, autorizó su respaldo al convenio, aún teniendo fuerte presión por parte del Pentágono para no respaldarlo hasta que Washington obtuviera completas garantías de que los militares o los funcionarios estadounidenses no se vieran sujetos a la jurisdicción de la Corte ⁴¹.

⁴¹ <http://cnnespañol.com/2000/mundo/medio/12/31/court>

El viernes 29 de diciembre del año 2000, EU firmó el tratado de la Corte Penal Internacional, dos días antes de que expirara el plazo previsto para este propósito, a lo que Bill Clinton declaró: *“buscamos reafirmar nuestra ayuda fuerte para la responsabilidad internacional y para traer a los perpetradores a la justicia por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Damos también este paso porque deseamos mantener nuestro compromiso de hacer de la CPI un instrumento de justicia imparcial y eficaz en los años venideros”*,⁴² también expresó tener reservas sobre algunos aspectos del tratado sobre todo la posibilidad de que la Corte pueda ejercitar su jurisdicción sobre los países que no ratifiquen el tratado por el cual se adopta el Estatuto.

Para justificar su firma ante los opositores Clinton argumento que la firma de su país significa no quedarse fuera de lo que va a ser la evolución de la CPI y de las negociaciones que aún estaban pendientes lo que era muy cierto ya que al no firmar se hubiera visto imposibilitado para pelear por las reformas que creía necesarias, entre ellas las que tienen que ver con el crimen de agresión. La firma refuerza la capacidad de mejor proteger al personal oficial de los Estados Unidos de acusaciones infundadas y de alcanzar los objetivos de derechos humanos y de responsabilidad de la CPI⁴³.

El artículo 124 del Estatuto de Roma, ha sido denominado la fórmula *“opt out”* esta permite escapar durante siete años a la

⁴² <http://www.abogarte.com.ar/eeuucpi2.htm>

⁴³ <http://www.tlahui.com/politic/politi01/politi11/intii-2.htm>

aplicación del derecho humanitario por delitos de guerra cuando el delito es cometido por un nacional, esta cláusula tiene como objetivo facilitar que los países se adhieran al Tratado y en esos siete años arreglen sus problemas internos. EU a través de su representante en Roma, David Scheffer, planteó que esta fórmula se quedaba corta y postuló una disposición similar para los crímenes contra la humanidad y no obtuvo apoyo de las naciones, que de por sí ya consideraban la fórmula original una modificación inaceptable al Estatuto.

Manifestó que el hecho de que la Corte pueda ejercer jurisdicción sobre Estados no parte en el Tratado, constituye una violación fundamental del principio de que ningún Estado está obligado por un tratado al que no se ha adherido.

Su principal preocupación se centra en que si los soldados americanos están operando en un país extranjero y cometen crímenes tipificados en el Estatuto podrían verse procesados.

Legisladores republicanos con cierto apoyo demócrata intentaron bloquear al Congreso una partida de 532 millones de dólares destinada a pagar cuotas atrasadas que este país tiene hace años con la ONU. ¿Como es posible que EU amenace con su poder para obtener lo que quiere?, EU se descaró ante el mundo haciendo uso de su poder político, militar y económico para frenar el Tribunal Penal Internacional. Los republicanos exigen que su país sea eximido de

cualquier acción de ese tribunal⁴⁴, y describen a la Corte como una amenaza a la soberanía temen que ciudadanos estadounidenses sean sujeto de persecuciones políticas.

Detrás de este tipo de medidas esta la influencia ex-funcionarios estadounidenses que tienen miedo de responder por su responsabilidad en acontecimientos pasados⁴⁵, que caerían en la competencia de la CPI.

Pero lo más increíble es que la Cámara de Representantes norteamericana aprobó una ley insólita autorizando el pago de la deuda a la ONU a condición de convertir al Tribunal de la Haya en blanco militar si acusa a ciudadanos estadounidenses.

La mayoría republicana esta dispuesta a aprobar el pago de la gigantesca deuda de los Estados Unidos con la ONU si entra a la vez, en vigor la llamada “La Ley de Protección de los Miembros del Servicio Americano 2000”. Algunos expertos en Derecho Internacional llaman a esta ley, “La Ley de Invasión de la Haya”.

- Esta prohíbe cualquier tipo de cooperación con el TPI mientras no sea firmado el Tratado que lo crea.

⁴⁴ <http://w2.clarin.com/diario/2001-08-18/i-03201.htm>

⁴⁵ <http://w2.clarin.com/diario/2001-08-18/i-03201.htm>

- Prohíbe que el Tribunal Penal Internacional de la Haya juzgue a sus ciudadanos e incluso contempla el uso de la fuerza contra el tribunal.
- Impide prestar ayuda militar a todo país ajeno a la OTAN que ratifique el tratado del Estatuto de Roma.
- Prohíbe que tropas estadounidenses participen en misiones de paz de la ONU si no se les concediera inmunidad expresa frente a la jurisdicción del TPI.
- Autorizaría al presidente a utilizar la fuerza para liberar a todo americano o ciudadano de un país aliado que fuera detenido por orden de ese tribunal.⁴⁶
- Requiere inmunidad para el personal estadounidense, impide la entrega a la Corte de información clasificada considerada de seguridad nacional.
- Prohíbe el apoyo militar a cualquier país que haya ratificado el Estatuto de Roma.

El Congreso quiere garantizar a sus soldados que estén protegidos.⁴⁷

⁴⁶ <http://www.abogarte.com.ar/eeucontratpi.html>

⁴⁷ <http://www.aprodeh.org.pe/impunity/16jun2000.htm>

Jessé Helms verdadero artífice de la política de EU sobre la CPI y parte de la comisión de relaciones exteriores del Senado Norteamericano dice: *“Hay que descuartizar el Tratado de la Corte Penal Internacional”*, este tratado presenta un *“enorme peligro para la política exterior norteamericana. Incluso si nunca se firma el tratado, acarreará serias implicaciones para la política exterior estadounidense”*.⁴⁸ El tratado un documento peligroso y con fisuras, y como ejemplo de esto es la definición del crimen de agresión, que fue incorporado en el Estatuto aún sin llegar a un acuerdo claro de cuando se presenta. Y siendo así puede haber agresión cuando los soldados estadounidenses emprendan acción militar en defensa de sus intereses nacionales salvo que Estados Unidos obtenga un permiso de la Corte y es aquí donde se pretende sometería a juicio la política de seguridad nacional de los Estados Unidos.

“EU nunca permitirá que sus decisiones sobre seguridad nacional sean juzgadas por una Corte Penal Internacional”.⁴⁹ Puede darse el caso de dudar en tomar una u otra acción por temor a caer en la competencia de la Corte, cuestión que no está lejos de la realidad.

“Jurisdicción Universal”; que los americanos puedan estar bajo la jurisdicción de la Corte, es un ultraje y tendrá graves consecuencias en nuestras relaciones con cada país que firme y ratifique el Tratado. La administración americana tendrá ahora que renegociar el status de sus acuerdos militares con cada Estado signatario, y reconsiderar la

⁴⁸ <http://www.derechos.org/nizkor/dionis/tpi.html>

⁴⁹ <http://www.derechos.org/nizkor/dionis/tpi.html>

decisión de estacionar tropas en su territorio, participar en operaciones para el mantenimiento de la paz y cumplir con sus compromisos con la Carta de la OTAN.

Consideran que el tratado supone una disolución de la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del veto de los Estados Unidos en el seno del Consejo, lo cual no es sino un argumento para esconder el deseo de poder mantener el control de la Corte a través del Consejo de Seguridad. Los Estados Unidos no pueden vetar un caso del que conozca la Corte, ya que el bloqueo de un caso requeriría del apoyo de la mayoría del Consejo, y el consenso de todos los miembros permanentes, lo que EU considera inaceptable.

Bill Clinton propuso que antes de ratificar dicho Estatuto se observe y determine el funcionamiento de la Corte en un cierto plazo antes de elegir convertirse conforme a su jurisdicción.

Si EU tenía ciertas dudas acerca de aceptar una jurisdicción que no fuera la suya, los ataques terroristas del 11 de septiembre en Washington y Nueva York retrasaron aún más esta idea ya que ahora toda su atención la centrarían en encontrar a los agresores de su país. Ahora siendo el presidente de los EU George Bush al momento de ocurrir estos acontecimientos, debe decidir entre una acción militar o un escenario legal y precisó que la política estadounidense ha sido la de someter a los responsables a los tribunales de su país y no a una corte internacional o de otra nación, ya que quieren hacer caer sobre ellos todo el peso de la ley. Para el presidente George Bush el tema

de la inseguridad interna indicó de su país es una prioridad, antes que la ratificación del Estatuto de Roma.

Los Estados Unidos enviaron una carta a las Naciones Unidas el 6 de mayo del año 2002, en la que expresaron que no tenían la intención de ser parte del tratado, además aclararon que no existe obligación legal alguna derivada de su firma; y pidieron que se retirase su firma de los listados correspondientes.

Estados Unidos a partir de que entró en vigor la Corte Penal Internacional tomo una postura claramente agresiva. Amenazó abiertamente con suspender las misiones de paz que realizan sus soldados alrededor del mundo, si no se les concedía inmunidad. El 12 de Julio del año 2002 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad, la resolución 1422 que le otorga el derecho de suspender la competencia de la nueva Corte Penal Internacional por un año, es decir, la inmunidad ante la CPI de todos los ciudadanos estadounidenses que participan en operaciones de mantenimientos de paz. La resolución hace suponer que la medida será renovada de manera indefinida cada doce meses. México a través de su embajador Adolfo Aguilar Zinser promovió el rechazo a esta petición de Estados Unidos, pero al final voto a favor de los Estados Unidos debido la presión que ejercieron países interesados en que EU no retire sus tropas⁵⁰ se la misma de los listados correspondientes.⁵¹

⁵⁰ EL UNIVERSAL, lunes 26 de agosto del 2002. Nación, página 15.

⁵¹ <http://www.derechos.org/nizkor/impu/tpi/cpiusa1.html>

Actualmente Estados Unidos negocia, país por país, convenios para impedir extradiciones de sus ciudadanos a la Corte Penal Internacional. Para lograr su fin presionará de manera implacable a través de su poder militar, económico y político a aquellas naciones que no se sometan a su voluntad.⁵²

El secretario de Estado, Colin Powell, advirtió que su país podría cortar toda ayuda militar a los países que no suscriban el pacto.

Los únicos dos países que ya firmaron acuerdos de no extradición con los Estados Unidos son Rumania e Israel⁵³, en ese orden. Según este acuerdo, no puede realizarse ninguna extradición al TPI sin la autorización del país del que proceda el individuo; es decir, los países signatarios ofrecen inmunidad recíproca a los ciudadanos del otro país que estén su territorio ante la jurisdicción del TPI.

Este acuerdo se firmó sobre la base del artículo 98 del Estatuto de Roma, que limita la posibilidad del tribunal de pedir a un país que entregue a un sospechoso si es contrario a un acuerdo internacional.

Estados Unidos ha iniciado sus negociaciones en Latinoamérica comenzando por Colombia; sin embargo, todavía se encuentra en estudio la propuesta hecha por los EU, quien a su vez señaló que tiene instalado en Colombia una brigada antinarcóticos que brinda un

⁵² http://www.jrebelde.cubaweb.cu/2002/julio_septiembre/en1272/chantaje.html

⁵³ http://www.estrelladigital.es/020805/articulos/mundo/omedia_tpi.asp

fuerte apoyo a su país, y que es uno de los beneficios que se retirarían de no firmar un convenio de no extradición.⁵⁴

Este proceso de negociaciones apenas esta comenzando, aún no sabemos si la presión de los Estados Unidos va a ser tan fuerte que todos los países bajen la cabeza ante ellos debilitando así la fuerza de la Corte Penal Internacional, o se encuentren con la negativa de algunos otros como es el caso de Suiza que ya se ha negado a suscribir este acuerdo con Estados Unidos.. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza señaló: “que la CPI se verá afectada si no acepta enviar a ciudadanos norteamericanos al tribunal con sede en La Haya”.⁵⁵

⁵⁴ <http://elpais-cali.terra.com.co/JUE/NAL/A622N1A.html>

⁵⁵ http://spanish.peopledaily.com.cn/200208/14/sp20020814_56828.html

CAPITULO 4

MÉXICO: SU RELACIÓN CON LA CPI

México ha expresado en foros internacionales su apoyo para llegar a una jurisdicción penal internacional que supere los defectos de los tribunales *ad hoc*.⁵⁶

México participó creativamente en la maduración de este régimen, a través de un plantel distinguido de diplomáticos que formularon contribuciones valiosas tanto en los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional como en los del Comité Preparatorio.

En la Conferencia de Plenipotenciarios que se llevo a cabo en Roma, México estuvo representado por el embajador Sergio González Galvez quien en su intervención en plenaria expuso la postura del país con respecto a la Corte y por la importancia de esta exposición a continuación la transcribimos:

“ Es obvio que la presencia de México, y su activa participación confirman su apoyo a la creación de este. tribunal, convencido de las

⁵⁶ <http://info.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/6/cl/c18.htm>

ventajas que ofrece una Corte Permanente sobre cortes ad hoc creadas con un fin específico por un órgano político como es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

a) Trataremos de que el Tribunal mantenga su independencia y de que los estados aquí representados no cometan el error de vincular esta Corte con la ONU en la forma como se hizo al negociar en la Carta de las Naciones Unidas la incorporación de la Corte Internacional de Justicia como uno de los órganos principales de la ONU.

b) México trabajará asimismo para garantizar la absoluta imparcialidad y certeza jurídica en las actuaciones de la Corte y procuraremos la inclusión en el Estatuto de las garantías indispensables para asegurar un debido proceso, incluyendo las que se detallan en el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.⁵⁷

c) Quizás uno de los problemas fundamentales de cuya solución dependerá el éxito o el fracaso de estas negociaciones es la forma como se exprese finalmente el llamado principio de complementariedad, que si bien no puede basarse en el

⁵⁷ http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_opt_sp.htm Artículo 14:1. El presente Protocolo, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados mencionados en el Artículo 48 del Pacto.

consentimiento de los Estados, si debe establecer claramente los casos de excepción a la jurisdicción nacional y las salvaguardias que aseguren que no se cometan abusos que puedan afectar la soberanía de los estados mediante la aplicación de criterios subjetivos cuyo alcance es ambiguo. Es por eso que quisiera anunciar que México presentará propuestas muy precisas al proyecto de 1 artículo 15 elaborado en el Comité Preparatorio al mismo tiempo que notificamos que hemos decidido retirar la fórmula alternativa que aún aparece bajo el artículo citado en el informe del Comité Preparatorio.

Lo anterior, Señor Presidente, tiene como objetivo asegurar una clara definición de los casos en los cuales puede actuar la Corte mediante la incorporación de una redacción que transmita el mensaje de que la Corte no será creada para sustituir los sistemas judiciales nacionales en funcionamiento, sino para complementarlos al fijar normas para castigar conforme a derecho los delitos internacionales que se decida incluir en el Estatuto.

5) Por otra parte, mi país considera en esta primera etapa debemos limitarnos a reconocer la jurisdicción de la Corte sobre tres crímenes a saber; genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra que en nuestra opinión debe ampliarse para incluir los crímenes contra las mujeres y contra los menores en particular los que conllevan violencia sexual.

El delito de agresión como crimen que finque responsabilidad a individuos, sólo sería aceptable para México si se desvincula de la idea de que el Consejo de Seguridad sea el único que necesariamente determine cuando haya una agresión y, si se preguntan porqué no podemos dar el monopolio decisorio a ese órgano de las Naciones Unidas, respetuosamente les sugiero que analicen las veces que el Consejo de Seguridad ha declarado la existencia de un "acto de agresión" y las ocasiones en que entre los agresores se menciona a un miembro permanente. Una propuesta hecha durante el debate que México ve con interés es la que señala que en toda actuación del Consejo de Seguridad respecto a la Corte quede prohibido el ejercicio de derecho de veto.

6) La Corte por último deberá ejercer competencia exclusivamente sobre individuos y no sobre estados y deberá financiarse en forma independiente del presupuesto oficial de la ONU dejándolo a cargo de los estados parte de este Estatuto.⁵⁸

Al momento de la votación para cerrar la Conferencia de Plenipotenciarios, México fue uno de los 21 Estados que se abstuvo, la razón principal que expresó para abstenerse en la votación, fue el artículo 16 del Estatuto de Roma, que concede facultad al Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas de solicitar la suspensión de una investigación o un juicio durante doce meses susceptible de ser

⁵⁸ <http://www.un.org/icc/speeches/618mex.htm>

renovada indefinidamente. Máxime cuando previamente nuestro país pugnó por una Corte independiente, ya que considera, que esto resta credibilidad e imparcialidad a la Corte. México no se encuentra de acuerdo con la subordinación política de la Corte Penal Internacional respecto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El embajador Sergio González Gálvez dijo que: *“se trata de un tribunal castrado por el derecho de veto”* de las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial y que hasta el momento mantienen un control antidemocrático, inmoral y peligroso sobre la más importante institución de la comunidad internacional; sin embargo, algunos expertos opinan que esta es una buena medida y que no se puede pretender hacer a un lado al Consejo de Seguridad que tiene como objetivo procurar la paz y la seguridad mundial; y la contraparte son países como, Estados Unidos, China y Rusia quienes rechazaron al TPI por considerar que el Consejo de Seguridad no tiene suficientes atribuciones en esa corte.

Además de la razón anteriormente expuesta, argumentó que se requería un tiempo para analizar a fondo el dispositivo legal del cual se desprenden disposiciones que se contraponen claramente con nuestra Carta Magna y encontrar el camino para conciliar ambos ordenamientos legales.

4. 2 Firma del Estatuto de Roma

Dos años después de haber tenido lugar la Conferencia de Roma, el 7 de septiembre del 2000, en el Marco de la Cumbre del Milenio, el

Presidente de México Ernesto Zedillo suscribió, *ad referendum* el Convenio Internacional que contiene el Estatuto de la Corte Penal Internacional (en adelante CPI); es decir, que la ratificación del Estatuto por parte del Senado de la República solo podrá ser considerado de plena aplicación cuando el Poder Legislativo en el ejercicio de su Soberanía realice las adecuaciones constitucionales y legales correspondientes.

México tomó la decisión de firmar con el propósito de apoyar su posición con respecto a este Tribunal mostrando una participación activa de la delegación mexicana a lo largo de las negociaciones.⁵⁹

La firma de este tratado estuvo dentro del marco de la Cumbre del Milenio y solo fue parte de los compromisos que México signó, se firmaron los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativos a la participación de los infantes en los conflictos armados y a la venta de menores de edad, la prostitución infantil y el uso de niños en la pornografía. La cancillería mexicana firmó también el Convenio Internacional para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo⁶⁰

Esta serie de acciones tomadas por el gobierno mexicano muestra una actitud de un gobierno que busca estar a la vanguardia en materia de derecho internacional, a la par de las primeras potencias.

⁵⁹ http://www.un.int/méxico/CORTE_PENAL_INTERNAZIONALE.htm

⁶⁰ LA JORNADA, viernes 8 de septiembre del 2002.

En ocasión de la suscripción del Estatuto de Roma, México a través de Rosario Green, señaló que lo firmaba “porque los principios que sustenta esta iniciativa son convicciones esenciales de la nación mexicana. Lo hace igualmente como un reconocimiento a la culminación del esfuerzo de la comunidad internacional para establecer una jurisdicción penal internacional que garantice la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en el caso de las violaciones de lesa humanidad”. Preciso que una Corte Penal Internacional impediría que algunos delincuentes se amparen o respalden en fronteras nacionales, pero también evitaría que algunas personas se erigieran en jueces de la humanidad.

Una vez que se firmó el Estatuto Rosario Green entregó una nota a Kofi Annan en la que expresa que será válida esta adopción cuando se realicen las adecuaciones constitucionales necesarias⁶¹

4.3 Ratificación

De ratificarse este tratado, este no sería el primer tribunal con competencia sobre nuestra nación. En 1947, México reconoció la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. En 1998, el gobierno aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (jurisdicción regional). México consultó al primero de estos tribunales en 1995 obteniendo que la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitara una opinión sobre la legalidad del uso o amenaza del uso de armas nucleares y en

⁶¹ EL UNIVERSAL, viernes 8 de septiembre del 2000. Primera Sección, página 1.

1998 cuando pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre el Derecho a la Asistencia Consular como parte de las garantías del debido proceso legal.

Esto nos demuestra que México ya ha probado la eficacia de un tribunal internacional, teniendo claro que estos son muy distintos de lo que sería una Corte Penal Internacional.

El presidente de México Vicente Fox ha asegurado la ratificación del tratado que adopta la CPI en distintos foros intencionales y nacionales y con el fin de acelerar este proceso de ratificación el presidente envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para modificar el artículo 21 de la Constitución el día 6 de diciembre del año 2001. Esta iniciativa adiciona párrafos del artículo 21 Constitucional y son los siguientes:

La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos establece como principios normativos de la política exterior los de autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de los Estados, cooperación internacional para el desarrollo, así como la lucha por la paz y la seguridad internacionales. En este marco, el Estado Mexicano está comprometido a conciliar su orden normativo interno con el derecho internacional que a través de los instrumentos de los que nuestro país sea parte, promueva estos principios.

En congruencia con lo anterior, México ha aceptado la competencia obligatoria de los tribunales internacionales.

La intención en esta reforma es que no haya necesidad de reformar cada uno de los artículos que supuestamente están contraponiéndose al estatuto. En Francia se utilizó una formula similar, se insertó en su constitución un artículo, que faculta a la CPI a ejercer su competencia cuando se tratara de alguno de los crímenes que sanciona y no se alteró nada más.

Esta reforma al contemplar la aceptación de tribunales internacionales, a través de tratados internacionales, quiere decir que las sentencias y resoluciones que los mismos emitan, serán reconocidos por nuestro país.⁶²

Aceptar la competencia de tribunales con jurisdicción sobre nuestros nacionales o en nuestro territorio elimina el monopolio del Ministerio Público en el seguimiento de los delitos.

Sin embargo a comienzos del 2002, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa del Ejecutivo Federal de reformar el artículo 21 de la Constitución a fin de ratificar el Estatuto de Roma. Algunas fuentes indican que se

⁶² <http://www.cimacnoticias.com/noticias/01dic/s01121102.html>

requieren de más modificaciones,⁶³ referentes a los artículos que se considera se contraponen a nuestra Constitución.

4.4 Disposiciones que son incompatibles con la Constitución

En el artículo 23 constitucional se defiende el principio de Cosa Juzgada; es decir, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Si una persona ha sido juzgada por un Estado por alguno de los crímenes competencia del Estatuto, la Corte no ejercerá su jurisdicción a menos que se compruebe que se llevo a cabo un proceso fraudulento; que a decir del artículo 20 del Estatuto, no hubiere sido instruída en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o que existió la intención de sustraer a la persona de la acción de la justicia.

Muchos tratadistas apuntan que esto es contrario a nuestra Constitución, nos parece que un juicio fraudulento no debe considerarse como Cosa Juzgada, pues en realidad no ha existido un verdadero juicio. A veces son los mismos gobiernos quienes cometen los delitos que se tipifican en el Estatuto y se escapan a la acción de la justicia; por lo que, consideramos acertada esta disposición del Estatuto de Roma, como una forma eficaz de limitar la corrupción e inmunidad que se llega a dar en las altas esferas políticas con lo que

⁶³ <http://www.iccnw.org/espanol/mexico/mexico.htm>

respecta a esta disposición se debe reformar la Constitución.⁶⁴ Lo que causa temor es aceptar que la última palabra no la tenga como ha sido siempre en nuestro país la Suprema Corte de Justicia, sino un tribunal que se considera ajeno, pero que en realidad no lo es pues de ratificarse el tratado México sería parte creadora del mismo.

Nuestra constitución contempla en los artículos 108 a 111 una serie de inmunidades y exenciones especiales para algunos servidores públicos; en cambio en el Estatuto de Roma en su artículo 27 dispone que este Estatuto se aplicará de igual manera a toda persona sin distinción alguna basada en el cargo oficial, y sin importar las inmunidades que otorga el derecho interno.

El artículo 29 del Estatuto de Roma dispone que los crímenes competencia de la Corte no prescribirán. En nuestro derecho si existe la prescripción y para reformar esta disposición sería necesario reformar la ley secundaria, los códigos penales y el Código Militar.

En el artículo 20 Constitucional establece en su fracción VII que al inculcado le serán facilitados todos los datos que contribuyan a su defensa y que consten en el proceso, además de tener el derecho a ser juzgado en audiencia pública. El Estatuto en su artículo 72 autoriza a utilizar el procedimiento a puerta cerrada, si la divulgación de información o documentos de un Estado parte puede afectar su seguridad nacional. Este es un punto muy delicado porque podría considerarse que se están violando las garantías procesales del

⁶⁴ <http://www.derechos.net/doc/tpi.html>

inculpado al no acceder a todos los datos que se están utilizando para enjuiciarlo, podría quedar en caso de indefensión, al ser acusado de algo que no conoce, y por otro lado algunos asuntos de seguridad nacional son cuestión muy delicada, y no se puede correr el riesgo de ventilarse a la opinión pública.

El artículo 77 del Estatuto establece las penas, multas y sanciones que puede imponer la CPI, la pena máxima de la libertad no excede de treinta años, y se contempla la cadena perpetua cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado, con posibilidad de a los 25 años de cumplir la sentencia hacer una revisión del caso. En nuestra constitución la pena máxima es de 50 años y no existe la cadena perpetua.

El artículo 15 Constitucional no autoriza la celebración de tratados para la extradición, al adherirnos al Estatuto será obligación esencial el poder extraditar a un criminal para que este sea puesto bajo la competencia de la Corte.

Es lógico que nuestra constitución tenga puntos encontrados con este tratado ya que no fue creado para la aceptación de tribunales internacionales, debido a la época histórica en que nació.⁶⁵ La pregunta es ¿Vale la pena reformar principios de nuestra Carta Magna por el deseo de adherirnos a este organismo que es el Tribunal Penal Internacional?. Algunas de las disposiciones cambiarían normas que están muy arraigadas en nuestro derecho interno. En aras de un bien

⁶⁵ <http://www.senado.gob.mx/gaceta/102/102d2.html>

mayor es viable hacer cualquier modificación a nuestra Carta Magna, pero no debemos pasar por alto que cada precepto tiene historia y una fundamentación que los justifica, por eso se requiere que los expertos juristas hagan un análisis a fondo sobre la conveniencia de hacer los cambios que requiere la Constitución con el fin de ratificar el tratado.

La posición del Gobierno mexicano es la que expresa el Secretario de Relaciones Exteriores Jorge G. Castañeda, quien señaló que para México sería de gran importancia participar en el procedimiento de integración de andamiaje de la Corte, e incluso tener candidatos a jueces o funcionarios del organismo, por eso la importancia de ser de los primeros 60 países en ratificar el Estatuto de Roma. El plazo para ratificar el Estatuto termina el 30 de noviembre del año 2002, todo indica que México no logrará salvar todos sus obstáculos para ratificar el tratado; sin embargo, puede ocurrir.

En palabras burdas el gobierno del presidente Vicente Fox pretende adherirse a como de lugar a la Corte Penal Internacional, lo más pronto posible. Si en el Congreso existiera pleno de convencimiento de adoptar ella jurisdicción de la CPI, aún con los obstáculos constitucionales existentes esto ya sería una realidad. Además del gobierno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y un gran grupo de Organizaciones no gubernamentales, apoyan la adhesión a la CPI.

Pero en este país el presidente propone y el Congreso dispone, y en este el Congreso se encuentra formado y dividido por los distintos partidos políticos que lo integran, y en ocasiones no pueden ponerse

de acuerdo en la toma de decisiones. Es necesario dejar atrás partidismos y pugnar por el mejoramiento de la política del país a favor de los mexicanos.

En este momento el país vive un clima de inestabilidad política, en México se esta estrenando la democracia, por primera vez en setenta años se deposita el poder en un partido de oposición, estamos viviendo un cambio de fondo y forma. Existen problemáticas internas y externas económicas, políticas y sociales.

México quiere ser parte de los cambios a nivel internacional, no quiere quedarse atrás, busca estar a la vanguardia en temas de actualidad como lo es el tema de los Derechos Humanos, quiere dar al mundo una imagen de apertura al cambio para mejorar; sin embargo, le esta haciendo falta mirar hacia adentro, internamente. En México hoy en día se cometen más de uno de los crímenes que señala el Estatuto de Roma, en los que están inmiscuidos, el ejército nacional, la policía judicial y funcionarios con cargos públicos importantes. ¿Que tan conveniente es en este momento firmar un tratado de esta naturaleza?, se corre el peligro que más que lograr estar a la vanguardia México descubra a nivel mundial las atrocidades que ocurren en nuestro país. ¿No sería bueno ordenar un poco hacia adentro de nuestro territorio y luego invitar a nuestros vecinos extranjeros a husmear?, pueden acarrear consecuencias no solo políticas sino económicas para nuestro país.

Vamos a mencionar escuetamente dos sucesos ocurridos en los últimos años para ejemplificar lo dicho. Estos son el caso de Acteal, y el de Aguas Blancas.

4.5 CASO ACTEAL

El día 22 de diciembre de 1997, ocurrió en Acteal municipio de Chenalhó, Chiapas, una verdadera masacre, en la cual un grupo armado de 50 a 60 hombres (algunas versiones dicen que con vestimenta uniformada otras, que eran priístas), mataron indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños armados, quitaron la vida a 45 indígenas tzoliles; así como simpatizantes zapatistas. La Cruz Roja Mexicana dió cuenta de 45 cadáveres de los cuales nueve son hombres, 21 mujeres, 14 niños y un bebe.

En Chanalhó además de los asesinatos mencionados, tuvieron lugar hechos de violencia en el municipio; tales como, desapariciones de personas, robos, y daños a casas habitación y todo tipo de actividades ilegales por parte de grupos paramilitares en la zona.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos acusa al gobierno de haber actuado con negligencia y desinterés, e hizo una recomendación sobre este caso en un corto plazo.

Desde 1996, Human Rights Watch ha documentado y analizado casos de violencia rural, concluyendo que el gobierno estatal de Chiapas ha sido cómplice de tales abusos, que el gobierno federal ha

violado sus obligaciones internacionales de derechos humanos, al no ponerle una solución al problema.

La violencia rural en Chiapas no es unilateral. Los partidarios del Partido Revolucionario Institucional también padecen asesinatos, expulsiones de sus comunidades y otros abusos. La diferencia es la respuesta del gobierno; así como, de los Ministerios Públicos que han realizado toda clase de acciones como el fabricar evidencias y detener personas de manera arbitraria. Otra diferencia notable es que, si se trata de agresores priístas, muchas veces cuentan con el apoyo directo de autoridades estatales.⁶⁶

4.6 CASO AGUAS BLANCAS

El miércoles 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer dio instrucciones a algunos agentes de la policía motorizada y judicial del estado de Guerrero de iniciar un tiroteo en que perdieran la vida 17 campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), y más de 20 resultaran heridos. Los sobrevivientes aseguraron que los mencionados fueron ejecutados con un tiro en la cabeza, y que después de la matanza los policías colocaron armas de fuego en las manos de los campesinos muertos asegurando así, que habían

⁶⁶ <http://www.hrw.org/spanish/opinion>, <http://www.laneta.apc.org/sclc/noticias/99122202.htm>, <http://www.laneta.apc.org/sclc/noticias/99122202.htm>, <http://burn.ucsd.edu/archives/chiapas-1/1998.01/msg00421.html>, <http://www.peacebrigades.org/ern/ernchiapas-e.html>

actuado en defensa propia, acusando a los campesinos de haber comenzado el tiroteo.

Los campesinos pretendían reclamar el cumplimiento de la promesa de fertilizantes para sus tierras y el cese de la tala despiadada de recursos madereros.

Hay violencia en diversas comunidades rurales. Los casos de Acteal y Aguas Blancas han sido del conocimiento público y otros tantos se han quedado en el silencio. Resultado de esto existen: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército Popular Revolucionario, el Ejército Revolucionario Insurgente del Pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo y más de 30 organizaciones en armas contra el gobierno.⁶⁷

Hay muchísimos casos de violencia rural, mencionamos estos ya que son unos de los más destacados, además de que clarifican las conductas ilegales que se llevan a cabo en nuestro país.

Se realizan en nuestro país conductas que la Corte ha tipificado en su Estatuto como crímenes. Hay denuncias en contra de los métodos que utiliza la policía judicial para obtener información de algún detenido, que encuadran en el delito conocido como, tortura. Prácticas como esta van en contra de los derechos y garantías procesales que propone el Estatuto de Roma.

⁶⁷<http://www.patriagrande.net/mexico/aguas.blancas/>, http://www.anncol.com/julio2002/0907_masacres.htm

CAPITULO 5

CONCLUSIONES

La creación de la Corte Penal Internacional requirió de años de trabajo para lograr que hoy sea una realidad. Nació por impulso de la Organización de las Naciones Unidas a través de la ratificación de su Estatuto, "El Estatuto de Roma", en el que se encuentran codificados por primera vez los crímenes considerados los peores de la humanidad: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. Se logró crear un órgano jurisdiccional con características que lo hacen fuerte para combatir la impunidad, es permanente e independiente a diferencia de los tribunales internacionales anteriores. Para la creación de este Estatuto los expertos juristas se basaron en diversos instrumentos internacionales y fusionaron diversas tradiciones jurídicas.

Los tribunales de Nüremberg y Tokio, así como los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y para Ruanda, sientan el precedente en el que se apoya esta Corte. Tanto sus defectos como sus aciertos sirvieron para crear la Corte Penal Internacional.

Existió presión política para lograr el texto de el Estatuto de Roma en un plazo determinado. Muchos países no estuvieron de acuerdo con el mismo y aún así lo han ratificado, lo que no es el caso de Estados Unidos, ni de México.

La característica de independencia de la Corte, se ve mermada, con la obtención por parte de los Estados Unidos de inmunidad por el período de un año con derecho de renovación indefinida para sus soldados en misiones de paz, y una excepción a través del artículo 98 del Estatuto de Roma para no extraditar a sus ciudadanos a la Corte y escapar de la jurisdicción de la misma. Con esto queda demostrado que este Estatuto no se aplica con igualdad a todos los individuos como lo establece, y contraria el principio que se legó desde los juicios de Nüremberg de la irrelevancia del cargo oficial como escudo protector de la justicia penal.

La fuerza política que ejerció Estados Unidos fue devastadora, y la Corte sigue subordinada en algunas disposiciones al Consejo de Seguridad y por consecuencia también a los países más ricos y fuertes. Los Estados Unidos con tal de no perder dominio como gendarme del mundo ha presionado y seguirá haciéndolo hasta conseguir sus objetivos, chantajeando a los países a través de su poder militar, económico y político, siempre escudándose en el hecho de ser el principal defensor de los Derechos Humanos alrededor del mundo, cuando son los primeros en violarlos. Estados Unidos se ha constituido como el justiciero del mundo.

En pleno siglo veintiuno sigue reinando la ley del más fuerte. México depende de muchas maneras de su vecino del norte. México no está en condiciones de violentar en estos momentos su buena relación con los Estados Unidos, que puede presionarlo de distintas maneras.

Y la presión de los EU no es el único obstáculo que México tiene para ratificar el Estatuto. En México se vive una realidad en la que se violan constantemente los derechos humanos, si bien es cierto el ideal de la Corte es corregir esto, también lo es que el proceso interno requiere un cambio urgente de estructuras, una planeación profunda que corrija problemas de fondo. Las masacres ocurridas en Acteal, Aguas Blancas, las prácticas ilegales que llevan a cabo las autoridades, son conductas que se pueden encuadrar como crímenes tipificados del Estatuto de Roma. ¿Estamos listos para permitir que nuestras autoridades sean procesadas bajo la competencia de la Corte?.

México se encuentra estrenando un gobierno de oposición, tiene problemas internos de partidismo adentro de su Congreso, el presidente no tiene el apoyo necesario para lograr llevar al cabo las iniciativas que propone, esto propicia una inestabilidad política.

Si México ratifica el Estatuto su imagen al exterior sería buena, pero al poner al descubierto la realidad del país quizá a largo plazo esta imagen pierda más de lo que podría ganar.

Para que México ratifique este Estatuto es necesario modificar la Constitución, este proceso requiere tiempo, y el tiempo se esta acabando. El 30 de noviembre termina el plazo que se dio para ratificar el Estatuto, los países que no ratifiquen el Estatuto en esta fecha no podrán ser parte de la Asamblea de Partes como ya se dijo y perderán poder de decisión en la Corte; sin embargo, y con estas desventajas se podría ratificar el Estatuto después del plazo indicado.

Concluimos que México **NO DEBE RATIFICAR EL ESTATUTO DE ROMA** en este momento y si realmente desea hacerlo le conviene esperar un tiempo; quizá en unos años, principalmente para arreglar sus problemas internos, para estar respaldado por una política fuerte, tener la oportunidad de observar como se desarrolla la Corte en la práctica, y conocer el funcionamiento de la misma; todo esto con el fin de que cuando tome la decisión de ratificar el Estatuto de Roma este le traiga consigo ventajas, y no problemas.

BIBLIOGRAFÍA

- BASSIOUNI, Cherif "Statute of the International Criminal Court and Related Instruments: Legislative History 1994-2000", Transnational Publishers, U.S.A. 2002.
- BASSIOUNI, Cherif "The Statute of the International Criminal Court: A Documentary History", Transnational Publishers; U.S.A. 2002.
- BROOMHALL, Bruce "International Criminal Justice and the International Criminal Court: Between State Consent and the Rule of Law", Oxford University Press, U.S.A. 2002.
- CASSESE, Antonio, ESER, Albin, GAJA, Giorgio. "The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary", Oxford University Press, U.S.A, 2002.
- CORCUERA, Santiago, GUEVARA, José Antonio "Justicia Penal Internacional". Universidad Ibero Americana, México, 2001.
- DÖRMANN, Knut, DOSWALD-BECK, Louise, KOLB, Robert. "Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court : Sources and Commentary", Cambridge University Press, U.S.A, 2002.
- FRYE, Alton. "Toward An International Criminal Court? A Council Policy Initiative", The Brookings Institution, U.S.A, 2000.
- GOLDBACH, Laurie, "Rethinking Rape: Gender Justice and the Proposed International Criminal Court", Assn of Women & the Law, U.S.A, 2000.
- J. M. Christoph, "Towards an International Criminal Procedure", Oxford University Press, U.S.A 2001.
- J. William, "The Inns of Court and Chancery", Loftie Oceana Publications, U.S.A, 1985

- LEE, ROY S., FRIMAN Hakan. "The International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence", Transnational Publishers, October, 2001.
- LEE, Roy S. "The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute Issues, Negotiations, Results", Kluwer Law International, U.S.A, 1999.
- NADYA, Leila "The International Criminal Court and the Transformation of International Law: Justice for the New Millennium", Sadat Transnational Publishers, U.S.A, 2002.
- "Report of the Task Force on an International Criminal Court of the American Bar Association", ABA Professional Education Publications, U.S.A, 1995.
- RIVKIN, B. David Jr, "The International Criminal Court vs. The American People", The Heritage Foundation, U.S.A, 2002.
- .
- ROGGMANN, Herwig, SARCEVIC, Petar, RAMCHARAN, B. G. "National Security and International Criminal Justice", Kluwer Academic Publishers; U.S.A, 2002.
- .
- SEWALL, Sarah B., KAYSEN, Carl. "The United States and the International Criminal Court", Rowman & Littlefield Publishing, U.S.A, 2000.
- SCHABAS, William. "An Introduction to the International Criminal Court", Cambridge University Press, U.S.A, 2001.
- SHELTON, Dinah. "International Crimes, Peace, and Human Rights: The Role of the International Criminal Court", Transnational Publishers, U.S.A, 2000.
- SCHUKKING, Jolien, BOS, Adriaan, HERMAN, A.M., LAMMERS, Johan G. "Reflections on the International Criminal Court - Essays in Honour of Adriaan Bos", Kluwer Academic Publishers, U.S.A, 1999.

- <http://www.derechos.org/nizkor/ley/ruanda.html>
- <http://www.derechos.org/nizkor/impu/tpi/>
- <http://www.icrc.org/icrcspa.nsf/22615d8045206c9b41256559002f7de4/d07a4ccfe7a0ea894125669c004db654?OpenDocument>
(Estatuto de Roma)
- <http://www.asil.org/resource/crim1.htm#International%20Criminal%20Court>
- <http://www.un.org/law/icc/index.html>
- <http://www.rochesterdandc.com/>
- <http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/periodicos/>
- <http://www.washingtonpost.com/>
- <http://www.cnienlinea.com.mx/>
- <http://www.elcolombiano.terra.com.co/historicod/200208/20020814/nun037.htm>
- <http://www.camaradediputados.gob.mx/index1.html>
- www.asil.org
- <http://www.cddhcu.gob.mx/servicios/datorele/2PO2/marzo25/7.htm>
- <http://www.patriagrande.net/mexico/aguas.blancas/>, http://www.anncol.com/julio2002/0907_masacres.htm

- [http://www.hrw.org/spanish/opinion,](http://www.hrw.org/spanish/opinion)
[http://burn.ucsd.edu/archives/chiapas-l/1998.01/msg00421.html,](http://burn.ucsd.edu/archives/chiapas-l/1998.01/msg00421.html)
<http://www.peacebrigades.org/ern/ernchiapas-e.html>
- <http://www.senado.gob.mx/gaceta/102/102d2.html>
- <http://www.derechos.net/doc/tpi.html>
- <http://www.cimacnoticias.com/noticias/01dic/s01121102.html>
- <http://www.iccnw.org/espanol/mexico/mexico.htm>
- http://www.un.int/méxico/CORTE_PENAL_INTERNACIONAL.htm
- <http://www.un.org/icc/speeches/618mex.htm>
- http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_opt_sp.htm
- <http://info.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/6/cl/c18.htm>
- <http://www.ongd-clm.org/monograficos/tribunal.htm>
- <http://www.abogarte.com.ar/eeuucontratpi.html>
- <http://www.aprodeh.org.pe/impunity/16jun2000.htm>
- <http://w2.clarin.com/diario/2001-08-18/i-03201.htm>
- <http://cnnespañol.com/2000/mundo/medio/12/31/court>
- www.derechos.org/nizkor/dionis/tpi.html
- www.bbc.com
- <http://www.nv.es/~ripj/javij.htm>

- www.igc.org/icc/html/globalsouthspanish.html
- <http://www.org/icc/statute.htm#part1>
- <http://www.un.org/spanish/news/facts/iccfact.htm>
- <http://www.un.org/law/icc/>
- <http://www.earthaction.org/es/archive/98-03-icc/background.html>
- <http://www.icrc.org/icrcspa.nsf/22615d8045206c9b41256559002f7de4/2fa1fd0d9c7171d5412565e80058dd34?OpenDocument>
- <http://www.cicr.org/icrcspa.nsf/22615d8045206c9b41256559002f7de4/642e89e74b3320bd4125663a0054e35b?OpenDocument>
- [http://www.derechos.org/koaga/v/1/huhle.html#c\)%20Las%20Cortes%20Penales%20Internacionales](http://www.derechos.org/koaga/v/1/huhle.html#c)%20Las%20Cortes%20Penales%20Internacionales).
- <http://www.ishr.org/icc/info/infouz.htm>
- http://www.politicayactualidad.com/textos.asp?id_texto=1379&id_seccion=11
- <http://www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm>
- <http://news.bbc.co.uk/1/low/world/europe/2277589.stm>
- <http://news.bbc.co.uk/1/low/world/europe/2277589.stm>
- <http://news.bbc.co.uk/1/low/world/europe/2354129.stm>
- <http://news.bbc.co.uk/1/low/world/europe/2354129.stm>
- <http://news.bbc.co.uk/1/low/world/europe/2284638.stm>

ANEXO I

ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL NACIONES UNIDAS

A/Conf. 183/9, 17 de julio de 1998

En el presente texto del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se han incorporado las correcciones distribuidas por el Depositario el 25 de septiembre de 1998 y el 18 de mayo de 1999.

Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional

17 de agosto de 1999

Nueva York

16 a 26 de febrero de 1999

26 de julio a 13 de agosto de 1999

29 de noviembre a 17 de diciembre de 1999

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado en Roma el 17 de julio de 1998

(incluye las modificaciones aportadas por los Estados y las Naciones Unidas durante los años 1999 y 2000)

• Firmas, ratificaciones y adhesiones en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 17 de julio de 1998.

PREÁMBULO

Los Estados Partes en el presente Estatuto,

Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento,

Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,

Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,

Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia,

Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes,

Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales,

Reafirmando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,

Destacando, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el presente Estatuto deberá entenderse en el sentido de que autorice a un Estado Parte a intervenir en una situación de conflicto armado o en los asuntos internos de otro Estado,

Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto,

Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales,

Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I. DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE

Artículo 1 La Corte

Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la Corte").

La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.

Artículo 2

Relación de la Corte con las Naciones Unidas

La Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.

Artículo 3

Sede de la Corte

1. La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos ("el Estado anfitrión").
2. La Corte concertará con el Estado anfitrión un acuerdo relativo a la sede que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.
3. La Corte podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.

Artículo 4

Condición jurídica y atribuciones de la Corte

1. La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos.
2. La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado.

PARTE II. DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD Y EL DERECHO APLICABLE

Artículo 5

Crímenes de la competencia de la Corte

1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:
 - a) El crimen de genocidio;

- b) Los crímenes de lesa humanidad;
- c) Los crímenes de guerra;
- d) El crimen de agresión.

2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 6 **Genocidio**

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

- a) Matanza de miembros del grupo;
- b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
- c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
- d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
- e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 7 **Crímenes de lesa humanidad**

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

- a) Asesinato;
- b) Exterminio;
- c) Esclavitud;
- d) Deportación o traslado forzoso de población;
- e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

i) Desaparición forzada de personas;

j) El crimen de apartheid;

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

2. A los efectos del párrafo 1:

a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política;

b) El "exterminio" comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;

c) Por "esclavitud" se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños;

d) Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;

e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;

f) Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de

modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;

g) Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;

h) Por "el crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;

i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término "género" se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término "género" no tendrá más acepción que la que antecede.

Artículo 8

Crímenes de guerra

1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra":

a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:

i) El homicidio intencional;

ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;

iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud;

- iv) La destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente;
 - v) El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga;
 - vi) El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente;
 - vii) La deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal;
 - viii) La toma rehenes;
- b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
- i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades;
 - ii) Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares;
 - iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados;
 - iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea;
 - v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares;
 - vi) Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción;
 - vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves;
 - viii) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio

ocupado, dentro o fuera de ese territorio;

ix) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;

x) Someter a personas que estén en poder del perpetrador a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;

xi) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo;

xii) Declarar que no se dará cuartel;

xiii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo;

xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga;

xv) Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado al servicio del beligerante antes del inicio de la guerra;

xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto;

xvii) Emplear veneno o armas envenenadas;

xviii) Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogo;

xix) Emplear balas que se ensanchan o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones;

xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho humanitario internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123;

xxi) Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una infracción grave de los Convenios de Ginebra;

xxiii) Utilizar la presencia de una persona civil u otra persona protegida para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones militares;

xxiv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios, y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;

xxv) Hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra;

xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades;

c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa:

i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;

ii) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

iii) La toma de rehenes;

iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables.

d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos.

e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;

ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios y contra el personal que utilicen los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;

iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados;

iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares;

v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;

vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra;

vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;

viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas;

ix) Matar o herir a traición a un combatiente enemigo;

x) Declarar que no se dará cuartel;

xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;

xii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo;

f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y, por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos de carácter similar. Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos.

3. Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y e) afectará a la responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener y restablecer el orden público en el Estado y de defender la unidad e integridad territorial del Estado por cualquier medio legítimo.

Artículo 9

Elementos de los crímenes

1. Los Elementos de los crímenes, que ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar los artículos 6,7 y 8 del presente Estatuto, serán aprobados por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.

2. Podrán proponer enmiendas a los Elementos de los crímenes:

- a) Cualquier Estado Parte;
- b) Los magistrados, por mayoría absoluta;
- c) El Fiscal.

Las enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.

3. Los Elementos de los crímenes y sus enmiendas serán compatibles con lo dispuesto en el presente Estatuto.

Artículo 10

Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o en desarrollo del derecho internacional para fines distintos del presente Estatuto.

Artículo 11

Competencia temporal

1. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto.
2. Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12.

Artículo 12

Condiciones previas para el ejercicio de la competencia

1. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el artículo 5.
2. En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá ejercer su competencia si uno o varios de los Estados siguientes son Partes en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de la Corte de conformidad con el párrafo 3:
 - a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se trate, o si el crimen se hubiere cometido a bordo de un buque o de una aeronave, el Estado de matrícula del buque o la aeronave;
 - b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen.
3. Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto fuere necesaria de conformidad con el párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante declaración depositada en poder del Secretario, consentir en que la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante cooperará con la Corte sin demora ni excepción de conformidad con la Parte IX.

Artículo 13

Ejercicio de la competencia

La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:

- a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes;

b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o

c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.

Artículo 14

Remisión de una situación por un Estado Parte

1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.

2. En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa de que disponga el Estado denunciante.

Artículo 15

El Fiscal

1. El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte.

2. El Fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con tal fin, podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte.

3. El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto con la documentación justificativa que haya reunido. Las víctimas podrán presentar observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4. Si, tras haber examinado la petición y la documentación que la justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el inicio de la investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a su competencia y la admisibilidad de la causa.

5. La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la investigación no impedirá que el Fiscal presente ulteriormente otra petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma situación.

6. Si, después del examen preliminar a que se refieren los párrafos 1 y 2, el Fiscal llega a la conclusión de que la información presentada no constituye fundamento suficiente para una investigación, informará de ello a quienes la hubieren presentado. Ello no impedirá que el Fiscal examine a la luz de hechos o pruebas nuevos, otra información que reciba en relación con la misma situación.

Artículo 16

Suspensión de la investigación o el enjuiciamiento

En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pida a la Corte que suspenda por un plazo de doce meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esa suspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones.

Artículo 17

Cuestiones de admisibilidad

1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando: a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;

b) El asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;

c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda adelantar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20;

d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte.

2. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:

a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5;

b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia;

c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

3. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, la Corte examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.

Artículo 18

Decisiones preliminares relativas a la admisibilidad

1. Cuando se haya remitido a la Corte una situación en virtud del artículo 13 a) y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación e inicie esa investigación en virtud de los artículos 13 c) y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas, impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.

2. Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la Corte que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados. A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal autorizar la investigación.

3. El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la remisión o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.

4. El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de

conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.

5. Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.

6. El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones v Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.

7. El Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del presente artículo podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.

Artículo 19

Impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa

1. La Corte se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La Corte podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17.

2. Podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte:

a) El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;

b) Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque está investigándola o enjuiciándola o lo ha hecho antes; o

c) Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.

3. El Fiscal podrá pedir a la Corte que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 y las víctimas.

4. La admisibilidad de una causa o la competencia de la Corte sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados

a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio. En circunstancias excepcionales, la Corte podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17.

5. El Estado a que se hace referencia en los apartados b) y c) del párrafo 2 del presente artículo hará la impugnación lo antes posible.

6. Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la Corte será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82.

7. Si la impugnación es hecha por el Estado a que se hace referencia en los apartados b) o c) del párrafo 2, el Fiscal suspenderá la investigación hasta que la Corte resuelva de conformidad con el artículo 17.

8. Hasta que la Corte se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:

a) Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionada en el párrafo 6 del artículo 18;

b) Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y c) Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58.

9. La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la Corte, antes de ella.

10. Si la Corte hubiere declarado inadmisibile una causa de conformidad con el artículo 17, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisibile de conformidad con dicho artículo.

11. El Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.

Artículo 20

Cosa juzgada

1. Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie será procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.
2. Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los crímenes mencionados en el artículo 5 por el cual la Corte ya le hubiere condenado o absuelto.
3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro tribunal:
 - a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; o
 - b) No hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia.

Artículo 21

Derecho aplicable

1. La Corte aplicará:
 - a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos de los crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba;
 - b) En segundo lugar, cuando proceda, los tratados aplicables, los principios y normas del derecho internacional aplicables, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados;
 - c) En su defecto, los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles con el presente Estatuto ni con el derecho internacional ni las normas y estándares internacionalmente reconocidos.
2. La Corte podrá aplicar principios y normas de derecho respecto de los cuales hubiere hecho una interpretación en decisiones anteriores.
3. La aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos como el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, la edad, la raza, el color, la religión o el credo, la opinión política o de otra índole, el origen

nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u otra condición.

PARTE III. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO PENAL

Artículo 22

Nullum crimen sine lege

1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte.
2. La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, será interpretada en favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena.
3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la tipificación de una conducta como crimen de derecho internacional independientemente del presente Estatuto.

Artículo 23

Nulla poena sine lege

Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.

Artículo 24

Irretroactividad ratione personae

1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.
2. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena.

Artículo 25

Responsabilidad penal individual

1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales.
2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.
3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien:

- a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable;
- b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
- c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión;
- d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común.

La contribución deberá ser intencional y se hará:

- i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte; o
- ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen; e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se cometa;
- f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consuma no podrá ser penado de

conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.

4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional.

Artículo 26

Exclusión de los menores de 18 años de la competencia de la Corte

La Corte no será competente respecto de los que fueren menores de 18 años en el momento de la presunta comisión del crimen.

Artículo 27

Improcedencia del cargo oficial

1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.

2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella.

Artículo 28

Responsabilidad de los jefes y otros superiores

Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:

a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido

un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:

i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y

ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.

b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, cuando:

i) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos;

ii) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y

iii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.

Artículo 29
Imprescriptibilidad

Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.

Artículo 30
Elemento de intencionalidad

1. Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si actúa con intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen.

2. A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa intencionalmente quien:

- a) En relación con una conducta, se propone incurrir en ella;
- b) En relación con una consecuencia, se propone causarla o es consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos.

3. A los efectos del presente artículo, por "conocimiento" se entiende la conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras "a sabiendas" y "con conocimiento" se entenderán en el mismo sentido.

Artículo 31
Circunstancias eximentes de responsabilidad penal

1. Sin perjuicio de las demás circunstancias eximentes de responsabilidad penal establecidas en el presente Estatuto, no será penalmente responsable quien, en el momento de incurrir en una conducta:

- a) Padeciere de una enfermedad o deficiencia mental que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley;
- b) Estuviere en un estado de intoxicación que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley, salvo que se haya intoxicado voluntariamente a sabiendas de que, como resultado de la intoxicación, probablemente incurriría en una conducta tipificada como crimen de la competencia de la Corte, o haya hecho caso omiso del riesgo de que ello ocurriese;
- c) Actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero o, en el caso de los crímenes de guerra, de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero o de un bien que fuese esencial para realizar una misión militar, contra un uso inminente e ilícito de la fuerza, en forma proporcional al grado de peligro para él, un tercero o los bienes

protegidos. El hecho de participar en una fuerza que realizare una operación de defensa no bastará para constituir una circunstancia eximente de la responsabilidad penal de conformidad con el presente apartado;

d) Hubiere incurrido en una conducta que presuntamente constituya un crimen de la competencia de la Corte como consecuencia de coacción dimanante de una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves para él u otra persona, y en que se vea compelido a actuar necesaria y razonablemente para evitar esa amenaza, siempre que no tuviera la intención de causar un daño mayor que el que se proponía evitar. Esa amenaza podrá:

i) Haber sido hecha por otras personas; o

ii) Estar constituida por otras circunstancias ajenas a su control.

2. La Corte determinará si las circunstancias eximentes de responsabilidad penal admitidas por el presente Estatuto son aplicables en la causa de que esté conociendo.

3. En el juicio, la Corte podrá tener en cuenta una circunstancia eximente de responsabilidad penal distinta de las indicadas en el párrafo 1 siempre que dicha circunstancia se desprenda del derecho aplicable de conformidad con el artículo 21. El procedimiento para el examen de una eximente de este tipo se establecerá en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Artículo 32

Error de hecho o error de derecho

1. El error de hecho eximirá de responsabilidad penal únicamente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por el crimen.

2. El error de derecho acerca de si un determinado tipo de conducta constituye un crimen de la competencia de la Corte no se considerará eximente. Con todo, el error de derecho podrá considerarse eximente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por ese crimen o si queda comprendido en lo dispuesto en el artículo 33 del presente Estatuto.

Artículo 33

Órdenes superiores y disposiciones legales

1. Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal a menos que:

a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate;

b) No supiera que la orden era ilícita; y

c) La orden no fuera manifiestamente ilícita.

2. A los efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas.

PARTE IV. DE LA COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA CORTE

Artículo 34

Órganos de la Corte

La Corte estará compuesta de los órganos siguientes:

a) La Presidencia;

b) Una Sección de Apelaciones, una Sección de Primera Instancia y una Sección de Cuestiones Preliminares;

c) La Fiscalía;

d) La Secretaría.

Artículo 35

Desempeño del cargo de magistrado

1. Todos los magistrados serán elegidos miembros de la Corte en régimen de dedicación exclusiva y estarán disponibles para desempeñar su cargo en ese régimen desde que comience su mandato.

2. Los magistrados que constituyan la Presidencia desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva tan pronto como sean elegidos.

3. La Presidencia podrá, en función del volumen de trabajo de la Corte, y en consulta con los miembros de ésta, decidir por cuánto tiempo será necesario que los demás magistrados desempeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva. Las decisiones que se adopten en ese sentido se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40.

4. Las disposiciones financieras relativas a los magistrados que no deban desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva serán adoptadas de conformidad con el artículo 49.

Artículo 36

Condiciones que han de reunir los magistrados, candidaturas y elección de los magistrados

1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, la Corte estará compuesta de 18 magistrados.

2. a) La Presidencia, actuando en nombre de la Corte, podrá proponer que aumente el número de magistrados indicado en el párrafo 1 y señalará las razones por las cuales considera necesario y apropiado ese aumento. El Secretario distribuirá prontamente la propuesta a todos los Estados Partes;

b) La propuesta será examinada en una sesión de la Asamblea de los Estados Partes que habrá de convocarse de conformidad con el artículo 112. La propuesta, que deberá ser aprobada en la sesión por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes, entrará en vigor en la fecha en que decida la Asamblea;

c) i) Una vez que se haya aprobado una propuesta para aumentar el número de magistrados con arreglo al apartado b), la elección de los nuevos magistrados se llevará a cabo en el siguiente período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes, de conformidad con los párrafos 3 a 8 del presente artículo y con el párrafo 2 del artículo 37;

ii) Una vez que se haya aprobado y haya entrado en vigor una propuesta para aumentar el número de magistrados con arreglo a los apartados b) y c) i), la Presidencia podrá en cualquier momento, si el volumen de trabajo de la Corte lo justifica, proponer que se reduzca el número de magistrados, siempre que ese número no sea inferior al indicado en el párrafo 1. La propuesta será examinada de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados a) y b). De ser aprobada, el número de magistrados se reducirá progresivamente a medida que expiren los mandatos y hasta que se llegue al número debido.

3. a) Los magistrados serán elegidos entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países;

b) Los candidatos a magistrados deberán tener:

i) Reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar; o

ii) Reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte;

c) Los candidatos a magistrado deberán tener un excelente conocimiento y dominio de por lo menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.

4. a) Cualquier Estado Parte en el presente Estatuto podrá proponer candidatos en las elecciones para magistrado de la Corte mediante:

i) El procedimiento previsto para proponer candidatos a los más altos cargos judiciales del país; o

ii) El procedimiento previsto en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia para proponer candidatos a esa Corte. Las propuestas deberán ir acompañadas de una exposición detallada acerca del grado en que el candidato cumple los requisitos enunciados en el párrafo 3;

b) Un Estado Parte podrá proponer un candidato que no tenga necesariamente su nacionalidad, pero que en todo caso sea nacional de un Estado Parte;

c) La Asamblea de los Estados Partes podrá decidir que se establezca un comité asesor para las candidaturas. En ese caso, la Asamblea de los Estados Partes determinará la composición y el mandato del comité.

5. A los efectos de la elección se harán dos listas de candidatos:

La lista A, con los nombres de los candidatos que reúnan los requisitos enunciados en el apartado b) i) del párrafo 3; y La lista B, con los nombres de los candidatos que reúnan los requisitos enunciados en el apartado b) ii) del párrafo 3. El candidato que reúna los requisitos requeridos para ambas listas podrá elegir en cuál desea figurar. En la primera elección de miembros de la Corte, por lo menos nueve magistrados serán elegidos entre los candidatos de la lista A y por lo menos cinco serán elegidos entre los de la lista B. Las elecciones subsiguientes se organizarán de manera que se mantenga en la Corte una proporción equivalente de magistrados de ambas listas.

6. a) Los magistrados serán elegidos por votación secreta en una sesión de la Asamblea de los Estados Partes convocada con ese fin con arreglo al artículo 112. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 7, serán elegidos los 18 candidatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes;

b) En el caso de que en la primera votación no resulte elegido un número suficiente de magistrados, se procederá a nuevas votaciones de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado a) hasta cubrir los puestos restantes.

7. No podrá haber dos magistrados que sean nacionales del mismo Estado. Toda persona que, para ser elegida magistrado, pudiera ser considerada nacional de más de un Estado, será considerada nacional del Estado donde ejerza habitualmente sus derechos civiles y políticos.

8. a) Al seleccionar a los magistrados, los Estados Partes tendrán en cuenta la necesidad de que en la composición de la Corte haya:

i) Representación de los principales sistemas jurídicos del mundo;

ii) Distribución geográfica equitativa; y

iii) Representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres;

b) Los Estados Partes tendrán también en cuenta la necesidad de que haya en la Corte magistrados que sean juristas especializados en temas concretos que incluyan, entre otros, la violencia contra las mujeres o los niños.

9. a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), los magistrados serán elegidos por un mandato de nueve años y, con sujeción al apartado c) y al párrafo 2 del artículo 37, no podrán ser reelegidos;

b) En la primera elección, un tercio de los magistrados elegidos será seleccionado por sorteo para desempeñar un mandato de tres años, un tercio de los magistrados será seleccionado por sorteo para desempeñar un mandato de seis años y el resto desempeñará un mandato de nueve años;

c) Un magistrado seleccionado para desempeñar un mandato de tres años de conformidad con el apartado b) podrá ser reelegido por un mandato completo.

10. No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, un magistrado asignado a una Sala de Primera Instancia o una Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 39 seguirá en funciones a fin de llevar a término el juicio o la apelación de los que haya comenzado a conocer en esa Sala.

Artículo 37

Vacantes

1. En caso de producirse una vacante se celebrará una elección de conformidad con el artículo 36 para cubrirla.

2. El magistrado elegido para cubrir una vacante desempeñará el cargo por el resto del mandato de su predecesor y, si éste fuera de tres años o menos, podrá ser reelegido por un mandato completo con arreglo al artículo 36.

Artículo 38

Presidencia

1. El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo serán elegidos por mayoría absoluta de los magistrados. Cada uno desempeñará su cargo por un período de tres años o hasta el término de su mandato como magistrado, si éste se produjere antes. Podrán ser reelegidos una vez.

2. El Vicepresidente primero sustituirá al Presidente cuando éste se halle en la imposibilidad de ejercer sus funciones o haya sido recusado. El Vicepresidente segundo sustituirá al Presidente cuando éste y el Vicepresidente primero se hallen en la imposibilidad de ejercer sus funciones o hayan sido recusados.

3. El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo constituirán la Presidencia, que estará encargada de:

a) La correcta administración de la Corte, con excepción de la Fiscalía; y

b) Las demás funciones que se le confieren de conformidad con el presente Estatuto.

4. En el desempeño de sus funciones enunciadas en el párrafo 3 a), la Presidencia actuará en coordinación con el Fiscal y recabará su aprobación en todos los asuntos de interés mutuo.

Artículo 39

Las Salas

1. Tan pronto como sea posible después de la elección de los magistrados, la Corte se organizará en las secciones indicadas en el artículo 34 b). La Sección de Apelaciones se compondrá del Presidente y otros cuatro magistrados, la Sección de Primera Instancia de no menos de seis magistrados y la Sección de Cuestiones Preliminares de no menos de seis magistrados. Los magistrados serán asignados a las secciones según la naturaleza de las funciones que corresponderán a cada una y sus respectivas calificaciones y experiencia, de manera que en cada sección haya una combinación apropiada de especialistas en derecho y procedimiento penales y en derecho internacional. La Sección de Primera Instancia y la Sección de Cuestiones Preliminares estarán integradas predominantemente por magistrados que tengan experiencia en procedimiento penal.

2. a) Las funciones judiciales de la Corte serán realizadas en cada sección por las Salas;

b) i) La Sala de Apelaciones se compondrá de todos los magistrados de la Sección de Apelaciones;

ii) Las funciones de la Sala de Primera Instancia serán realizadas por tres magistrados de la Sección de Primera Instancia;

iii) Las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares serán realizadas por tres magistrados de la Sección de Cuestiones Preliminares o por un solo magistrado de dicha Sección, de conformidad con el presente

Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba;

c) Nada de lo dispuesto en el presente párrafo obstará a que se constituyan simultáneamente más de una Sala de Primera Instancia o Sala de Cuestiones Preliminares cuando la gestión eficiente del trabajo de la Corte así lo requiera.

3. a) Los magistrados asignados a las Secciones de Primera Instancia y de Cuestiones Preliminares desempeñarán el cargo en esas Secciones por un período de tres años, y posteriormente hasta llevar a término cualquier causa de la que hayan empezado a conocer en la sección de que se trate;

b) Los magistrados asignados a la Sección de Apelaciones desempeñarán el cargo en esa Sección durante todo su mandato.

4. Los magistrados asignados a la Sección de Apelaciones desempeñarán el cargo únicamente en esa Sección. Nada de lo dispuesto en el presente artículo obstará, sin embargo, a que se asignen temporalmente magistrados de la Sección de Primera Instancia a la Sección de Cuestiones Preliminares, o a la inversa, si la Presidencia considera que la gestión eficiente del trabajo de la Corte así lo requiere, pero en ningún caso podrá formar parte de la Sala de Primera Instancia que conozca de una causa un magistrado que haya participado en la etapa preliminar.

Artículo 40

Independencia de los magistrados

1. Los magistrados serán independientes en el desempeño de sus funciones.

2. Los magistrados no realizarán actividad alguna que pueda ser incompatible con el ejercicio de sus funciones judiciales o menoscabar la confianza en su independencia.

3. Los magistrados que tengan que desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva en la sede de la Corte no podrán desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional.

4. Las cuestiones relativas a la aplicación de los párrafos 2 y 3 serán dirimidas por mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado al que se refiera una de estas cuestiones no participará en la adopción de la decisión.

Artículo 41

Dispensa y recusación de los magistrados

1. La Presidencia podrá, a petición de un magistrado, dispensarlo del ejercicio de alguna de las funciones que le confiere el presente Estatuto, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

2. a) Un magistrado no participará en ninguna causa en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad.

Un magistrado será recusado de conformidad con lo dispuesto en el presente párrafo, entre otras razones, si hubiese intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de la que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento. Un magistrado será también recusado por los demás motivos que se establezcan en las Reglas de Procedimiento y Prueba;

b) El Fiscal o la persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá pedir la recusación de un magistrado con arreglo a lo dispuesto en el presente párrafo;

c) Las cuestiones relativas a la recusación de un magistrado serán dirimidas por mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado cuya recusación se pida tendrá derecho a hacer observaciones sobre la cuestión, pero no tomará parte en la decisión.

Artículo 42

La Fiscalía

1. La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la Corte. Estará encargada de recibir remisiones e información corroborada sobre crímenes de la competencia de la Corte para examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acción penal ante la Corte. Los miembros de la Fiscalía no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a la Corte.

2. La Fiscalía estará dirigida por el Fiscal. El Fiscal tendrá plena autoridad para dirigir y administrar la Fiscalía, con inclusión del personal, las instalaciones y otros recursos. El Fiscal contará con la ayuda de uno o más fiscales adjuntos, que podrán desempeñar cualquiera de las funciones que le correspondan de conformidad con el presente Estatuto. El Fiscal y los fiscales adjuntos tendrán que ser de diferentes nacionalidades y desempeñarán su cargo en régimen de dedicación exclusiva.

3. El Fiscal y los fiscales adjuntos serán personas que gocen de alta consideración moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan extensa experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la substanciación de causas penales. Deberán tener un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.

4. El Fiscal será elegido en votación secreta y por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes. Los fiscales adjuntos serán elegidos en la misma forma de una lista de candidatos presentada por el Fiscal. El Fiscal propondrá tres candidatos para cada puesto de fiscal adjunto que deba cubrirse. Salvo que en el momento de la elección se fije un período más breve, el Fiscal y los fiscales adjuntos desempeñarán su cargo por un período de nueve años y no podrán ser reelegidos.

5. El Fiscal y los fiscales adjuntos no realizarán actividad alguna que pueda interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la confianza en su independencia. No podrán desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional.

6. La Presidencia podrá, a petición del Fiscal o de un fiscal adjunto, dispensarlos de intervenir en una causa determinada.

7. El Fiscal y los fiscales adjuntos no participarán en ningún asunto en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Serán recusados de conformidad con lo dispuesto en el presente párrafo, entre otras razones, si hubiesen intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa substanciada a nivel nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento.

8. Las cuestiones relativas a la recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto serán dirimidas por la Sala de Apelaciones:

a) La persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá en cualquier momento pedir la recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto por los motivos establecidos en el presente artículo;

b) El Fiscal o el fiscal adjunto, según proceda, tendrán derecho a hacer observaciones sobre la cuestión.

9. El Fiscal nombrará asesores jurídicos especialistas en determinados temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños.

Artículo 43

La Secretaría

1. La Secretaría, sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, estará encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte y de prestarle servicios.

2. La Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la Corte.

3. El Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que gocen de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.

4. Los magistrados elegirán al Secretario en votación secreta por mayoría absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los

Estados Partes. De ser necesario elegirán, por recomendación del Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.

5. El Secretario será elegido por un período de cinco años en régimen de dedicación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario Adjunto será elegido por un período de cinco años, o por uno más breve, si así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta, en el entendimiento de que prestará sus servicios según sea necesario.

6. El Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaría. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la Corte, y a otras personas que estén en peligro en razón del testimonio prestado. La Dependencia contará con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.

Artículo 44

El personal

1. El Fiscal y el Secretario nombrarán los funcionarios calificados que sean necesarios en sus respectivas oficinas. En el caso del Fiscal, ello incluirá el nombramiento de investigadores.

2. En el nombramiento de los funcionarios, el Fiscal y el Secretario velarán por el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad y tendrán en cuenta, mutatis mutandis, los criterios establecidos en el párrafo 8 del artículo 36.

3. El Secretario, con la anuencia de la Presidencia y del Fiscal, propondrá un reglamento del personal que establecerá las condiciones en que el personal de la Corte será designado, remunerado o separado del servicio. El Reglamento del Personal estará sujeto a la aprobación de la Asamblea de los Estados Partes.

4. La Corte podrá, en circunstancias excepcionales, recurrir a la pericia de personal proporcionado gratuitamente por Estados Partes, organizaciones intergubernamentales u organizaciones no gubernamentales para que colabore en la labor de cualquiera de los órganos de la Corte. El Fiscal podrá aceptar ofertas de esa índole en nombre de la Fiscalía. El personal proporcionado gratuitamente será empleado de conformidad con directrices que ha de establecer la Asamblea de los Estados Partes.

Artículo 45

Promesa solemne

Antes de asumir las obligaciones del cargo de conformidad con el presente Estatuto, los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y el

secretario adjunto declararán solemnemente y en sesión pública que ejercerán sus atribuciones con toda imparcialidad y conciencia.

Artículo 46

Separación del cargo

1. Un magistrado, el fiscal, un fiscal adjunto, el secretario o el secretario adjunto será separado del cargo si se adopta una decisión a tal efecto de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 cuando se determine que:

a) Ha incurrido en falta grave o en incumplimiento grave de las funciones que le confiere el presente Estatuto y según lo establecido en las Reglas de procedimiento y prueba; o

b) Está imposibilitado de desempeñar las funciones descritas en el presente Estatuto.

2. La decisión de separar del cargo a un magistrado, el fiscal o un fiscal adjunto de conformidad con el párrafo 1 será adoptada por la Asamblea de los Estados Partes en votación secreta:

a) En el caso de un magistrado, por mayoría de dos tercios de los Estado Partes y previa recomendación aprobada por mayoría de dos tercios de los demás magistrados;

b) En el caso del fiscal, por mayoría absoluta de los Estados Partes;

c) En el caso de un fiscal adjunto, por mayoría absoluta de los Estados Partes y previa recomendación del fiscal.

3. La decisión de separar del cargo al secretario o a un secretario adjunto será adoptada por mayoría absoluta de los magistrados.

4. El magistrado, fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario adjunto cuya conducta o cuya idoneidad para el ejercicio de las funciones del cargo de conformidad con el presente Estatuto haya sido impugnada en virtud del presente artículo podrá presentar y obtener pruebas y presentar escritos de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba; sin embargo, no podrá participar por ningún otro concepto en el examen de la cuestión.

Artículo 47

Medidas disciplinarias

El magistrado, fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario adjunto que haya incurrido en una falta menos grave que la establecida en el párrafo 1 del artículo 46 será objeto de medidas disciplinarias de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Artículo 48

Privilegios e inmunidades

1. La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

2. Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y el Secretario gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en relación con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas y, una vez expirado su mandato, seguirán gozando de absoluta inmunidad judicial por las declaraciones que hagan oralmente o por escrito y los actos que realicen en el desempeño de sus funciones oficiales.

3. El Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de la Secretaría gozarán de los privilegios e inmunidades y de las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.

4. Los abogados, peritos, testigos u otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte serán objeto del tratamiento que sea necesario para el funcionamiento adecuado de la Corte, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.

5. Se podrá renunciar a los privilegios e inmunidades:

a) En el caso de un magistrado o el Fiscal, por decisión de la mayoría absoluta de los magistrados;

b) En el caso del Secretario, por la Presidencia;

c) En el caso de los Fiscales Adjuntos y el personal de la Fiscalía, por el Fiscal;

d) En el caso del Secretario Adjunto y el personal de la Secretaría, por el Secretario.

Artículo 49

Sueldos, estipendios y dietas

Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y el secretario adjunto percibirán los sueldos, estipendios y dietas que decida la Asamblea de los Estados Partes. Esos sueldos y estipendios no serán reducidos en el curso de su mandato.

Artículo 50

Idiomas oficiales y de trabajo

1. Los idiomas oficiales de la Corte serán el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Las sentencias de la Corte, así como las otras

decisiones que resuelvan cuestiones fundamentales de que conozca la Corte, serán publicadas en los idiomas oficiales.

La Presidencia, de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba, determinará cuáles son las decisiones que resuelven cuestiones fundamentales a los efectos del presente párrafo.

2. Los idiomas de trabajo de la Corte serán el francés y el inglés. En las Reglas de Procedimiento y Prueba se determinará en qué casos podrá utilizarse como idioma de trabajo otros idiomas oficiales.

3. La Corte autorizará a cualquiera de las partes o cualquiera de los Estados a que se haya permitido intervenir en un procedimiento, previa solicitud de ellos, a utilizar un idioma distinto del francés o el inglés, siempre que considere que esta autorización está adecuadamente justificada.

Artículo 51

Reglas de Procedimiento y Prueba

1. Las Reglas de Procedimiento y Prueba entrarán en vigor tras su aprobación por mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.

2. Podrán proponer enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba:

- a) Cualquier Estado Parte;
- b) Los magistrados, por mayoría absoluta; o
- c) El Fiscal.

Las enmiendas entrarán en vigor tras su aprobación en la Asamblea de los Estados Partes por mayoría de dos tercios.

3. Una vez aprobadas las Reglas de Procedimiento y Prueba, en casos urgentes y cuando éstas no resuelvan una situación concreta suscitada en la Corte, los magistrados podrán, por una mayoría de dos tercios, establecer reglas provisionales que se aplicarán hasta que la Asamblea de los Estados Partes las apruebe, enmiende o rechace en su siguiente período ordinario o extraordinario de sesiones.

4. Las Reglas de Procedimiento y Prueba, las enmiendas a ellas y las reglas provisionales deberán estar en consonancia con el presente Estatuto. Las enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba, así como las reglas provisionales, no se aplicarán retroactivamente en detrimento de la persona que sea objeto de la investigación o el enjuiciamiento o que haya sido condenada.

5. En caso de conflicto entre las disposiciones del Estatuto y las de las Reglas de Procedimiento y Prueba, prevalecerá el Estatuto.

Artículo 52

Reglamento de la Corte

1. Los magistrados, de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba, aprobarán por mayoría absoluta el Reglamento de la Corte que sea necesario para su funcionamiento ordinario.

2. Se consultará al Fiscal y al Secretario en la preparación del Reglamento y de cualquier enmienda a él.

3. El Reglamento y sus enmiendas entrarán en vigor al momento de su aprobación, a menos que los magistrados decidan otra cosa. Inmediatamente después de su aprobación, serán distribuidos a los Estados Partes para recabar sus observaciones. Se mantendrán en vigor si en un plazo de seis meses no se han recibido objeciones de una mayoría de los Estados Partes.

PARTE V. DE LA INVESTIGACIÓN Y EL ENJUICIAMIENTO

Artículo 53

Inicio de una investigación

1. El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto. Al decidir si ha de iniciar una investigación, el Fiscal tendrá en cuenta si:

a) La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte;

b) La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17;

c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.

El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basare únicamente en el apartado c), lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.

2. Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento, ya que:

a) No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58;

- b) La causa es inadmisibile de conformidad con el artículo 17; o
- c) El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen; notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el párrafo b) del artículo 13.

3. a) A petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 o del Consejo de Seguridad de conformidad con el párrafo b) del artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con el párrafo 1 o el párrafo 2 y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión;

b) Además, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basare únicamente en el párrafo 1 c) o el párrafo 2 c). En ese caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.

4. El Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.

Artículo 54

Funciones y atribuciones del Fiscal con respecto a las investigaciones

1. El Fiscal:

a) A fin de establecer la veracidad de los hechos, podrá ampliar la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto y, a esos efectos, investigará tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes;

b) Adoptará medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de la Corte. A esos efectos, respetará los intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos, entre otros la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, y la salud, y tendrá en cuenta la naturaleza de los crímenes, en particular los de violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños; y

c) Respetará plenamente los derechos que confiere a las personas el presente Estatuto.

2. El Fiscal podrá realizar investigaciones en el territorio de un Estado:

- a) De conformidad con las disposiciones de la Parte IX; o
- b) Según lo autorice la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el párrafo 3 d) del artículo 57.

3. El Fiscal podrá:

- a) Reunir y examinar pruebas;
- b) Hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de investigación, las víctimas y los testigos;
- c) Solicitar la cooperación de un Estado u organización o acuerdo intergubernamental de conformidad con su respectiva competencia o mandato;
- d) Concertar las disposiciones o los acuerdos compatibles con el presente Estatuto que sean necesarios para facilitar la cooperación de un Estado, una organización intergubernamental o una persona;
- e) Convenir en que no divulgará en ninguna etapa del procedimiento los documentos o la información que obtenga a condición de preservar su carácter confidencial y únicamente a los efectos de obtener nuevas pruebas, salvo con el acuerdo de quien haya facilitado la información; y
- f) Adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para asegurar el carácter confidencial de la información, la protección de una persona o la preservación de las pruebas.

Artículo 55

Derechos de las personas durante la investigación

1. En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto:

- a) Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable;
 - b) Nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes;
 - c) Quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad; y
 - d) Nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el presente Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.
2. Cuando haya

motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte y esa persona haya de ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, en cumplimiento de una solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto en la Parte IX, tendrá además los derechos siguientes, de los que será informada antes del interrogatorio:

- a) A ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte;
- b) A guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia;
- c) A ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre que fuere necesario en interés de la justicia y, en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes; y
- d) A ser interrogada en presencia de su abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada.

Artículo 56

Disposiciones que podrá adoptar la Sala de Cuestiones Preliminares cuando se presente una oportunidad única de proceder a una investigación

1. a) El Fiscal, cuando considere que se presenta una oportunidad única de proceder a una investigación, que tal vez no se repita a los fines de un juicio, de recibir el testimonio o la declaración de un testigo o de examinar, reunir o verificar pruebas, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares;

b) La Sala, a petición del Fiscal, podrá adoptar las medidas que sean necesarias para velar por la eficiencia e integridad de las actuaciones y, en particular, para proteger los derechos de la defensa;

c) A menos que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene otra cosa, el Fiscal proporcionará la información correspondiente a la persona que ha sido detenida o que ha comparecido en virtud de una citación en relación con la investigación a que se refiere el apartado a), a fin de que pueda ser oída.

2. Las medidas a que se hace referencia en el apartado b) del párrafo 1 podrán consistir en:

- a) Formular recomendaciones o dictar ordenanzas respecto del procedimiento que habrá de seguirse;
- b) Ordenar que quede constancia de las actuaciones;
- c) Nombrar a un experto para que preste asistencia;

d) Autorizar al abogado defensor del detenido o de quien haya comparecido ante la Corte en virtud de una citación a que participe o, en caso de que aún no se hayan producido esa detención o comparecencia o no se haya designado abogado, a nombrar otro para que comparezca y represente los intereses de la defensa;

e) Encomendar a uno de sus miembros o, de ser necesario, a otro magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares o la Sección de Primera Instancia que formule recomendaciones o dicte ordenanzas respecto de la reunión y preservación de las pruebas o del interrogatorio de personas;

f) Adoptar todas las medidas que sean necesarias para reunir o preservar las pruebas.

3. a) La Sala de Cuestiones Preliminares, cuando considere que el Fiscal no ha solicitado medidas previstas en el presente artículo que, a su juicio, sean esenciales para la defensa en juicio, le consultará si se justificaba no haberlas solicitado. La Sala podrá adoptar de oficio esas medidas si, tras la consulta, llegare a la conclusión de que no había justificación para no solicitarlas.

b) El Fiscal podrá apelar de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio con arreglo al presente párrafo. La apelación se substanciará en un procedimiento sumario.

4. La admisibilidad o la forma en que quedará constancia de las pruebas reunidas o preservadas para el juicio de conformidad con el presente artículo se regirá en el juicio por lo dispuesto en el artículo 69 y la Sala de Primera Instancia decidirá cómo ha de ponderar esas pruebas.

Artículo 57

Funciones y atribuciones de la Sala de Cuestiones Preliminares

1. A menos que el presente Estatuto disponga otra cosa, la Sala de Cuestiones Preliminares ejercerá sus funciones de conformidad con las disposiciones del presente artículo.

2. a) Las providencias u órdenes que la Sala de Cuestiones Preliminares dicte en virtud de los artículos 15, 18 ó 19, el párrafo 2 del artículo 54, el párrafo 7 del artículo 61 o el artículo 72 deberán ser aprobadas por la mayoría de los magistrados que la componen;

b) En todos los demás casos, un magistrado de la Sala de Cuestiones Preliminares podrá ejercer las funciones establecidas en el presente Estatuto, a menos que las Reglas de Procedimiento y Prueba dispongan otra cosa o así lo acuerde, por mayoría, la Sala de Cuestiones Preliminares.

3. Además de otras funciones que le confiere el presente Estatuto, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá:

- a) A petición del Fiscal, dictar las providencias y órdenes que sean necesarias a los fines de una investigación;
- b) A petición de quien haya sido detenido o haya comparecido en virtud de una orden de comparecencia expedida con arreglo al artículo 58, dictar esas órdenes, incluidas medidas tales como las indicadas en el artículo 56 o solicitar con arreglo a la Parte IX la cooperación que sea necesaria para ayudarle a preparar su defensa;
- c) Cuando sea necesario, asegurar la protección y el respeto de la intimidad de víctimas y testigos, la preservación de pruebas, la protección de personas detenidas o que hayan comparecido en virtud de una orden de comparecencia, así como la protección de información que afecte a la seguridad nacional;
- d) Autorizar al Fiscal a adoptar determinadas medidas de investigación en el territorio de un Estado Parte sin haber obtenido la cooperación de éste con arreglo a la Parte IX en el caso de que la Sala haya determinado, de ser posible teniendo en cuenta las opiniones del Estado de que se trate, que dicho Estado manifiestamente no está en condiciones de cumplir una solicitud de cooperación debido a que no existe autoridad u órgano alguno de su sistema judicial competente para cumplir una solicitud de cooperación con arreglo a la Parte IX.
- e) Cuando se haya dictado una orden de detención o de comparecencia con arreglo al artículo 58, y habida cuenta del valor de las pruebas y de los derechos de las partes de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba, recabar la cooperación de los Estados con arreglo al párrafo 1 k) del artículo 93 para adoptar medidas cautelares a los efectos de un decomiso que, en particular, beneficie en última instancia a las víctimas.

Artículo 58

Orden de detención u orden de comparecencia dictada

por la Sala de Cuestiones Preliminares

1. En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que:

- a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; y
- b) La detención parece necesaria para:

- i) Asegurar que la persona comparezca en juicio;
- ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte; o
- iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias.

2. La solicitud del Fiscal consignará:

- a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificación;
- b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte que presuntamente haya cometido;
- c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos crímenes;
- d) Un resumen de las pruebas y cualquier otra información que constituya motivo razonable para creer que la persona cometió esos crímenes; y
- e) La razón por la cual el Fiscal crea necesaria la detención.

3. La orden de detención consignará:

- a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificación;
- b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte por el que se pide su detención; y
- c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos crímenes.

4. La orden de detención seguirá en vigor mientras la Corte no disponga lo contrario.

5. La Corte, sobre la base de la orden de detención, podrá solicitar la detención provisional o la detención y entrega de la persona de conformidad con la Parte IX del presente Estatuto.

6. El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que enmiende la orden de detención para modificar la referencia al crimen indicado en ésta o agregar otros. La Sala de Cuestiones Preliminares enmendará la orden si estuviere convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona cometió los crímenes en la forma que se indica en esa modificación o adición.

7. El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que, en lugar de una orden de detención, dicte una orden de comparecencia. La Sala, de estar convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona ha cometido el crimen que se le imputa y que bastará con una orden de comparecencia para asegurar que comparezca efectivamente, dictará, con o sin las condiciones limitativas de la libertad (distintas de la detención) que prevea el derecho interno, una orden para que la persona comparezca. La orden de comparecencia consignará:

- a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificación;
- b) La fecha de la comparecencia;
- c) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte que presuntamente haya cometido; y
- d) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos crímenes.

La notificación de la orden será personal.

Artículo 59

Procedimiento de detención en el Estado de detención

1. El Estado Parte que haya recibido una solicitud de detención provisional o de detención y entrega tomará inmediatamente las medidas necesarias para la detención de conformidad con su derecho interno y con lo dispuesto en la Parte IX del presente Estatuto.
2. El detenido será llevado sin demora ante la autoridad judicial competente del Estado de detención, que determinará si, de conformidad con el derecho de ese Estado:
 - a) La orden le es aplicable;
 - b) La detención se llevó a cabo conforme a derecho; y
 - c) Se han respetado los derechos del detenido.
3. El detenido tendrá derecho a solicitar de la autoridad competente del Estado de detención la libertad provisional antes de su entrega.
4. Al decidir la solicitud, la autoridad competente del Estado de detención examinará si, dada la gravedad de los presuntos crímenes, hay circunstancias urgentes y excepcionales que justifiquen la libertad provisional y si existen las salvaguardias necesarias para que el Estado de detención pueda cumplir su obligación de entregar la persona a la Corte. Esa autoridad no podrá examinar si la orden de detención fue dictada

conforme a derecho con arreglo a los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 58.

5. La solicitud de libertad provisional será notificada a la Sala de Cuestiones Preliminares, que hará recomendaciones a la autoridad competente del Estado de detención. Antes de adoptar su decisión, la autoridad competente del Estado de detención tendrá plenamente en cuenta esas recomendaciones, incluidas las relativas a medidas para impedir la evasión de la persona.

6. De concederse la libertad provisional, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá solicitar informes periódicos al respecto.

7. Una vez que el Estado de detención haya ordenado la entrega, el detenido será puesto a disposición de la Corte tan pronto como sea posible.

Artículo 60

Primeras diligencias en la Corte

1. Una vez que el imputado haya sido entregado a la Corte o haya comparecido voluntariamente o en cumplimiento de una orden de comparecencia, la Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que ha sido informado de los crímenes que le son imputados y de los derechos que le reconoce el presente Estatuto, incluido el de pedir la libertad provisional.

2. Quien sea objeto de una orden de detención podrá pedir la libertad provisional. Si la Sala de Cuestiones Preliminares está convencida de que se dan las condiciones enunciadas en el párrafo 1 del artículo 58, se mantendrá la detención. En caso contrario, la Sala de Cuestiones Preliminares pondrá en libertad al detenido, con o sin condiciones.

3. La Sala de Cuestiones Preliminares revisará periódicamente su decisión en cuanto a la puesta en libertad o la detención, y podrá hacerlo en cualquier momento en que lo solicite el Fiscal o el detenido. Sobre la base de la revisión, la Sala podrá modificar su decisión en cuanto a la detención, la puesta en libertad o las condiciones de ésta, si está convencida de que es necesario en razón de un cambio en las circunstancias.

4. La Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que la detención en espera de juicio no se prolongue excesivamente a causa de una demora inexcusable del Fiscal. Si se produjere dicha demora, la Corte considerará la posibilidad de poner en libertad al detenido, con o sin condiciones.

5. De ser necesario, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar una orden de detención para hacer comparecer a una persona que haya sido puesta en libertad.

Artículo 61

Confirmación de los cargos antes del juicio

1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 y dentro de un plazo razonable tras la entrega de la persona a la Corte o su comparecencia voluntaria ante ésta, la Sala de Cuestiones Preliminares celebrará una audiencia para confirmar los cargos sobre la base de los cuales el Fiscal tiene la intención de pedir el procesamiento. La audiencia se celebrará en presencia del Fiscal y del imputado, así como de su defensor.

2. La Sala de Cuestiones Preliminares, a solicitud del Fiscal o de oficio, podrá celebrar una audiencia en ausencia del acusado para confirmar los cargos en los cuales el Fiscal se basa para pedir el enjuiciamiento cuando el imputado:

a) Haya renunciado a su derecho a estar presente; o

b) Haya huido o no sea posible encontrarlo y se hayan tomado todas las medidas razonables para asegurar su comparecencia ante la Corte e informarle de los cargos y de que se celebrará una audiencia para confirmarlos. En este caso, el imputado estará representado por un defensor cuando la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello redunde en interés de la justicia.

3. Dentro de un plazo razonable antes de la audiencia:

a) Se proporcionará al imputado un ejemplar del documento en que se formulen los cargos por los cuales el Fiscal se proponga enjuiciarlo; y

b) Se le informará de las pruebas que el Fiscal se proponga presentar en la audiencia.

La Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar providencias respecto de la revelación de información a los efectos de la audiencia.

4. Antes de la audiencia, el Fiscal podrá proseguir la investigación y modificar o retirar los cargos. Se dará al imputado aviso con antelación razonable a la audiencia de cualquier modificación de los cargos o de su retiro. En caso de retirarse cargos, el Fiscal comunicará las razones a la Sala de Cuestiones Preliminares.

5. En la audiencia, el Fiscal presentará respecto de cada cargo pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió el crimen que se le imputa. El Fiscal podrá presentar pruebas documentales o un resumen de las pruebas y no será necesario que llame a los testigos que han de declarar en el juicio.

6. En la audiencia, el imputado podrá:

a) Impugnar los cargos;

b) Impugnar las pruebas presentadas por el Fiscal; y

c) Presentar pruebas.

7. La Sala de Cuestiones Preliminares determinará, sobre la base de la audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió cada crimen que se le imputa. Según cual sea esa determinación, la Sala de Cuestiones Preliminares:

a) Confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que existen pruebas suficientes y asignará al acusado a una Sala de Primera Instancia para su enjuiciamiento por los cargos confirmados;

b) No confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que las pruebas son insuficientes;

c) Levantará la audiencia y pedirá al Fiscal que considere la posibilidad de:

i) Presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas investigaciones en relación con un determinado cargo; o

ii) Modificar un cargo en razón de que las pruebas presentadas parecen indicar la comisión de un crimen distinto que sea de la competencia de la Corte.

8. La no confirmación de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares no obstará para que el Fiscal la pida nuevamente a condición de que presente pruebas adicionales.

9. Una vez confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio, el Fiscal, con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares y previa notificación al acusado, podrá modificar los cargos. El Fiscal, si se propusiera presentar nuevos cargos o sustituirlos por otros más graves, deberá pedir una audiencia de conformidad con el presente artículo para confirmarlos. Una vez comenzado el juicio, el Fiscal, con autorización de la Sala de Primera Instancia, podrá retirar los cargos.

10. Toda orden ya dictada dejará de tener efecto con respecto a los cargos que no hayan sido confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares o hayan sido retirados por el Fiscal.

11. Una vez confirmados los cargos de conformidad con el presente artículo, la Presidencia constituirá una Sala de Primera Instancia que, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 9 del presente artículo y en el párrafo 4 del artículo 64, se encargará de la siguiente fase del procedimiento y podrá ejercer las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares que sean pertinentes y apropiadas en ese procedimiento.

PARTE VI. DEL JUICIO

Artículo 62

Lugar del juicio

A menos que se decida otra cosa, el juicio se celebrará en la sede de la Corte.

Artículo 63

Presencia del acusado en el juicio

1. El acusado estará presente durante el juicio.
2. Si el acusado, estando presente en la Corte, perturbare continuamente el juicio, la Sala de Primera Instancia podrá disponer que salga de ella y observe el proceso y dé instrucciones a su defensor desde fuera, utilizando, en caso necesario, tecnologías de comunicación. Esas medidas se adoptarán únicamente en circunstancias excepcionales, después de que se haya demostrado que no hay otras posibilidades razonables y adecuadas, y únicamente durante el tiempo que sea estrictamente necesario.

Artículo 64

Funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia

1. Las funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia enunciadas en el presente artículo deberán ejercerse de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.
2. La Sala de Primera Instancia velará por que el juicio sea justo y expedito y se sustancia con pleno respeto de los derechos del acusado y teniendo debidamente en cuenta la protección de las víctimas y de los testigos.
3. La Sala de Primera Instancia a la que se asigne una causa de conformidad con el presente Estatuto:
 - a) Celebrará consultas con las partes y adoptará los procedimientos que sean necesarios para que el juicio se sustancia de manera justa y expedita;
 - b) Determinará el idioma o los idiomas que habrán de utilizarse en el juicio; y
 - c) Con sujeción a cualesquiera otras disposiciones pertinentes del presente Estatuto, dispondrá la divulgación de los documentos o de la información que no se hayan divulgado anteriormente, con suficiente antelación al comienzo del juicio como para permitir su preparación adecuada.
4. La Sala de Primera Instancia podrá, en caso de ser necesario para su funcionamiento eficaz e imparcial, remitir cuestiones preliminares a la Sala

de Cuestiones Preliminares o, de ser necesario, a otro magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares que esté disponible.

5. Al notificar a las partes, la Sala de Primera Instancia podrá, según proceda, indicar que se deberán acumular o separar los cargos cuando haya más de un acusado.

6. Al desempeñar sus funciones antes del juicio o en el curso de éste, la Sala de Primera Instancia podrá, de ser necesario:

a) Ejercer cualquiera de las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares indicadas en el párrafo 11 del artículo 61;

b) Ordenar la comparecencia y la declaración de testigos y la presentación de documentos y otras pruebas recabando, de ser necesario, la asistencia de los Estados con arreglo a lo dispuesto en el presente Estatuto;

c) Adoptar medidas para la protección de la información confidencial;

d) Ordenar la presentación de pruebas adicionales a las ya reunidas con antelación al juicio o a las presentadas durante el juicio por las partes;

e) Adoptar medidas para la protección del acusado, de los testigos y de las víctimas; y

f) Dirimir cualesquiera otras cuestiones pertinentes.

7. El juicio será público. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia podrá decidir que determinadas diligencias se efectúen a puerta cerrada, de conformidad con el artículo 68, debido a circunstancias especiales o para proteger la información de carácter confidencial o restringida que haya de presentarse en la práctica de la prueba.

8. a) Al comenzar el juicio, la Sala de Primera Instancia dará lectura ante el acusado de los cargos confirmados anteriormente por la Sala de Cuestiones Preliminares. La Sala de Primera Instancia se cerciorará de que el acusado comprende la naturaleza de los cargos. Dará al acusado la oportunidad de declararse culpable de conformidad con el artículo 65 o de declararse inocente;

b) Durante el juicio, el magistrado presidente podrá impartir directivas para la substanciación del juicio, en particular para que éste sea justo e imparcial. Con sujeción a las directivas que imparta el magistrado presidente, las partes podrán presentar pruebas de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto.

9. La Sala de Primera Instancia podrá, a petición de una de las partes o de oficio, entre otras cosas:

a) Decidir sobre la admisibilidad o pertinencia de las pruebas;

b) Tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden en las audiencias.

10. La Sala de Primera Instancia hará que el Secretario lleve y conserve un expediente completo del juicio, en el que se consignen fielmente las diligencias practicadas.

Artículo 65

Procedimiento en caso de declaración de culpabilidad

1. Si el acusado se declara culpable en las condiciones indicadas en el párrafo 8 a) del artículo 64, la Sala de Primera Instancia determinará:

a) Si el acusado comprende la naturaleza y las consecuencias de la declaración de culpabilidad;

b) Si esa declaración ha sido formulada voluntariamente tras suficiente consulta con el abogado defensor; y

c) Si la declaración de culpabilidad está corroborada por los hechos de la causa conforme a:

i) Los cargos presentados por el Fiscal y aceptados por el acusado;

ii) Las piezas complementarias de los cargos presentados por el Fiscal y aceptados por el acusado; y

iii) Otras pruebas, como declaraciones de testigos, presentadas por el

Fiscal o el acusado.

2. La Sala de Primera Instancia, de constatar que se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, considerará que la declaración de culpabilidad, junto con las pruebas adicionales presentadas, constituye un reconocimiento de todos los hechos esenciales que configuran el crimen del cual se ha declarado culpable el acusado y podrá condenarlo por ese crimen.

3. La Sala de Primera Instancia, de constatar que no se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, tendrá la declaración de culpabilidad por no formulada y, en ese caso, ordenará que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto y podrá remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia.

4. La Sala de Primera Instancia, cuando considere necesaria en interés de la justicia y en particular en interés de las víctimas, una presentación más completa de los hechos de la causa, podrá:

a) Pedir al Fiscal que presente pruebas adicionales, inclusive declaraciones de testigos; u

b) Ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto, en cuyo caso tendrá la declaración de culpabilidad por no formulada y podrá remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia.

5. Las consultas que celebren el Fiscal y la defensa respecto de la modificación de los cargos, la declaración de culpabilidad o la pena que habrá de imponerse no serán obligatorias para la Corte.

Presunción de inocencia

1. Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable.

2. Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad del acusado.

3. Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.

Artículo 67

Derechos del acusado

1. En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a ser oído públicamente, habida cuenta de las disposiciones del presente Estatuto, y a una audiencia justa e imparcial, así como a las siguientes garantías mínimas en pie de plena igualdad:

a) A ser informado sin demora y en forma detallada, en un idioma que comprenda y hable perfectamente, de la naturaleza, la causa y el contenido de los cargos que se le imputan;

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse libre y confidencialmente con un defensor de su elección;

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

d) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63, el acusado tendrá derecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciere de medios suficientes para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. El acusado tendrá

derecho también a oponer excepciones y a presentar cualquier otra prueba admisible de conformidad con el presente Estatuto;

f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete competente y a obtener las traducciones necesarias para satisfacer los requisitos de equidad, si en las actuaciones ante la Corte o en los documentos presentados a la Corte se emplea un idioma que no comprende y no habla;

g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable y a guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia;

h) A declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar juramento; y

i) A que no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta la carga de presentar contrapruebas.

2. Además de cualquier otra divulgación de información estipulada en el presente Estatuto, el Fiscal divulgará a la defensa, tan pronto como sea posible, las pruebas que obren en su poder o estén bajo su control y que, a su juicio, indiquen o tiendan a indicar la inocencia del acusado, o a atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar a la credibilidad de las pruebas de cargo. En caso de duda acerca de la aplicación de este párrafo, la Corte decidirá.

Artículo 68

Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las actuaciones

1. La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, y la salud, así como la índole del crimen, en particular cuando éste entrañe violencia sexual o por razones de género, o violencia contra niños.

En especial, el Fiscal adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos.

2. Como excepción al principio del carácter público de las audiencias establecido en el artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación de pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales. En particular, se aplicarán estas medidas en el caso de una víctima de agresión sexual o de un menor de edad que sea víctima o testigo, salvo decisión en contrario adoptada por

la Corte atendiendo a todas las circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o el testigo.

3. La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieran afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea incompatible con éstos. Los representantes legales de las víctimas podrán presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4. La Dependencia de Víctimas y Testigos podrá asesorar al Fiscal y a la Corte acerca de las medidas adecuadas de protección, los dispositivos de seguridad, el asesoramiento y la asistencia a que se hace referencia en el párrafo 6 del artículo 43.

5. Cuando la divulgación de pruebas o información de conformidad con el presente Estatuto entrañare un peligro grave para la seguridad de un testigo o de su familia, el Fiscal podrá, a los efectos de cualquier diligencia anterior al juicio, no presentar dichas pruebas o información y presentar en cambio un resumen de éstas. Las medidas de esta índole no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos.

6. Todo Estado podrá solicitar que se adopten las medidas necesarias respecto de la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la protección de información de carácter confidencial o restringido.

Artículo 69

Práctica de las pruebas

1. Antes de declarar, cada testigo se comprometerá, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, a decir verdad en su testimonio.

2. La prueba testimonial deberá rendirse en persona en el juicio, salvo cuando se apliquen las medidas establecidas en el artículo 68 o en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Asimismo, la Corte podrá permitir al testigo que preste testimonio oralmente o por medio de una grabación de vídeo o audio, así como que se presenten documentos o transcripciones escritas, con sujeción al presente Estatuto y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado ni serán incompatibles con éstos.

3. Las partes podrán presentar pruebas pertinentes a la causa, de conformidad con el artículo 64. La Corte estará facultada para pedir todas las pruebas que considere necesarias para determinar la veracidad de los hechos.

4. La Corte podrá decidir sobre la pertinencia o admisibilidad de cualquier prueba, teniendo en cuenta, entre otras cosas, su valor probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer para un juicio justo o para la justa evaluación del testimonio de un testigo, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

5. La Corte respetará los privilegios de confidencialidad establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

6. La Corte no exigirá prueba de los hechos de dominio público, pero podrá incorporarlos en autos.

7. No serán admisibles las pruebas obtenidas como resultado de una violación del presente Estatuto o de las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas cuando:

- a) Esa violación suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las pruebas; o
- b) Su admisión atente contra la integridad del juicio o redunde en grave desmedro de él.

8. La Corte, al decidir sobre la pertinencia o la admisibilidad de las pruebas presentadas por un Estado, no podrá pronunciarse sobre la aplicación del derecho interno de ese Estado.

Artículo 70

Delitos contra la administración de justicia

1. La Corte tendrá competencia para conocer de los siguientes delitos contra la administración de justicia, siempre y cuando se cometan intencionalmente:

- a) Dar falso testimonio cuando se esté obligado a decir verdad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 69;
- b) Presentar pruebas a sabiendas de que son falsas o han sido falsificadas;
- c) Corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio o interferir en ellos, tomar represalias contra un testigo por su declaración, destruir o alterar pruebas o interferir en las diligencias de prueba;
- d) Poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida;
- e) Tomar represalias contra un funcionario de la Corte en razón de funciones que haya desempeñado él u otro funcionario; y

f) Solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario de la Corte y en relación con sus funciones oficiales.

2. Las Reglas de Procedimiento y Prueba establecerán los principios y procedimientos que regulen el ejercicio por la Corte de su competencia sobre los delitos a que se hace referencia en el presente artículo. Las condiciones de la cooperación internacional con la Corte respecto de las actuaciones que realice de conformidad con el presente artículo se regirán por el derecho interno del Estado requerido.

3. En caso de decisión condenatoria, la Corte podrá imponer una pena de reclusión no superior a cinco años o una multa, o ambas penas, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4. a) Todo Estado Parte hará extensivas sus leyes penales que castiguen los delitos contra la integridad de su propio procedimiento de investigación o enjuiciamiento a los delitos contra la administración de justicia a que se hace referencia en el presente artículo y sean cometidos en su territorio o por uno de sus nacionales;

b) A solicitud de la Corte, el Estado Parte, siempre que lo considere apropiado, someterá el asunto a sus autoridades competentes a los efectos del enjuiciamiento. Esas autoridades conocerán de tales asuntos con diligencia y asignarán medios suficientes para que las causas se sustancien en forma eficaz.

Artículo 71

Sanciones por faltas de conducta en la Corte

1. En caso de faltas de conducta de personas presentes en la Corte, tales como perturbar las audiencias o negarse deliberadamente a cumplir sus órdenes, la Corte podrá imponer sanciones administrativas, que no entrañen privación de la libertad, como expulsión temporal o permanente de la sala, multa u otras medidas similares establecidas en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

2. El procedimiento para imponer las medidas a que se refiere el párrafo 1 se regirá por las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Artículo 72

Protección de información que afecte a la seguridad nacional

1. El presente artículo será aplicable en todos los casos en que la divulgación de información o documentos de un Estado pueda, a juicio de éste, afectar a los intereses de su seguridad nacional. Esos casos son los comprendidos en el ámbito de los párrafos 2 y 3 del artículo 56, el párrafo 3 del artículo 61, el párrafo 3 del artículo 64, el párrafo 2 del artículo 67, el párrafo 6 del artículo 68, el párrafo 6 del artículo 87 y el artículo 93, así como los que se presenten en cualquier otra fase del procedimiento en el contexto de esa divulgación.

2. El presente artículo se aplicará también cuando una persona a quien se haya solicitado información o pruebas se niegue a presentarlas o haya pedido un pronunciamiento del Estado porque su divulgación afectaría a los intereses de la seguridad nacional del Estado, y el Estado de que se trate confirme que, a su juicio, esa divulgación afectaría a los intereses de su seguridad nacional.

3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a los privilegios de confidencialidad a que se refieren los apartados e) y f) del párrafo 3 del artículo 54 ni la aplicación del artículo 73.

4. Si un Estado tiene conocimiento de que información o documentos suyos están siendo divulgados o pueden serlo en cualquier fase del procedimiento y estima que esa divulgación afectaría a sus intereses de seguridad nacional, tendrá derecho a pedir que la cuestión se resuelva de conformidad con el presente artículo.

5. El Estado a cuyo juicio la divulgación de información afectara a sus intereses de seguridad nacional adoptará, actuando en conjunto con el Fiscal, la defensa, la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia según sea el caso, todas las medidas razonables para resolver la cuestión por medio de la cooperación. Esas medidas podrán ser, entre otras, las siguientes:

a) La modificación o aclaración de la solicitud;

b) Una decisión de la Corte respecto de la pertinencia de la información o de las pruebas solicitadas, o una decisión sobre si las pruebas, aunque pertinentes, pudieran obtenerse o se hubieran obtenido de una fuente distinta del Estado;

c) La obtención de la información o las pruebas de una fuente distinta o en una forma diferente; o

d) Un acuerdo sobre las condiciones en que se preste la asistencia, que incluya, entre otras cosas, la presentación de resúmenes o exposiciones, restricciones a la divulgación, la utilización de procedimientos a puerta cerrada o ex parte, u otras medidas de protección permitidas con arreglo al Estatuto o las Reglas de Procedimiento y Prueba.

6. Una vez que se hayan adoptado todas las medidas razonables para resolver la cuestión por medio de la cooperación, el Estado, si considera que la información o los documentos no pueden proporcionarse ni divulgarse por medio alguno ni bajo ninguna condición sin perjuicio de sus intereses de seguridad nacional, notificará al Fiscal o a la Corte las razones concretas de su decisión, a menos que la indicación concreta de esas razones perjudique necesariamente los intereses de seguridad nacional del Estado.

7. Posteriormente, si la Corte decide que la prueba es pertinente y necesaria para determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado, podrá adoptar las disposiciones siguientes:

a) Cuando se solicite la divulgación de la información o del documento de conformidad con una solicitud de cooperación con arreglo a la Parte IX del presente Estatuto o en las circunstancias a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo, y el Estado hiciere valer para denegarla el motivo indicado en el párrafo 4 del artículo 93:

i) La Corte podrá, antes de adoptar una de las conclusiones a que se refiere el inciso ii) del apartado a) del párrafo 7, solicitar nuevas consultas con el fin de oír las razones del Estado. La Corte, si el Estado lo solicita, celebrará las consultas a puerta cerrada y ex parte;

ii) Si la Corte llega a la conclusión de que, al hacer valer el motivo de denegación indicado en el párrafo 4 del artículo 93, dadas las circunstancias del caso, el Estado requerido no está actuando de conformidad con las obligaciones que le impone el presente Estatuto, podrá remitir la cuestión de conformidad con el párrafo 7 del artículo 87, especificando las razones de su conclusión; y

iii) La Corte, en el juicio del acusado, podrá extraer las inferencias respecto de la existencia o inexistencia de un hecho que sean apropiadas en razón de las circunstancias; o

b) En todas las demás circunstancias:

i) Ordenar la divulgación; o

ii) Si no ordena la divulgación, extraer las inferencias relativas a la culpabilidad o a la inocencia del acusado que sean apropiadas en razón de las circunstancias.

Artículo 73

Información o documentos de terceros

La Corte, si pide a un Estado Parte que le proporcione información o un documento que esté bajo su custodia, posesión o control y que le haya sido divulgado por un Estado, una organización intergubernamental o una organización internacional a título confidencial, recabará el consentimiento de su autor para divulgar la información o el documento. Si el autor es un Estado Parte, podrá consentir en divulgar dicha información o documento o comprometerse a resolver la cuestión con la Corte, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 72. Si el autor no es un Estado Parte y no consiente en divulgar la información o el documento, el Estado requerido comunicará a la Corte que no puede proporcionar la información o el documento de que se trate en razón de la obligación contraída con su autor de preservar su carácter confidencial.

Artículo 74

Requisitos para el fallo

1. Todos los magistrados de la Sala de Primera Instancia estarán presentes en cada fase del juicio y en todas sus deliberaciones. La Presidencia podrá designar para cada causa y según estén disponibles uno o varios magistrados suplentes para que asistan a todas las fases del juicio y sustituyan a cualquier miembro de la Sala de Primera Instancia que se vea imposibilitado para seguir participando en el juicio.
2. La Sala de Primera Instancia fundamentará su fallo en su evaluación de las pruebas y de la totalidad del juicio. El fallo se referirá únicamente a los hechos y las circunstancias descritos en los cargos o las modificaciones a los cargos, en su caso. La Corte podrá fundamentar su fallo únicamente en las pruebas presentadas y examinadas ante ella en el juicio.
3. Los magistrados procurarán adoptar su fallo por unanimidad, pero, de no ser posible, éste será adoptado por mayoría.
4. Las deliberaciones de la Sala de Primera Instancia serán secretas.
5. El fallo constará por escrito e incluirá una exposición fundada y completa de la evaluación de las pruebas y las conclusiones. La Sala de Primera Instancia dictará un fallo. Cuando no haya unanimidad, el fallo de la Sala de Primera Instancia incluirá las opiniones de la mayoría y de la minoría. La lectura del fallo o de un resumen de éste se hará en sesión pública.

Artículo 75

Reparación a las víctimas

1. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda.
2. La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Cuando proceda, la Corte podrá ordenar que la indemnización otorgada a título de reparación se pague por conducto del Fondo Fiduciario previsto en el artículo 79.

3. La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo, tendrá en cuenta las observaciones formuladas por el condenado, las víctimas, otras personas o Estados que tengan un interés, o las que se formulen en su nombre.

4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo, la Corte, una vez que una persona sea declarada culpable de un crimen de su competencia, podrá determinar si, a fin de dar efecto a una decisión que dicte de conformidad con este artículo, es necesario solicitar medidas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 93.

5. Los Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a este artículo como si las disposiciones del artículo 109 se aplicaran al presente artículo.

6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional.

Artículo 76

Fallo condenatorio

1. En caso de que se dicte un fallo condenatorio, la Sala de Primera Instancia fijará la pena que proceda imponer, para lo cual tendrá en cuenta las pruebas practicadas y las conclusiones relativas a la pena que se hayan hecho en el proceso.

2. Salvo en el caso en que sea aplicable el artículo 65, la Sala de Primera Instancia podrá convocar de oficio una nueva audiencia, y tendrá que hacerlo si lo solicitan el Fiscal o el acusado antes de que concluya la instancia, a fin de practicar diligencias de prueba o escuchar conclusiones adicionales relativas a la pena, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

3. En el caso en que sea aplicable el párrafo 2, en la audiencia a que se hace referencia en ese párrafo o, de ser necesario, en una audiencia adicional se escucharán las observaciones que se hagan en virtud del artículo 75.

4. La pena será impuesta en audiencia pública y, de ser posible, en presencia del acusado.

PARTE VII. DE LAS PENAS

Artículo 77

Penas aplicables

1. La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace

referencia en el artículo 5 del presente Estatuto una de las penas siguientes:

- a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años; o
- b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado.

2. Además de la reclusión, la Corte podrá imponer:

- a) Una multa con arreglo a los criterios enunciados en las Reglas de Procedimiento y Prueba;
- b) El decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Artículo 78

Imposición de la pena

- 1. Al imponer una pena, la Corte tendrá en cuenta, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, factores tales como la gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado.
- 2. La Corte, al imponer una pena de reclusión, abonará el tiempo que, por orden suya, haya estado detenido el condenado. La Corte podrá abonar cualquier otro período de detención cumplido en relación con la conducta constitutiva del delito.
- 3. Cuando una persona haya sido declarada culpable de más de un crimen, la Corte impondrá una pena para cada uno de ellos y una pena común en la que se especifique la duración total de la reclusión. La pena no será inferior a la más alta de cada una de las penas impuestas y no excederá de 30 años de reclusión o de una pena de reclusión a perpetuidad de conformidad con el párrafo 1 b) del artículo 77.

Artículo 79

Fondo fiduciario

- 1. Por decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de la competencia de la Corte y de sus familias.
- 2. La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que reciba a título de multa o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario.
- 3. El Fondo Fiduciario será administrado según los criterios que fije la Asamblea de los Estados Partes.

Artículo 80

El Estatuto, la aplicación de penas por los países y la legislación nacional Nada de lo dispuesto en la presente parte se entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas prescritas por su legislación nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las penas prescritas en la presente parte.

PARTE VIII. DE LA APELACIÓN Y LA REVISIÓN

Artículo 81

Apelación del fallo condenatorio o absolutorio o de la pena

1. Los fallos dictados de conformidad con el artículo 74 serán apelables de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, según se dispone a continuación:

a) El Fiscal podrá apelar por alguno de los motivos siguientes:

i) Vicio de procedimiento;

ii) Error de hecho; o

iii) Error de derecho;

b) El condenado, o el Fiscal en su nombre, podrá apelar por alguno de los motivos siguientes:

i) Vicio de procedimiento;

ii) Error de hecho;

iii) Error de derecho;

iv) Cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a la regularidad del proceso o del fallo.

2. a) El Fiscal o el condenado podrán apelar de una sentencia, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, en razón de una desproporción entre el crimen y la condena;

b) La Corte, si al conocer de la apelación de una sentencia, considerase que hay fundamentos para revocar la condena en todo o parte, podrá invitar al Fiscal y al condenado a que presenten sus argumentos de conformidad con los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 81 y podrá dictar una decisión respecto de la condena de conformidad con el artículo 83;

c) Este procedimiento también será aplicable cuando la Corte, al conocer de una apelación contra la sentencia únicamente, considere que hay fundamentos para reducir la pena en virtud del párrafo 2 a).

3. a) Salvo que la Sala de Primera Instancia ordene otra cosa, el condenado permanecerá privado de libertad mientras se falla la apelación;

b) Cuando la duración de la detención fuese mayor que la de la pena de prisión impuesta, el condenado será puesto en libertad; sin embargo, si el Fiscal también apelase, esa libertad podrá quedar sujeta a las condiciones enunciadas en el apartado siguiente;

c) Si la sentencia fuere absolutoria, el acusado será puesto en libertad de inmediato, con sujeción a las normas siguientes:

i) En circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta entre otras cosas, el riesgo concreto de fuga, la gravedad del delito y las probabilidades de que se dé lugar a la apelación, la Sala de Primera Instancia, a solicitud del Fiscal, podrá decretar que siga privado de la libertad mientras dure la apelación;

ii) Las decisiones dictadas por la Sala de Primera Instancia en virtud del inciso precedente serán apelables de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4. Con sujeción a lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 3, la ejecución de la decisión o sentencia será suspendida durante el plazo fijado para la apelación y mientras dure el procedimiento de apelación.

Artículo 82

Apelación de otras decisiones

1. Cualquiera de las partes podrá apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, de las siguientes decisiones:

a) Una decisión relativa a la competencia o la admisibilidad;

b) Una decisión por la que se autorice o deniegue la libertad de la persona objeto de investigación o enjuiciamiento;

c) Una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio de conformidad con el párrafo 3 del artículo 56;

d) Una decisión relativa a una cuestión que afecte de forma significativa a la justicia y a la prontitud con que se sustancia el proceso o a su resultado y respecto de la cual, en opinión de la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia, un dictamen inmediato de la Sala de Apelaciones pueda acelerar materialmente el proceso.

2. El Estado de que se trate o el Fiscal, con la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, podrá apelar de una decisión adoptada por esta Sala de conformidad con el párrafo 3 d) del artículo 57. La apelación será substancada en procedimiento sumario.

3. La apelación no suspenderá por sí misma el procedimiento a menos que la Sala de Apelaciones así lo resuelva, previa solicitud y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4. El representante legal de las víctimas, el condenado o el propietario de buena fe de bienes afectados por una providencia dictada en virtud del artículo 75 podrán apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, de la decisión por la cual se conceda reparación.

Artículo 83

Procedimiento de apelación

1. A los efectos del procedimiento establecido en el artículo 81 y en el presente artículo, la Sala de Apelaciones tendrá todas las atribuciones de la Sala de Primera Instancia.

2. La Sala de Apelaciones, si decide que las actuaciones apeladas fueron injustas y que ello afecta a la regularidad del fallo o la pena o que el fallo o la pena apelados adolecen efectivamente de errores de hecho o de derecho o de vicios de procedimiento, podrá:

a) Revocar o enmendar el fallo o la pena; o

b) Decretar la celebración de un nuevo juicio en otra Sala de Primera Instancia. A estos efectos, la Sala de Apelaciones podrá devolver una cuestión de hecho a la Sala de Primera Instancia original para que la examine y le informe según corresponda, o podrá ella misma pedir pruebas para dirimirla. El fallo o la pena apelados únicamente por el condenado, o por el Fiscal en nombre de éste, no podrán ser modificados en perjuicio suyo.

3. La Sala de Apelaciones, si al conocer de una apelación contra la pena, considera que hay una desproporción entre el crimen y la pena, podrá modificar ésta de conformidad con lo dispuesto en la Parte VII.

4. La sentencia de la Sala de Apelaciones será aprobada por mayoría de los magistrados que la componen y anunciada en audiencia pública. La sentencia enunciará las razones en que se funda. De no haber unanimidad, consignará las opiniones de la mayoría y de la minoría, si bien un magistrado podrá emitir una opinión separada o disidente sobre una cuestión de derecho.

5. La Sala de Apelaciones podrá dictar sentencia en ausencia de la persona absuelta o condenada.

Artículo 84

Revisión del fallo condenatorio o de la pena

1. El condenado o, después de su fallecimiento, el cónyuge, los hijos, los padres o quien estuviera vivo al momento de la muerte del acusado y tuviera instrucciones escritas del acusado de hacerlo, o el Fiscal en su nombre, podrá pedir a la Sala de Apelaciones que revise la sentencia definitiva condenatoria o la pena por las siguientes causas:

a) Se hubieren descubierto nuevas pruebas que:

i) No se hallaban disponibles a la época del juicio por motivos que no cabría imputar total o parcialmente a la parte que formula la solicitud; y

ii) Son suficientemente importantes como para que, de haberse valorado en el juicio, probablemente hubieran dado lugar a otro veredicto;

b) Se acabare de descubrir que un elemento de prueba decisivo, apreciado en el juicio y del cual depende la condena, era falso o habría sido objeto de adulteración o falsificación;

c) Uno o varios de los jueces que intervinieron en la sentencia condenatoria o en la confirmación de los cargos han incurrido, en esa causa, en una falta o un incumplimiento de sus funciones de gravedad suficiente para justificar su separación del cargo de conformidad con el artículo 46.

2. La Sala de Apelaciones rechazará la solicitud si la considera infundada. Si determina que la solicitud es atendible, podrá, según corresponda:

a) Convocar nuevamente a la Sala de Primera Instancia original;

b) Constituir una nueva Sala de Primera Instancia; o

c) Mantener su competencia respecto del asunto, para, tras oír a las partes en la manera establecida en las Reglas de Procedimiento y Prueba, determinar si ha de revisarse la sentencia.

Artículo 85

Indemnización del detenido o condenado

1. El que haya sido ilegalmente detenido o recluido tendrá el derecho efectivo a ser indemnizado.

2. El que por decisión final hubiera sido condenado por un crimen y hubiere cumplido la pena correspondiente será indemnizado conforme a la ley de ser anulada posteriormente su condena en razón de hechos nuevos que demuestren concluyentemente que hubo un error judicial, salvo que la falta de conocimiento oportuno de esos hechos le fuera total o parcialmente imputable.

3. En circunstancias excepcionales, la Corte, si determina la existencia de hechos concluyentes que muestran que hubo un error judicial grave y manifiesto tendrá la facultad discrecional de otorgar una indemnización, de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba, a quien hubiere sido puesto en libertad en virtud de una sentencia definitiva absolutoria o de un sobreseimiento de la causa por esa razón.

PARTE IX. DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA ASISTENCIA JUDICIAL

Artículo 86

Obligación general de cooperar

Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.

Artículo 87

Solicitudes de cooperación: disposiciones generales

1. a) La Corte estará facultada para formular solicitudes de cooperación a los Estados Partes. Éstas se transmitirán por vía diplomática o por cualquier otro conducto adecuado que haya designado cada Estado Parte a la fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Cada Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa designación de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

b) Cuando proceda, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), las solicitudes podrán transmitirse también por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal o de cualquier organización regional competente.

2. Las solicitudes de cooperación y los documentos que las justifiquen estarán redactados en un idioma oficial del Estado requerido, o acompañados de una traducción a ese idioma, o a uno de los idiomas de trabajo de la Corte, según la elección que haya hecho el Estado a la fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

El Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa elección de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

3. El Estado requerido preservará el carácter confidencial de toda solicitud de cooperación y de los documentos que las justifiquen, salvo en la medida en que su divulgación sea necesaria para tramitarla.

4. Con respecto a las solicitudes de asistencia presentadas de conformidad con la presente Parte, la Corte podrá adoptar todas las medidas, incluidas las relativas a la protección de la información, que sean necesarias para proteger la seguridad y el bienestar físico o psicológico de las víctimas, los posibles testigos y sus familiares. La Corte podrá solicitar que toda información comunicada en virtud de la presente Parte sea transmitida y procesada de manera que se proteja la seguridad y el bienestar físico o psicológico de las víctimas, los posibles testigos y sus familiares.

5. a. La Corte podrá invitar a cualquier Estado que no sea parte en el presente Estatuto a prestar la asistencia prevista en la presente parte sobre la base de un arreglo especial, un acuerdo con ese Estado o de cualquier otra manera adecuada.

b. Cuando un Estado que no sea parte en el presente Estatuto y que haya celebrado un arreglo especial o un acuerdo con la Corte se niegue a cooperar en la ejecución de las solicitudes a que se refieran tal arreglo o acuerdo, la Corte podrá informar de ello a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiese remitido el asunto.

6. La Corte podrá solicitar de cualquier organización intergubernamental que le proporcione información o documentos. Asimismo, la Corte podrá solicitar otras formas de cooperación y asistencia que se hayan acordado con cualquiera de esas organizaciones, de conformidad con su competencia o mandato.

7. Cuando, en contravención de lo dispuesto en el presente Estatuto, un Estado Parte se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el presente Estatuto, ésta podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiese remitido el asunto.

Artículo 88

Procedimientos aplicables en el derecho interno

Los Estados Partes se asegurarán de que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en la presente parte.

Artículo 89

Entrega de personas a la Corte

1. La Corte podrá transmitir, junto con los antecedentes que la justifiquen de conformidad con el artículo 91, una solicitud de detención y entrega de una persona a todo Estado en cuyo territorio pueda hallarse y solicitará la cooperación de ese Estado. Los Estados Partes cumplirán las solicitudes de detención y entrega de conformidad con las disposiciones de la presente parte y el procedimiento establecido en su derecho interno.

2. Cuando la persona cuya entrega se pida la impugne ante un tribunal nacional oponiendo la excepción de cosa juzgada de conformidad con el artículo 20, el Estado requerido celebrará de inmediato consultas con la Corte para determinar si ha habido una decisión sobre la admisibilidad de la causa. Si la causa es admisible, el Estado requerido cumplirá la solicitud. Si está pendiente la decisión sobre la admisibilidad, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución de la solicitud de entrega hasta que la Corte adopte esa decisión.

3. a) El Estado Parte autorizará de conformidad con su derecho procesal el tránsito por su territorio de una persona que otro Estado entregue a la Corte, salvo cuando el tránsito por ese Estado obstaculice o demore la entrega;

b) La solicitud de la Corte de que se autorice ese tránsito será transmitida de conformidad con el artículo 87 y contendrá:

i) Una descripción de la persona que será transportada;

ii) Una breve exposición de los hechos de la causa y su tipificación; y

iii) La orden de detención y entrega;

c) La persona transportada permanecerá detenida durante el tránsito;

d) No se requerirá autorización alguna cuando la persona sea transportada por vía aérea y no se prevea aterrizar en el territorio del Estado de tránsito;

e) En caso de aterrizaje imprevisto en el territorio del Estado de tránsito, éste podrá pedir a la Corte que presente una solicitud de tránsito con arreglo a lo dispuesto en el apartado b). El Estado de tránsito detendrá a la persona transportada mientras se recibe la solicitud de la Corte y se efectúa el tránsito; sin embargo, la detención no podrá prolongarse más de 96 horas contadas desde el aterrizaje imprevisto si la solicitud no es recibida dentro de ese plazo.

4. Si la persona buscada está siendo enjuiciada o cumple condena en el Estado requerido por un crimen distinto de aquel por el cual se pide su entrega a la Corte, el Estado requerido, después de haber decidido conceder la entrega, celebrará consultas con la Corte.

Artículo 90

Solicitudes concurrentes

1. El Estado Parte que haya recibido una solicitud de la Corte relativa a la entrega de una persona de conformidad con el artículo 89, y reciba además una solicitud de cualquier otro Estado relativa a la extradición de la misma persona por la misma conducta que constituya la base del crimen en razón del cual la Corte ha pedido la entrega, notificará a la Corte y al Estado requirente ese hecho.

2. Si el Estado requirente es un Estado Parte, el Estado requerido dará prioridad a la solicitud de la Corte cuando ésta:

a) Haya determinado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 ó 19, que la causa respecto de la cual se solicita la entrega es admisible y en su decisión haya tenido en cuenta la investigación o el enjuiciamiento que lleva a cabo el Estado requirente con respecto a la solicitud de extradición que éste ha presentado; o

b) Adopte la decisión a que se refiere el apartado a) como consecuencia de la notificación efectuada por el Estado requerido de conformidad con el párrafo 1.

3. Cuando no se haya adoptado la decisión a que se hace referencia en el párrafo 2 a), el Estado requerido tendrá la facultad discrecional, hasta que se dicte la decisión de la Corte prevista en el párrafo 2 b), de dar curso a la solicitud de extradición presentada por el Estado requirente, pero no la hará efectiva hasta que la Corte haya resuelto que la causa es inadmisibile. La Corte adoptará su decisión en procedimiento sumario.

4. Si el Estado requirente no es parte en el presente Estatuto, el Estado requerido, en caso de que no esté obligado por alguna norma internacional a conceder la extradición al Estado requirente, dará prioridad a la solicitud de entrega que le haya hecho la Corte si ésta ha determinado que la causa era admisible.

5. Cuando la Corte no haya determinado la admisibilidad de una causa de conformidad con el párrafo 4, el Estado requerido tendrá la facultad discrecional de dar curso a la solicitud de extradición que le haya hecho el Estado requirente.

6. En los casos en que sea aplicable el párrafo 4, y salvo que el Estado requerido esté obligado por alguna norma internacional a extraditar la persona al Estado requirente que no sea parte en el presente Estatuto, el Estado requerido decidirá si hace la entrega a la Corte o concede la extradición al Estado requirente. Para tomar esta decisión, el Estado requerido tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, entre otros:

a) Las fechas respectivas de las solicitudes;

b) Los intereses del Estado requirente y, cuando proceda, si el crimen se cometió en su territorio y cuál es la nacionalidad de las víctimas y de la persona cuya entrega o extradición se ha solicitado; y

c) La posibilidad de que la Corte y el Estado requirente lleguen posteriormente a un acuerdo respecto de la entrega.

7. Cuando el Estado Parte que reciba una solicitud de la Corte de entrega de una persona reciba también una solicitud de otro Estado relativa a la

extradición de la misma persona por una conducta distinta de la que constituye el crimen en razón del cual la Corte solicita la entrega:

a) El Estado requerido, si no está obligado por ninguna norma internacional a conceder la extradición al Estado requirente, dará preferencia a la solicitud de la Corte;

b) El Estado requerido, si está obligado por una norma internacional a conceder la extradición al Estado requirente, decidirá si entrega la persona a la Corte o la extradita al Estado requirente. En esta decisión, el Estado requerido tendrá en cuenta todos los factores pertinentes y, entre otros, los enumerados en el párrafo 6, pero tendrá especialmente en cuenta la naturaleza y la gravedad relativas de la conducta de que se trate.

8. Cuando, como consecuencia de una notificación efectuada con arreglo al presente artículo, la Corte haya determinado la inadmisibilidad de una causa y posteriormente se deniegue la extradición al Estado requirente, el Estado requerido notificará su decisión a la Corte.

Artículo 91

Contenido de la solicitud de detención y entrega+

1. La solicitud de detención y entrega deberá formularse por escrito. En caso de urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada en la forma indicada en el párrafo 1 a) del artículo 87.

2. La solicitud de detención y entrega de una persona respecto de la cual la Sala de Cuestiones Preliminares haya dictado una orden de detención de conformidad con el artículo 58 deberá contener los elementos siguientes o ir acompañada de:

a) Información suficiente para la identificación de la persona buscada y datos sobre su probable paradero;

b) Una copia de la orden de detención; y

c) Los documentos, las declaraciones o la información que sean necesarios para cumplir los requisitos de procedimiento del Estado requerido relativos a la entrega; sin embargo, esos requisitos no podrán ser más onerosos que los aplicables a las solicitudes de extradición conforme a tratados o acuerdos celebrados por el Estado requerido y otros Estados y, de ser posible, serán menos onerosos, habida cuenta del carácter específico de la Corte.

3. La solicitud de detención y entrega del condenado deberá contener los siguientes elementos o ir acompañada de:

a) Copia de la orden de detención dictada en su contra;

b) Copia de la sentencia condenatoria;

c) Datos que demuestren que la persona buscada es aquella a la que se refiere la sentencia condenatoria; y

d) Si la persona que se busca ha sido ya condenada, copia de la sentencia y, en el caso de una pena de reclusión, una indicación de la parte de la pena que se ha cumplido y de la que queda por cumplir.

4. A solicitud de la Corte, un Estado Parte consultará con ésta, en general o con respecto a un asunto concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el apartado c) del párrafo 2 del presente artículo. En esas consultas, el Estado Parte comunicará a la Corte los requisitos específicos de su derecho interno.

Artículo 92

Detención provisional

1. En caso de urgencia, la Corte podrá solicitar la detención provisional de la persona buscada hasta que se presente la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen de conformidad con el artículo 91.

2. La solicitud de detención provisional deberá hacerse por cualquier medio que permita dejar constancia escrita y contendrá:

a) Información suficiente para identificar a la persona buscada y datos sobre su probable paradero;

b) Una exposición concisa de los crímenes por los que se pida la detención y de los hechos que presuntamente serían constitutivos de esos crímenes, inclusive, de ser posible, la indicación de la fecha y el lugar en que se cometieron;

c) Una declaración de que existe una orden de detención o una decisión final condenatoria respecto de la persona buscada; y

d) Una declaración de que se presentará una solicitud de entrega de la persona buscada.

3. La persona sometida a detención provisional podrá ser puesta en libertad si el Estado requerido no hubiere recibido la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen, de conformidad con el artículo 91, dentro del plazo fijado en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Sin embargo, el detenido podrá consentir en la entrega antes de que se cumpla dicho plazo siempre que lo permita el derecho interno del Estado requerido. En ese caso, el Estado requerido procederá a entregar al detenido a la Corte tan pronto como sea posible.

4. El hecho de que la persona buscada haya sido puesta en libertad de conformidad con el párrafo 3 no obstará para que sea nuevamente detenida y entregada una vez que el Estado requerido reciba la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen.

Artículo 93

Otras formas de cooperación

1. Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente parte y con los procedimientos de su derecho interno, deberán cumplir las solicitudes de asistencia formuladas por la Corte en relación con investigaciones o enjuiciamientos penales a fin de:

- a) Identificar y buscar personas u objetos;
- b) Practicar pruebas, incluidos los testimonios bajo juramento, y presentar pruebas, incluidos los dictámenes e informes periciales que requiera la Corte;
- c) Interrogar a una persona objeto de investigación o enjuiciamiento;
- d) Notificar documentos, inclusive los documentos judiciales;
- e) Facilitar la comparecencia voluntaria ante la Corte de testigos o expertos;
- f) Proceder al traslado provisional de personas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7; g) Realizar inspecciones oculares, inclusive la exhumación y el examen de cadáveres y fosas comunes;
- h) Practicar allanamientos y decomisos;
- i) Transmitir registros y documentos, inclusive registros y documentos oficiales;
- j) Proteger a víctimas y testigos y preservar pruebas;
- k) Identificar, determinar el paradero o inmovilizar el producto y los bienes y haberes obtenidos del crimen y de los instrumentos del crimen, o incautarse de ellos, con miras a su decomiso ulterior y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe; y
- l) Cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por la legislación del Estado requerido y destinada a facilitar la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de la competencia de la Corte.

2. La Corte podrá dar seguridades a los testigos o expertos que comparezcan ante ella de que no serán enjuiciados o detenidos ni se

restringirá su libertad personal por un acto u omisión anterior a su salida del Estado requerido.

3. Cuando la ejecución de una determinada medida de asistencia detallada en una solicitud presentada de conformidad con el párrafo 1 estuviera prohibida en el Estado requerido por un principio fundamental de derecho ya existente y de aplicación general, el Estado requerido celebrará sin demora consultas con la Corte para tratar de resolver la cuestión. En las consultas se debería considerar si se puede prestar la asistencia de otra manera o con sujeción a condiciones. Si, después de celebrar consultas, no se pudiera resolver la cuestión, la Corte modificará la solicitud según sea necesario.

4. El Estado Parte podrá no dar lugar a una solicitud de asistencia, en su totalidad o en parte, de conformidad con el artículo 72 y únicamente si la solicitud se refiere a la presentación de documentos o la divulgación de pruebas que afecten a su seguridad nacional.

5. Antes de denegar una solicitud de asistencia de conformidad con el párrafo 1 l), el Estado requerido considerará si se puede prestar la asistencia con sujeción a ciertas condiciones, o si es posible hacerlo en una fecha posterior o de otra manera. La Corte o el Fiscal, si aceptan la asistencia sujeta a condiciones, tendrán que cumplirlas.

6. Si no se da lugar a una solicitud de asistencia, el Estado Parte requerido deberá comunicar sin demora los motivos a la Corte o al Fiscal.

7. a) La Corte podrá solicitar el traslado provisional de un detenido a los fines de su identificación o de que preste testimonio o asistencia de otra índole. El traslado podrá realizarse siempre que:

i) El detenido dé su libre consentimiento; y

ii) El Estado requerido lo acepte, con sujeción a las condiciones que hubiere acordado con la Corte;

b) La persona trasladada permanecerá detenida. Una vez cumplidos los fines del traslado, la Corte la devolverá sin dilación al Estado requerido.

8. a) La Corte velará por la protección del carácter confidencial de los documentos y de la información, salvo en la medida en que éstos sean necesarios para la investigación y las diligencias pedidas en la solicitud;

b) El Estado requerido podrá, cuando sea necesario, transmitir al Fiscal documentos o información con carácter confidencial. El Fiscal únicamente podrá utilizarlos para reunir nuevas pruebas;

c) El Estado requerido podrá, de oficio o a solicitud del Fiscal, autorizar la divulgación ulterior de estos documentos o información, los cuales podrán

utilizarse como medios de prueba de conformidad con lo dispuesto en las partes V y VI y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

9. a) i) El Estado Parte que reciba solicitudes concurrentes de la Corte y de otro Estado de conformidad con una obligación internacional y que no se refieran a la entrega o la extradición, procurará, en consulta con la Corte y el otro Estado, atender ambas solicitudes, de ser necesario postergando o condicionando una de ellas;

ii) Si esto no fuera posible, la cuestión de las solicitudes concurrentes se resolverá de conformidad con los principios enunciados en el artículo 90;

b) Sin embargo, cuando la solicitud de la Corte se refiera a información, bienes o personas que estén sometidos al control de un tercer Estado o de una organización internacional en virtud de un acuerdo internacional, el Estado requerido lo comunicará a la Corte y la Corte dirigirá su solicitud al tercer Estado o a la organización internacional.

10. a) A solicitud de un Estado Parte que lleve a cabo una investigación o sustancie un juicio por una conducta que constituya un crimen de la competencia de la Corte o que constituya un crimen grave con arreglo al derecho interno del Estado requirente, la Corte podrá cooperar con él y prestarle asistencia;

b) i) La asistencia prestada de conformidad con el apartado a) podrá comprender, entre otras cosas:

a. La transmisión de declaraciones, documentos u otros elementos de prueba obtenidos en el curso de una investigación o de un proceso sustanciado por la Corte; y

b. El interrogatorio de una persona detenida por orden de la Corte;

ii) En el caso de la asistencia prevista en el apartado b) i) a.:

a. Si los documentos u otros elementos de prueba se hubieren obtenido con la asistencia de un Estado, su transmisión estará subordinada al consentimiento de dicho Estado;

b. Si las declaraciones, los documentos u otros elementos de prueba hubieren sido proporcionados por un testigo o un perito, su transmisión estará subordinada a lo dispuesto en el artículo 68;

c) La Corte podrá, de conformidad con el presente párrafo y en las condiciones enunciadas en él, acceder a una solicitud de asistencia presentada por un Estado que no sea parte en el presente Estatuto.

Artículo 94

Aplazamiento de la ejecución de una solicitud de asistencia con respecto a una investigación o un enjuiciamiento en curso

1. Si la ejecución inmediata de una solicitud de asistencia interfiere una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto de aquel al que se refiera la solicitud, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución por el tiempo que acuerde con la Corte. No obstante, el aplazamiento no excederá de lo necesario para concluir la investigación o el enjuiciamiento de que se trate en el Estado requerido. Antes de tomar la decisión de aplazar la ejecución de la solicitud, el Estado requerido debe considerar si se podrá prestar inmediatamente la asistencia con sujeción a ciertas condiciones.

2. Si, de conformidad con el párrafo 1, se decidiere aplazar la ejecución de una solicitud de asistencia, el Fiscal podrá en todo caso pedir que se adopten las medidas necesarias para preservar pruebas de conformidad con el párrafo 1 j) del artículo 93.

Artículo 95

Aplazamiento de la ejecución de una solicitud por haberse impugnado la admisibilidad de la causa Cuando la Corte proceda a examinar una impugnación de la admisibilidad de una causa de conformidad con los artículos 18 ó 19, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución de una solicitud hecha de conformidad con esta parte hasta que la Corte se pronuncie sobre la impugnación, a menos que ésta haya resuelto expresamente que el Fiscal podrá continuar recogiendo pruebas conforme a lo previsto en los artículos 18 ó 19.

Artículo 96

Contenido de la solicitud relativa a otras formas de asistencia de conformidad con el artículo 93

1. La solicitud relativa a otras formas de asistencia a que se hace referencia en el artículo 93 deberá hacerse por escrito. En caso de urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada en la forma indicada en el párrafo 1 a) del artículo 87.

2. La solicitud deberá contener los siguientes elementos o estar acompañada de, según proceda:

a) Una exposición concisa de su propósito y de la asistencia solicitada, incluidos los fundamentos jurídicos y los motivos de la solicitud;

b) La información más detallada posible acerca del paradero o la identificación de la persona o el lugar objeto de la búsqueda o la identificación, de forma que se pueda prestar la asistencia solicitada;

c) Una exposición concisa de los hechos esenciales que fundamentan la solicitud;

d) Las razones y la indicación detallada de cualquier procedimiento que deba seguirse o requisito que deba cumplirse;

e) Cualquier información que pueda ser necesaria conforme al derecho interno del Estado requerido para cumplir la solicitud; y

f) Cualquier otra información pertinente para que pueda prestarse la asistencia solicitada.

3. A solicitud de la Corte, todo Estado Parte consultará con la Corte, en general o respecto de un asunto concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el párrafo 2 e). En esas consultas, los Estados Partes comunicarán a la Corte las disposiciones específicas de su derecho interno.

4. Las disposiciones del presente artículo serán también aplicables, según proceda, con respecto a las solicitudes de asistencia hechas a la Corte.

Artículo 97

Consultas con la Corte

El Estado Parte que reciba una solicitud de conformidad con la presente parte celebrará sin dilación consultas con la Corte si considera que la solicitud le plantea problemas que puedan obstaculizar o impedir su cumplimiento. Esos problemas podrían ser, entre otros:

a) Que la información fuese insuficiente para cumplir la solicitud;

b) Que, en el caso de una solicitud de entrega, la persona no pudiera ser localizada, pese a los intentos realizados, o que en la investigación realizada se hubiere determinado claramente que la persona en el Estado requerido no es la indicada en la solicitud; o

c) Que el cumplimiento de la solicitud en su forma actual obligare al Estado requerido a no cumplir una obligación preexistente en virtud de un tratado con otro Estado.

Artículo 98

Cooperación con respecto a la renuncia a la inmunidad y consentimiento a la entrega

1. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que la Corte obtenga anteriormente la cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad.

2. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el consentimiento del Estado que envíe para entregar a la Corte a una persona

sujeta a la jurisdicción de ese Estado, a menos que ésta obtenga primero la cooperación del Estado que envíe para que dé su consentimiento a la entrega.

Artículo 99

Cumplimiento de las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 93 y 96

1. Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.

2. En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.

3. Las respuestas del Estado requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.

4. Sin perjuicio de los demás artículos de la presente parte, cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en él, el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado según se indica a continuación:

a) Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una decisión de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 ó 19, el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido;

b) En los demás casos, el Fiscal podrá ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte. Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con el presente apartado, celebrará consultas sin demora con la Corte para resolver la cuestión.

5. Las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacionales serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.

Artículo 100

Gastos

1. Los gastos ordinarios que se deriven del cumplimiento de las solicitudes en el territorio del Estado requerido correrán a cargo de éste, con excepción de los siguientes, que correrán a cargo de la Corte:

a) Gastos relacionados con el viaje y la seguridad de los testigos y peritos, o el traslado, con arreglo al artículo 93, de personas detenidas;

b) Gastos de traducción, interpretación y transcripción;

c) Gastos de viaje y dietas de los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario, el secretario adjunto y los funcionarios de cualquier órgano de la Corte;

d) Costo de los informes o dictámenes periciales solicitados por la Corte;

e) Gastos relacionados con el transporte de la persona que entregue a la Corte un Estado de detención; y

f) Previa consulta, todos los gastos extraordinarios que puedan ser resultado del cumplimiento de una solicitud.

2. Las disposiciones del párrafo 1 serán aplicables, según proceda, a las solicitudes hechas por los Estados Partes a la Corte. En ese caso, los gastos ordinarios que se deriven de su cumplimiento correrán a cargo de la Corte.

Artículo 101

Principio de la especialidad

1. Quien haya sido entregado a la Corte en virtud del presente Estatuto no será procesado, castigado o detenido por una conducta anterior a su entrega, a menos que ésta constituya la base del delito por el cual haya sido entregado.

2. La Corte podrá pedir al Estado que hizo la entrega que la dispense del cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo 1 y, si fuere necesario, proporcionará información adicional de conformidad con el artículo 91. Los Estados Partes estarán facultados para dar esa dispensa a la Corte y procurarán hacerlo.

Artículo 102

Términos empleados

A los efectos del presente Estatuto:

- a) Por "entrega" se entenderá la entrega de una persona por un Estado a la Corte de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto;
- b) Por "extradición" se entenderá la entrega de una persona por un Estado a otro Estado de conformidad con lo dispuesto en un tratado o convención o en el derecho interno.

PARTE X. DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

Artículo 103

Función de los Estados en la ejecución de las penas privativas de libertad

- 1. a) La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado por la Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir condenados;
 - b) En el momento de declarar que está dispuesto a recibir condenados, el Estado podrá poner condiciones a reserva de que sean aceptadas por la Corte y estén en conformidad con la presente parte;
 - c) El Estado designado en un caso determinado indicará sin demora a la Corte si acepta la designación.
2. a) El Estado de ejecución de la pena notificará a la Corte cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento de las condiciones aceptadas con arreglo al párrafo 1, que pudieren afectar materialmente a las condiciones o la duración de la privación de libertad. Las circunstancias conocidas o previsibles deberán ponerse en conocimiento de la Corte con una antelación mínima de 45 días. Durante este período, el Estado de ejecución no adoptará medida alguna que redunde en perjuicio de lo dispuesto en el artículo 110;
- b) La Corte, si no puede aceptar las circunstancias a que se hace referencia en el apartado a), lo notificará al Estado de ejecución y procederá de conformidad con el párrafo 1 del artículo 104.
3. La Corte, al ejercer su facultad discrecional de efectuar la designación prevista en el párrafo 1, tendrá en cuenta:
- a) El principio de que los Estados Partes deben compartir la responsabilidad por la ejecución de las penas privativas de libertad de conformidad con los principios de distribución equitativa que establezcan las Reglas de Procedimiento y Prueba;

- b) La aplicación de normas de tratados internacionales generalmente aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos;
- c) La opinión del condenado;
- d) La nacionalidad del condenado; y
- e) Otros factores relativos a las circunstancias del crimen o del condenado, o a la ejecución eficaz de la pena, según procedan en la designación del Estado de ejecución.

4. De no designarse un Estado de conformidad con el párrafo 1, la pena privativa de libertad se cumplirá en el establecimiento penitenciario que designe el Estado anfitrión, de conformidad con las condiciones estipuladas en el acuerdo relativo a la sede a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 3. En ese caso, los gastos que entrañe la ejecución de la pena privativa de libertad serán sufragados por la Corte.

Artículo 104

Cambio en la designación del Estado de ejecución

- 1. La Corte podrá en todo momento decidir el traslado del condenado a una prisión de un Estado distinto del Estado de ejecución.
- 2. El condenado podrá en todo momento solicitar de la Corte su traslado del Estado de ejecución.

Artículo 105

Ejecución de la pena

- 1. Con sujeción a las condiciones que haya establecido un Estado de conformidad con el párrafo 1 b) del artículo 103, la pena privativa de libertad tendrá carácter obligatorio para los Estados Partes, los cuales no podrán modificarla en caso alguno.
- 2. La decisión relativa a cualquier solicitud de apelación o revisión incumbirá exclusivamente a la Corte. El Estado de ejecución no pondrá obstáculos para que el condenado presente una solicitud de esa índole.

Artículo 106

Supervisión de la ejecución de la pena y condiciones de reclusión

- 1. La ejecución de una pena privativa de libertad estará sujeta a la supervisión de la Corte y se ajustará a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos.
- 2. Las condiciones de reclusión se regirán por la legislación del Estado de ejecución y se ajustarán a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos; en todo

caso, no serán ni más ni menos favorables que las aplicadas a los reclusos condenados por delitos similares en el Estado de ejecución.

3. La comunicación entre el condenado y la Corte será irrestricta y confidencial.

Artículo 107

Traslado una vez cumplida la pena

1. Una vez cumplida la pena, quien no sea nacional del Estado de ejecución podrá, de conformidad con la legislación de dicho Estado, ser trasladado al Estado que esté obligado a aceptarlo o a otro Estado que esté dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta si quiere ser trasladado a éste, a menos que el Estado de ejecución lo autorice a permanecer en su territorio.

2. Los gastos derivados del traslado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, de no ser sufragados por un Estado, correrán por cuenta de la Corte.

3. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 108, el Estado de ejecución también podrá, de conformidad con su derecho interno, extraditar o entregar por cualquier otra vía a la persona a un Estado que haya pedido la extradición o entrega para someterla a juicio o para que cumpla una pena.

Artículo 108

Limitaciones al enjuiciamiento o la sanción por otros delitos

1. El condenado que se halle bajo la custodia del Estado de ejecución no será sometido a enjuiciamiento, sanción o extradición a un tercer Estado por una conducta anterior a su entrega al Estado de ejecución, a menos que, a petición de éste, la Corte haya aprobado el enjuiciamiento, la sanción o la extradición.

2. La Corte dirimirá la cuestión tras haber oído al condenado.

3. El párrafo 1 del presente artículo no será aplicable si el condenado

permanece de manera voluntaria durante más de 30 días en el territorio del Estado de ejecución después de haber cumplido la totalidad de la pena impuesta por la Corte o si regresa al territorio de ese Estado después de haber salido de él.

Artículo 109

Ejecución de multas y órdenes de decomiso

1. Los Estados Partes harán efectivas las multas u órdenes de decomiso decretadas por la Corte en virtud de la Parte VII, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe y de conformidad con el procedimiento establecido en su derecho interno.

2. El Estado Parte que no pueda hacer efectiva la orden de decomiso adoptará medidas para cobrar el valor del producto, los bienes o los haberes cuyo decomiso hubiere decretado la Corte, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

3. Los bienes, o el producto de la venta de bienes inmuebles o, según proceda, la venta de otros bienes que el Estado Parte obtenga al ejecutar una decisión de la Corte serán transferidos a la Corte.

Artículo 110

Examen de una reducción de la pena

1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Artículo 111

Evasión

Si un condenado se evade y huye del Estado de ejecución, éste podrá, tras consultar a la Corte, pedir al Estado en que se encuentre que lo entregue

de conformidad con los acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes, o podrá pedir a la Corte que solicite la entrega de conformidad con la Parte IX. La Corte, si solicita la entrega, podrá resolver que el condenado sea enviado al Estado en que cumplía su pena o a otro Estado que indique.

PARTE XI. DE LA ASAMBLEA DE LOS ESTADOS PARTES

Artículo 112

Asamblea de los Estados Partes

1. Se instituye una Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto. Cada Estado Parte tendrá un representante en la Asamblea que podrá hacerse acompañar de suplentes y asesores. Otros Estados signatarios del presente Estatuto o del Acta Final podrán participar en la Asamblea a título de observadores.

2. La Asamblea:

- a) Examinará y aprobará, según proceda, las recomendaciones de la Comisión Preparatoria;
- b) Ejercerá su supervisión respecto de la Presidencia, el Fiscal y la Secretaría en las cuestiones relativas a la administración de la Corte;
- c) Examinará los informes y las actividades de la Mesa establecida en el párrafo 3 y adoptará las medidas que procedan a ese respecto;
- d) Examinará y decidirá el presupuesto de la Corte;
- e) Decidirá si corresponde, de conformidad con el artículo 36, modificar el número de magistrados;
- f) Examinará cuestiones relativas a la falta de cooperación de conformidad con los párrafos 5 y 7 del artículo 87;
- g) Desempeñará las demás funciones que procedan en virtud del presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.

3. a) La Asamblea tendrá una Mesa, que estará compuesta de un Presidente, dos Vicepresidentes y 18 miembros elegidos por la Asamblea por periodos de tres años;

b) La Mesa tendrá carácter representativo, teniendo en cuenta, en particular, el principio de la distribución geográfica equitativa y la representación adecuada de los principales sistemas jurídicos del mundo;

c) La Mesa se reunirá con la periodicidad que sea necesaria, pero por lo menos una vez al año, y prestará asistencia a la Asamblea en el desempeño de sus funciones.

4. La Asamblea podrá establecer los órganos subsidiarios que considere necesarios, incluido un mecanismo de supervisión independiente que se encargará de la inspección, la evaluación y la investigación de la Corte a fin de mejorar su eficiencia y economía.

5. El Presidente de la Corte, el Fiscal y el Secretario o sus representantes podrán, cuando proceda, participar en las sesiones de la Asamblea y de la Mesa.

6. La Asamblea se reunirá en la sede de la Corte o en la Sede de las Naciones Unidas una vez al año y, cuando las circunstancias lo exijan, celebrará períodos extraordinarios de sesiones. Salvo que se indique otra cosa en el presente Estatuto, los períodos extraordinarios de sesiones serán convocados por la Mesa de oficio o a petición de un tercio de los Estados Partes.

7. Cada Estado Parte tendrá un voto. La Asamblea y la Mesa harán todo lo posible por adoptar sus decisiones por consenso. Si no se pudiere llegar a un consenso y salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa:

a) Las decisiones sobre cuestiones de fondo serán aprobadas por mayoría de dos tercios de los presentes y votantes, a condición de que una mayoría absoluta de los Estados Partes constituirá el quórum para la votación;

b) Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se tomarán por mayoría simple de los Estados Partes presentes y votantes.

8. El Estado Parte que esté en mora en el pago de sus contribuciones financieras a los gastos de la Corte no tendrá voto en la Asamblea ni en la Mesa cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las contribuciones adeudadas por los dos años anteriores completos. La Asamblea podrá, sin embargo, permitir que dicho Estado vote en ella y en la Mesa si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del Estado Parte.

9. La Asamblea aprobará su propio reglamento.

10. Los idiomas oficiales y de trabajo de la Asamblea serán los de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

PARTE XII. DE LA FINANCIACIÓN

Artículo 113

Reglamento Financiero

Salvo que se prevea expresamente otra cosa, todas las cuestiones financieras relacionadas con la Corte y con las reuniones de la Asamblea de los Estados Partes, inclusive su Mesa y sus órganos subsidiarios, se regirán por el presente Estatuto y por el Reglamento Financiero y

Reglamentación Financiera Detallada que apruebe la Asamblea de los Estados Partes.

Artículo 114

Pago de los gastos

Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes, incluidos los de su Mesa y órganos subsidiarios, se sufragarán con fondos de la Corte.

Artículo 115

Fondos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes

Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes, inclusive su Mesa y sus órganos subsidiarios, previstos en el presupuesto aprobado por la Asamblea de los Estados Partes, se sufragarán con cargo a:

- a) Cuotas de los Estados Partes;
- b) Fondos procedentes de las Naciones Unidas, con sujeción a la aprobación de la Asamblea General, en particular respecto de los gastos efectuados en relación con cuestiones remitidas por el Consejo de Seguridad.

Artículo 116

Contribuciones voluntarias

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 115, la Corte podrá recibir y utilizar, en calidad de fondos adicionales, contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades, de conformidad con los criterios en la materia que adopte la Asamblea de los Estados Partes.

Artículo 117

Prorrateo de las cuotas

Las cuotas de los Estados Partes se prorratearán de conformidad con una escala de cuotas convenida basada en la escala adoptada por las Naciones Unidas para su presupuesto ordinario y ajustada de conformidad con los principios en que se basa dicha escala.

Artículo 118

Comprobación anual de cuentas

Los registros, los libros y las cuentas de la Corte, incluidos sus estados financieros anuales, serán verificados anualmente por un auditor independiente.

PARTE XIII. CLÁUSULAS FINALES

Artículo 119

Solución de controversias

1. Las controversias relativas a las funciones judiciales de la Corte serán dirimidas por ella.
2. Cualquier otra controversia que surja entre dos o más Estados Partes respecto de la interpretación o aplicación del presente Estatuto que no se resuelva mediante negociaciones en un plazo de tres meses contado desde el comienzo de la controversia será sometida a la Asamblea de los Estados Partes. La Asamblea podrá tratar de resolver por sí misma la controversia o recomendar otros medios de solución, incluida su remisión a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de ésta.

Artículo 120

Reservas

No se admitirán reservas al presente Estatuto.

Artículo 121

Enmiendas

1. Transcurridos siete años desde la entrada en vigor del presente Estatuto, cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas a él. El texto de la enmienda propuesta será presentado al Secretario General de las Naciones Unidas, que lo distribuirá sin dilación a los Estados Partes.
2. Transcurridos no menos de tres meses desde la fecha de la notificación, la Asamblea de los Estados Partes decidirá en su próxima reunión, por mayoría de los presentes y votantes, si ha de examinar la propuesta, lo cual podrá hacer directamente o previa convocación de una Conferencia de Revisión si la cuestión lo justifica.
3. La aprobación de una enmienda en una reunión de la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisión en la que no sea posible llegar a un consenso requerirá una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.
4. Salvo lo dispuesto en el párrafo 5, toda enmienda entrará en vigor respecto de los Estados Partes un año después de que los siete octavos de éstos hayan depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas sus instrumentos de ratificación o de adhesión.
5. Las enmiendas a los artículos 5, 6, 7 y 8 del presente Estatuto entrarán en vigor únicamente respecto de los Estados Partes que las hayan aceptado un año después del depósito de sus instrumentos de ratificación o aceptación. La Corte no ejercerá su competencia respecto de un crimen

comprendido en la enmienda cuando haya sido cometido por nacionales o en el territorio de un Estado Parte que no haya aceptado la enmienda.

6. Si una enmienda ha sido aceptada por los siete octavos de los Estados Partes de conformidad con el párrafo 4, el Estado Parte que no la haya aceptado podrá denunciar el presente Estatuto con efecto inmediato, no obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 127 pero con sujeción al párrafo 2 de dicho artículo, mediante notificación hecha a más tardar un año después de la entrada en vigor de la enmienda.

7. El Secretario General de las Naciones Unidas distribuirá a los Estados Partes las enmiendas aprobadas en una reunión de la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisión.

Artículo 122

Enmiendas a disposiciones de carácter institucional

1. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 121, cualquier Estado Parte podrá proponer en cualquier momento enmiendas a las disposiciones del presente Estatuto de carácter exclusivamente institucional, a saber, el artículo 35, los párrafos 8 y 9 del artículo 36, el artículo 37, el artículo 38, el párrafo 1 (dos primeras oraciones), 2 y 4 del artículo 39, los párrafos 4 a 9 del artículo 42, los párrafos 2 y 3 del artículo 43 y los artículos 44, 46, 47 y 49. El texto de la enmienda propuesta será presentado al Secretario General de las Naciones Unidas o a la persona designada por la Asamblea de los Estados Partes, que lo distribuirá sin demora a los Estados Partes y a otros participantes en la Asamblea.

2. Las enmiendas presentadas con arreglo al presente artículo respecto de las cuales no sea posible llegar a un consenso serán aprobadas por la Asamblea de los Estados Partes o por una Conferencia de Revisión por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes. Esas enmiendas entrarán en vigor respecto de los Estados Partes seis meses después de su aprobación por la Asamblea o, en su caso, por la Conferencia.

Artículo 123

Revisión del Estatuto

1. Siete años después de que entre en vigor el presente Estatuto, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará una Conferencia de Revisión de los Estados Partes para examinar las enmiendas al Estatuto. El examen podrá comprender la lista de los crímenes indicados en el artículo 5 pero no se limitará a ellos. La Conferencia estará abierta a los participantes en la Asamblea de los Estados Partes y en las mismas condiciones que ésta. 2. Posteriormente, en cualquier momento, a petición de un Estado Parte y a los efectos indicados en el párrafo 1, el Secretario General de las Naciones Unidas, previa la aprobación de una mayoría de los Estados Partes, convocará una Conferencia de Revisión de los Estados Partes.

3. Las disposiciones de los párrafos 3 a 7 del artículo 121 serán aplicables a la aprobación y entrada en vigor de toda enmienda del Estatuto examinada en una Conferencia de Revisión.

Artículo 124

Disposición de transición

No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 12, un Estado, al hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio. La declaración formulada de conformidad con el presente artículo podrá ser retirada en cualquier momento. Lo dispuesto en el presente artículo será reconsiderado en la Conferencia de Revisión que se convoque de conformidad con el párrafo 1 del artículo 123.

Artículo 125

Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. El presente Estatuto estará abierto a la firma de todos los Estados el 17 de julio de 1998 en Roma, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Posteriormente, y hasta el 17 de octubre de 1998, seguirá abierto a la firma en Roma, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Después de esa fecha, el Estatuto estará abierto a la firma en Nueva York, en la Sede de las Naciones Unidas, hasta el 31 de diciembre del año 2000.

2. El presente Estatuto estará sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. El presente Estatuto estará abierto a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 126

Entrada en vigor

1. El presente Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el presente Estatuto o se adhiera a él después de que sea depositado el sexagésimo

instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 127

Denuncia

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Estatuto mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación, a menos que en ella se indique una fecha ulterior.

2. La denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era parte en él, en particular las obligaciones financieras que hubiere contraído. La denuncia no obstará a la cooperación con la Corte en el contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos penales en relación con los cuales el Estado denunciante esté obligado a cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia surta efecto; la denuncia tampoco obstará en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante sí antes de la fecha en que la denuncia surta efecto.

Artículo 128

Textos auténticos

El original del presente Estatuto, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copia certificada a todos los Estados.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Estatuto.

HECHO EN ROMA, el día diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho.

ANEXO II
LISTA DE RATIFICACIONES DEL ESTATUTO DE ROMA

Participantes	Firma	Ratificación
Albania	el 18 de julio de 1998	
Argelia	28 DEC 2000	
Andorra	el 18 de julio de 1998	el 30 de abril de 2001
Angola	el 7 de oct de 1998	
Antigua y barbuda	el 23 de oct de 1998	el 18 de junio de 2001
La Argentina	el 8 de enero de 1999	el 8 de febrero de 2001
Armenia	el 1 de oct de 1999	
Australia	9 DEC 1998	el 1 de julio de 2002
Austria	el 7 de oct de 1998	28 DEC 2000
Bahamas	29 DEC 2000	
Bahrein	11 DEC 2000	
Bangladesh	el 16 de sept de 1999	
Barbados	el 8 de sept de 2000	
Bélgica	el 10 de sept de 1998	el 28 de junio de 2000
Belice	el 5 de abril de 2000	el 5 de abril de 2000
Benin	el 24 de sept de 1999	el 22 de enero de 2002
Bolivia	el 17 de julio de 1998	el 27 de junio de 2002
Bosnia y Herzegovina	el 17 de julio de 2000	el 11 de abril de 2002
Botswana	el 8 de sept de 2000	el 8 de sept de 2000
El Brasil	el 7 de febrero de 2000	el 20 de junio de 2002
Bulgaria	el 11 de febrero de 1999	el 11 de abril de 2002

Burkina Faso	el 30 de nov de 1998	
Burundi	el 13 de enero de 1999	
Camboya	el 23 de oct de 2000	el 11 de abril de 2002
Camerún	el 17 de julio de 1998	
Canadá	18 DEC 1998	el 7 de julio de 2000
Cabo Verde	28 DEC 2000	
República De Africano Central	7 DEC 1999	el 3 de oct de 2001
Sábaló	el 20 de oct de 1999	
Chile	el 11 de sept de 1998	
Colombia	10 DEC 1998	el 5 de agosto de 2002
El Comoro	el 22 de sept de 2000	
Congo	el 17 de julio de 1998	
Costa Rica	el 7 de oct de 1998	el 7 de junio de 2001
D'Ivoire de Côte	el 30 de nov de 1998	
Croacia	el 12 de oct de 1998	el 21 de mayo de 2001
Chipre	el 15 de oct de 1998	el 7 de marcha de 2002
República Checa	el 13 de abril de 1999	
República democrática del Congo	el 8 de sept de 2000	el 11 de abril de 2002
Dinamarca	el 25 de sept de 1998	el 21 de junio de 2001
Djibouti	el 7 de oct de 1998	
Dominica		el 12 de febrero 2001 de a

República Dominicana	el 8 de sept de 2000	
Ecuador	el 7 de oct de 1998	el 5 de febrero de 2002
Egipto	26 DEC 2000	
Eritrea	el 7 de oct de 1998	
Estonia	27 DEC 1999	el 30 de enero de 2002
Fiji	el 29 de nov de 1999	el 29 de nov de 1999
Finlandia	el 7 de oct de 1998	29 DEC 2000
Francia	el 18 de julio de 1998	el 9 de junio de 2000
Gabón	22 DEC 1998	el 20 de sept de 2000
Gambia	4 DEC 1998	el 28 de junio de 2002
Georgia	el 18 de julio de 1998	
Alemania	10 DEC 1998	11 DEC 2000
Ghana	el 18 de julio de 1998	20 DEC 1999
Grecia	el 18 de julio de 1998	el 15 de mayo de 2002
Guinea	el 7 de sept de 2000	
Guinea-Bissau	el 12 de sept de 2000	
Guyana	28 DEC 2000	
Haití	el 26 de febrero de 1999	
Honduras	el 7 de oct de 1998	el 1 de julio de 2002
Hungría	el 15 de enero de 1999	el 30 de nov de 2001
Islandia	el 26 de agosto de 1998	el 25 de mayo de 2000

Irán (república islámica de)	31 DEC 2000	
Irlanda	el 7 de oct de 1998	el 11 de abril de 2002
Israel	31 DEC 2000	
Italia	el 18 de julio de 1998	el 26 de julio de 1999
Jamaica	el 8 de sept de 2000	
Jordania	el 7 de oct de 1998	el 11 de abril de 2002
Kenia	el 11 de agosto de 1999	
Kuwait	el 8 de sept de 2000	
Kyrgyzstan	8 DEC 1998	
Latvia	el 22 de abril de 1999	el 28 de junio de 2002
Lesotho	el 30 de nov de 1998	el 6 de sept de 2000
Liberia	el 17 de julio de 1998	
Liechtenstein	el 18 de julio de 1998	el 2 de oct de 2001
Lituania	10 DEC 1998	
Luxemburgo	el 13 de oct de 1998	el 8 de sept de 2000
Madagascar	el 18 de julio de 1998	
Malawi	el 2 de marcha de 1999	el 19 de sept de 2002
Malí	el 17 de julio de 1998	el 16 de agosto de 2000
Malta	el 17 de julio de 1998	
Forme Las Islas	el 6 de sept de 2000	7 DEC 2000
Isla Mauricio	el 11 de nov de 1998	el 5 de marcha de 2002
México	el 7 de sept de 2000	

Mónaco	el 18 de julio de 1998	
Mongolia	29 DEC 2000	el 11 de abril de 2002
Marruecos	el 8 de sept de 2000	
Mozambique	28 DEC 2000	
Namibia	el 27 de oct de 1998	el 25 de junio de 2002
Nauru	13 DEC 2000	el 12 de nov de 2001
Países Bajos	el 18 de julio de 1998	El 17 De Julio 2001 De A
Zealand Nuevo	el 7 de oct de 1998	el 7 de sept de 2000
Niger	el 17 de julio de 1998	el 11 de abril de 2002
Nigeria	el 1 de junio de 2000	el 27 de sept de 2001
Noruega	el 28 de agosto de 1998	el 16 de febrero de 2000
Omán	20 DEC 2000	
Panamá	el 18 de julio de 1998	el 21 de marcha de 2002
Paraguay	el 7 de oct de 1998	el 14 de mayo de 2001
Perú	7 DEC 2000	el 10 de nov de 2001
Filipinas	28 DEC 2000	
Polonia	el 9 de abril de 1999	el 12 de nov de 2001
Portugal	el 7 de oct de 1998	el 5 de febrero de 2002
República de Corea	el 8 de marcha de 2000	
República de Moldova	el 8 de sept de 2000	
Rumania	el 7 de julio de 1999	el 11 de abril de 2002
Federación Rusa	el 13 de sept de 2000	

Santo Lucia	el 27 de agosto de 1999	
Samoa	el 17 de julio de 1998	el 16 de sept de 2002
San Marino	el 18 de julio de 1998	el 13 de mayo de 1999
Tomo de sao y Príncipe	28 DEC 2000	
Senegal	el 18 de julio de 1998	el 2 de febrero de 1999
Seychelles	28 DEC 2000	
Sierra Leone	el 17 de oct de 1998	el 15 de sept de 2000
Eslovaquia	23 DEC 1998	el 11 de abril de 2002
Eslovenia	el 7 de oct de 1998	31 DEC 2001
Islas De Solomon	3 DEC 1998	
África Del sur	el 17 de julio de 1998	el 27 de nov de 2000
España	el 18 de julio de 1998	el 24 de oct de 2000
Sudán	el 8 de sept de 2000	
Suecia	el 7 de oct de 1998	el 28 de junio de 2001
Suiza	el 18 de julio de 1998	el 12 de oct de 2001
República Árabe Siria	el 29 de nov de 2000	
Tajikistan	el 30 de nov de 1998	el 5 de mayo de 2000
Tailandia	el 2 de oct de 2000	
La república yugoslava anterior de Macedonia	el 7 de oct de 1998	el 6 de marcha de 2002
Timor-Leste		el 6 de sept 2002 de a
Trinidad y Trinidad y Tobago	el 23 de marcha de 1999	el 6 de abril de 1999

Uganda	el 17 de marcha de 1999	el 14 de junio de 2002
Ucrania	el 20 de enero de 2000	
Emiratos Árabes Unidos	el 27 de nov de 2000	
Reino unido de grandes Gran Bretaña e Irlanda del Norte	el 30 de nov de 1998	el 4 de oct de 2001
República unida de Tanzania	29 DEC 2000	el 20 de agosto de 2002
Uruguay	19 DEC 2000	el 28 de junio de 2002
Uzbekistan	29 DEC 2000	
Venezuela	el 14 de oct de 1998	el 7 de junio de 2000
Yemen	28 DEC 2000	
Yugoslavia	19 DEC 2000	el 6 de sept de 2001
Zambia	el 17 de julio de 1998	
Zimbabwe	el 17 de julio de 1998	